

DISPOSICIONES DEL CGTSP

SOBRE EL

CÓDIGO PENAL

Danilo Rivero García



EDICIONES ONBC
La Habana 2007

© Danilo Rivero García, 2007

© Sobre la presente edición:
Organización Nacional de
Bufetes Colectivos ONBC, 2007

**Prohibida la reproducción parcial o total de esta obra,
por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización
expresa de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos**

Edición y diagramación

computarizadas: Lic. Patricia Torralba Gil

Diseño interior y de cubierta: René Alfara Leyva

ISBN 978-959-7066-20-0

Obra editada e impresa por:

Ediciones ONBC

Calle 23, No. 807 (altos), entre A y B, El Vedado,

Ciudad de La Habana, 10400, Cuba

Teléfono: 8308155

E-mail: editora.23ya@onbc.cu

Índice

Palabras introductorias / 1

Libro Primero. Parte General / 3

Título I — Disposiciones Preliminares / 3

Título II — La eficacia de la ley penal / 3

Capítulo 1. La eficacia de la ley penal en el tiempo / 3

Capítulo 2. La eficacia de la ley penal en el espacio / 4

Título III — La ejecución de sentencia extranjera / 4

Título IV — El delito / 5

Capítulo 1. El concepto de delito / 5

Capítulo 2. Los delitos intencionales y por imprudencia / 6

Capítulo 3. La unidad y pluralidad de acciones y delitos / 8

Capítulo 4. El delito consumado, la tentativa y los actos preparatorios / 10

Capítulo 5. El delito imposible / 10

Capítulo 6. El lugar y tiempo de la acción / 10

Título V — La responsabilidad penal / 10

Capítulo 1. Personas penalmente responsables / 10

Capítulo 2. La participación / 10

Capítulo 3. Las eximentes de responsabilidad penal / 10

Título VI — Las sanciones / 11

Capítulo 1. Los fines de la sanción / 11

Capítulo 2. Las clases de sanciones / 11

Capítulo 3. Las sanciones principales / 11

Sección Primera. La sanción de muerte / 11

Sección Segunda. La Privación de libertad / 12

Sección Tercera. El trabajo correccional con internamiento / 18

Sección Cuarta. El trabajo correccional sin internamiento / 22

Sección Quinta. La limitación de libertad / 23

Sección Sexta. La multa / 24

Sección Séptima. La amonestación / 27

Capítulo 4. Las sanciones accesorias / 27

Aspectos procesales de carácter general / 27

Sección Primera. La privación de derechos / 28

Sección Segunda. La privación o suspensión de los derechos
paterno filiales / 28

Sección Tercera. La prohibición del ejercicio de una profesión,
cargo u oficio / 28

Sección Cuarta. La suspensión de la licencia de conducción/ 28

Sección Quinta. La prohibición de frecuentar medios
o lugares determinados / 29

Sección Sexta. El destierro / 29

Sección Séptima. El comiso / 29

Sección Octava. La confiscación de bienes / 32

Sección Novena. La sujeción a la vigilancia de los Órganos y Organismos que integran la Comisiones de Prevención y Atención Social /	32
Sección Décima. La expulsión de extranjeros del territorio nacional /	32
Capítulo 5. La adecuación de la sanción /	32
Sección Primera. Disposiciones Generales /	32
Relación de Instrucciones y Dictámenes sobre particulares instituciones /	36
Sección Segunda. La adecuación de la sanción en los delitos por imprudencia /	36
Sección Tercera. La adecuación de la sanción en los actos preparatorios y la tentativa /	37
Sección Cuarta. La adecuación de la sanción en cuanto a los autores y cómplices /	37
Sección Quinta. La incomunicabilidad de las circunstancias /	37
Sección Sexta. Las circunstancias atenuantes o agravantes /	37
Sección Séptima. La atenuación y agravación extraordinaria de la sanción /	37
Sección Octava. La reincidencia y multirreincidencia /	39
Sección Novena. La sanción conjunta /	43
Capítulo 6. La remisión condicional de la sanción de privación de libertad /	46
Título VII — La libertad condicional /	48
Título VIII — La extinción de la responsabilidad penal /	50
Título IX — Los antecedentes penales /	51
Título X — La declaración y ejecución de las obligaciones civiles provenientes del delito /	51
Título XI — El estado peligroso y las medidas de seguridad /	56
Libro Segundo. Parte Especial /	59
Título I. Delitos contra la Seguridad del Estado /	59
Título II. Delitos contra la administración y la jurisdicción /	59
Título III. Delitos contra la seguridad colectiva /	68
Título IV. Delitos contra el orden público /	73
Título V. Delitos contra la economía nacional /	73
Título VI. Delitos contra el patrimonio cultural /	76
Título VII. Delitos contra la fe pública /	76
Título VIII. Delitos contra la vida y la integridad corporal /	79
Título IX. Delitos contra los derechos individuales /	82
Título X. Delitos contra los derechos laborales /	82
Título XI. Delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales y contra la familia, la infancia y la juventud /	83
Título XII. Delitos contra el honor /	88
Título XIII. Delitos contra los derechos patrimoniales /	89
Título XIV. Delitos contra la hacienda pública /	98
Título XV. Delitos contra el normal tráfico migratorio /	100
Abreviaturas /	101

PALABRAS INTRODUCTORIAS

El presente estudio, es la conclusión de los publicados sobre el Código Penal; el primero, en el 2004 bajo el título **Resumen de Dictámenes del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular referidos a las sanciones**; luego, en el 2006, **La Sanción Penal**; y finalmente, en el año en curso -2007-, **Disposiciones del CGTSP sobre la Parte General del Código Penal**. Los dos últimos, fruto de una labor conjunta con el Profesor Carlos Trujillo, joven de gran valía.

El trabajo que ahora someto a su consideración, comprende totalmente el Código Penal. Siguiendo la idea original, lo dedico a los juristas y trabajadores judiciales espirituanos, en particular, a un grupo de preciados compañeros de esa provincia, quienes consagraron la mayor parte, o toda su **vida laboral** a los Tribunales, y para mí constituyeron un ejemplo en los años que trabajamos juntos (1979-1988); estos son: Orestes Madrigal Arcia (Presidente del Tribunal Provincial), José Francisco Valdivia (Presidente de Sala), Miguel Herrera Montesinos (Presidente de Sala), Olga Salgado (Secretaria del TMP de Cabaiguán), Eneira Sánchez y Adela Carmona Valero (Secretarias auxiliares del TMP de Cabaiguán), Luis Valdivia (Secretario del Pleno del TPP), Luis Grau Monedero (Secretario del TMP de Fomento), Emilio Martínez y Rubén Zayas Montalbán (Secretarios del TMP de Trinidad) y Juan José Peñafiel Parra (Secretario del TMP de Jatibonico); de ellos, unos disfrutaban de una merecida jubilación, otros, no existen físicamente.

De acuerdo con el artículo 121 de la Constitución de la República, el Tribunal Supremo Popular (TSP), “[...] a través de su Consejo de Gobierno ejerce la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, toma decisiones y dicta normas de obligado cumplimiento por todos los Tribunales y, sobre la base de la experiencia de estos, imparte instrucciones de carácter obligatorio para establecer una práctica judicial uniforme en la interpretación de la ley”. La citada norma constitucional, fue desarrollada otrora por la Ley de Organización del Sistema Judicial, y luego, por las leyes de Tribunales con sus correspondientes reglamentos.

El trabajo consiste, en un resumen, transcripción íntegra o de lo pertinente, según el caso, de las instrucciones, dictámenes y fundamentales acuerdos circulares —en ese orden se aluden dentro de cada clase cronológicamente—, con breves comentarios en ocasiones, los que estarán precedidos por un asterisco (*), que guardan relación con el Código Penal.

Resumir o seleccionar qué parte de la disposición se debe transcribir, es una difícil tarea, por los riesgos que ello implica ante posibles interpretaciones inadecuadas u omisiones, pero la asumo con gusto por lo provechoso de la labor. La finalidad del documento, no es otra que informar y orientar al jurista, el que inevitablemente tendrá que acudir a la lectura íntegra de la resolución para su cabal entendimiento.

De manera que se pueda tener una idea del volumen de dichas disposiciones, desde 1974 y hasta el 1ro de octubre de 2007, se han acordado 185 Instrucciones: la No. 1 data de 10 de enero de 1974, y la última, la No. 185 bis, se emitió con fecha 18 de julio de 2007. De estas, una gran parte corresponden a la materia penal. En cuanto a los Dictámenes, se han producido hasta la fecha —antes indicada— 424; el Dictamen No. 1 corresponde al 29 de marzo de 1978, y el último, el No. 424, se acordó el 21 de julio de 2004. De estos, 225 tratan o hacen referencia a la materia penal, lo que constituye 54 % del total.

Tanto las Instrucciones, como los Dictámenes, tienen una numeración consecutiva, a partir de las fechas iniciales señaladas, lo que no acontece con los Acuerdos Circulares, cuya foliación es anual, y de los que se cuenta un sinnúmero.

Como se podrá comprender de las cifras expuestas, las citadas disposiciones constituyen un valioso material adjunto a las leyes penales (Derecho penal material y procesal), cuyo dominio es imprescindible para el jurista dedicado a esta rama del Derecho.

El propósito de la obra, es facilitar el conocimiento de tan voluminosa e importante documentación, pero en modo alguno, reitero, este trabajo puede sustituir la obligada lectura total de la disposición antes de su utilización. Una segunda aclaración, al leerlas se debe tener en cuenta que, tanto la ley material como la procesal, han sufrido modificaciones, y es posible que la disposición citada no tenga vigencia, por haber variado, dejado de existir, o ser inaplicable la institución a la cual se refiere, pero si resulta útil para la interpretación de otra norma en vigor, entonces la he incorporado.

Sobre la vigencia de las Instrucciones, Dictámenes y Acuerdos Circulares ante la derogación o modificación de la ley o norma sobre la cual recayó la disposición, es recomendable leer los Acuerdos del CGTSP No. 103 de 22 de marzo de 1978 y No. 470 de 16 de noviembre de ese propio año, referidos a la entrada en vigor de la Ley No. 4 de 1977 (Ley de Organización del Sistema Judicial), en los que se expresa: "dichas instrucciones y demás disposiciones aludidas continuarán observándose en cuanto expresamente no se opongan a las preceptivas de la nueva Ley".

En veintiocho años de ejercicio de la profesión, dedicados a la materia penal, he prestado especial atención al estudio de los mencionados documentos, compilándolos cuidadosamente, y les confieso que, al releerlos, siempre descubro algo nuevo e interesante.

Aclaro, que los artículos citados, que no especifican el cuerpo legal al que pertenecen, se refieren al **Código Penal**, como rige en la fecha de confección de este trabajo. Asimismo, la **Ley de Procedimiento Penal** imperante se nombra con la abreviatura LPP y, en el supuesto que la numeración del artículo citado haya variado, coloco entre paréntesis la actual. En el caso de hacerse alusión a códigos, o leyes anteriores a las mencionadas, las señalo expresamente.

Finalmente, agradezco a un grupo de prestigiosos juristas, integrantes de las Sociedades de Ciencias Penales y de Derecho Procesal de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), las observaciones que, amablemente, me han hecho llegar sobre el proyecto de esta investigación, con el propósito de su perfeccionamiento. Entre ellos, se encuentran las profesoras Lourdes Carrasco Espinach, Odaly Quintero Silverio, Marily Fuentes Águila y María Caridad Bertot Yero.

DANILO RIVERO GARCÍA

1RO DE OCTUBRE DE 2007

Libro Primero. Parte General

— Título I. Disposiciones Preliminares (artículos 1 y 2)¹

— Título II. La eficacia de la ley penal

CAPÍTULO I

La eficacia de la ley penal en el tiempo (artículo 3)

- **Instrucciones No. 122, 123 y 124 de 12 de abril de 1988. Entrada en vigor de la Ley No. 62.**

* Las señaladas instrucciones, regularon las distintas situaciones que se pudieron presentar al entrar en vigor el 30 de abril de 1988 la Ley No. 62 de 1987. La primera, preceptúa cómo proceder en los caso de delitos que eran conocidos por los TPP, y pasaron a la competencia de los TMP; así como los supuestos donde la nueva Ley reprimió más favorablemente el delito sometido a juzgamiento. La segunda, cuando los hechos dejaron de ser punibles en virtud de la nueva Ley. La última, se refiere a los casos en que la nueva Ley reprime más favorablemente el delito sancionado por sentencia firme.

Este artículo 3, desarrolla en el orden práctico el principio consagrado en el artículo 61 de la Constitución, que establece: “Las leyes penales tienen efecto retroactivo cuando sean favorables al encausado o sancionado”. Por ley penal más benigna, deberá reputarse, la que en el caso concreto, produzca un resultado más favorable para el reo².

Lo anterior no siempre es fácil de determinar, pues es posible que en la nueva ley, el delito tenga un límite superior del marco penal más beneficioso que la ley en vigor al momento de su comisión, pero esta a su vez, comprenda un límite mínimo menos severo que la nueva. ¿Cuál produce un resultado más beneficioso en el caso concreto?

Interesante fue la solución ofrecida a este problema, por el apartado 7 de la Instrucción del CGTSP No. 88 de 31 de octubre de 1979, al entrar en vigor de la Ley No. 21 de ese propio año, y cuyo texto transcribo a continuación:

Los Tribunales al dictar sentencia a virtud de hechos ocurridos con anterioridad a la vigencia del nuevo Código Penal, consignarán entre los fundamentos de derecho en la forma que la ley según el caso previene, la calificación que a los mismos corresponda de acuerdo con la legislación anterior, y, a la vez, según el nuevo ordenamiento penal, con referencia específica de los respectivos preceptos, y aplicarán para adecuar la sanción, el que entre ellos resulte más favorable al reo.

¹ Los artículos sin alusión al cuerpo legal, pertenecen a la Ley No. 62 de 1987, Código Penal.

² *Vid.*, a propósito, COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR (1978): *Exposición acerca del Proyecto de Código Penal*, Imprenta del Ministerio de Justicia, Ciudad de La Habana, p. 7.

Para la aplicación práctica de la sanción imponible en estos casos, el Tribunal adecuará la que corresponda, teniendo en cuenta cuando esto ocurra, un nuevo marco penal que se extiende entre los límites mínimo y máximo, de menor rigor, que señalen las respectivas legislaciones, en cuanto difieran, relacionándolos entre sí.

- **Instrucción No. 146 de 16 de agosto de 1993. Entrada en vigor del Decreto-ley No. 140.**

- * Esta Instrucción estableció las reglas para la entrada en vigor del Decreto-ley No. 140 de 13 de agosto de 1993, por el que se derogaron los incisos a) y c) del apartado 2 del artículo 235 del CP, que penalizaban la tenencia de divisas convertibles.

- **Instrucción No. 159 de 6 de octubre de 1999. Entrada en vigor de la Ley No 87.**

- * La Instrucción trata, los problemas surgidos por la entrada en vigor de la Ley No. 87 el 15 de marzo de 1999, en relación con la Fe de Erratas que sobre dicha Ley fue publicada en la *Gaceta Oficial de la República*, el 24 de agosto de 1999.

- **Dictamen No. 411. Acuerdo No. 206 de 8 de noviembre de 2001. Delito continuado. Acciones delictivas cometidas bajo el imperio de dos leyes.**

Tratándose de varios delitos, que pudieran integrar uno solo de carácter continuado; al cometerse los actos particulares bajo el imperio de dos leyes, con distinto grado de represión sobre los hechos —la última más severa—; la solución es declarar la continuidad —en su caso— agrupándolos respectivamente bajo el imperio de la Ley vigente al momento de su comisión, determinar las respectivas sanciones, y luego formar la sanción conjunta.

- * Otro criterio distinto al del Dictamen, consiste en sancionar el delito continuado de acuerdo con la última Ley, aunque sea más severa, ya que el comisor, a pesar de entrar en vigor una Ley que reprime el hecho con superior dureza, persistió en su actuar delictivo, demostrando mayor rebeldía al ordenamiento jurídico.

CAPÍTULO II

La eficacia de la ley penal en el espacio (artículos 4 al 6)

— Título III. La ejecución de sentencia extranjera (artículo 7)

- **Instrucción No. 86 de 24 de septiembre de 1979. Tribunal competente.**

Corresponde a la Sala de la materia del TSP, ordenar cuando proceda, el cumplimiento de las ejecutorias dictadas por Tribunales extranjeros, para la extinción de la sanción de privación de libertad impuesta a ciudadanos cubanos. La intervención de esta Sala, queda limitada a la comprobación de las exigencias extrínsecas requeridas en el tratado, acordando por auto la remisión de las actuaciones al Tribunal competente para la ejecución, el que procederá a llevarla a vías de hecho, también mediante auto, siendo el encargado de todas las incidencias que de dicha ejecución se deriven.

- **Dictamen No. 225. Acuerdo No. 71 de 14 de mayo de 1985. Libertad condicional.** Es competente, para el otorgamiento de la libertad condicional, el Tribunal Provincial Popular, que dio cumplimiento a la sentencia dictada por Tribunal extranjero.

— Título IV. El delito

CAPÍTULO I

El concepto de delito (artículo 8)

- **Instrucción No. 115 de 20 de junio de 1984. Carencia de peligrosidad social. Aspectos procesales (artículo 8.2).**

Para que se considere que el hecho carece de peligrosidad social, es preciso, que la entidad de sus consecuencias sea escasa y las condiciones personales del comisor positivas; ello presupone, que el hecho en sí no haya producido alarma o repudio, y sus efectos no resulten especialmente dañinos o peligrosos; y que el comisor sea persona cumplidora de sus deberes laborales, sociales, familiares o educacionales, y no tenga antecedentes por delito intencional, con independencia de su edad; aunque se tendrán en cuenta —especialmente— los comprendidos entre 16 y 20 años, o más de 60 años.

En el orden procesal, esta clase de asunto se tramita de la manera siguiente:

I- En el caso del procedimiento conocido como **sumario**, al ingreso de las actuaciones, si el Tribunal considera que el hecho carece de peligrosidad social, dictará auto conforme al artículo 367 de la LPP. Si a dicha determinación se llega, luego del juicio, la sentencia será absolutoria.

II- En el procedimiento denominado **ordinario**, pueden darse los siguientes supuestos:

- 1- El Fiscal presenta el expediente con solicitud de sobreseimiento libre, apoyado en el artículo 8. 2. El Tribunal podrá acordar dicho sobreseimiento, o denegarlo fundadamente, devolviéndole las actuaciones; en caso de insistir el Fiscal, se procederá conforme al artículo 268 de la LPP.
- 2- El Fiscal solicita la apertura a juicio oral y el Tribunal considera que el hecho carece de peligrosidad social, entonces devolverá el asunto en mérito al artículo 263 de la LPP; de insistir el Fiscal, se llevará el asunto a juicio, y de confirmarse la señalada carencia de peligrosidad social, la sentencia será absolutoria.

* El legislador de 1979, incluyó en el Código el concepto de **delito**, del que carecía la legislación precedente. Este concepto, siguió a los ofrecidos en los Códigos Penales de los países socialistas europeos de aquel entonces, y puso su acento, en el carácter de acto socialmente peligroso, pretendiendo así, apartarse de los criterios que sólo atendían al aspecto formal.

Como reafirmación de la esencia material del señalado concepto, aparece el apartado 2 del artículo 8, sobre el que formulo dos observaciones: La primera, de *lege ferenda* incorporarlo a la ley procesal como un criterio de oportunidad; y otra, de mantenerlo en los términos actuales, suprimir lo relacionado con las “condiciones personales del autor”, lo que en modo alguno puede formar parte de la conceptualización del delito. De todas formas, las ventajas y conveniencia de no proceder ante actos insignificantes, está fuera de toda discusión.³

Finalmente, en la propia Instrucción se declara, que los criterios ofrecidos en la misma, pueden ser utilizados en la medición de la sanción, en el caso de no considerar el Tribunal una carencia total de peligrosidad social.

³ *Vid.*, lo consignado en COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR (1978): *Exposición acerca del Proyecto de Código Penal*, Imprenta del Ministerio de Justicia, Ciudad de La Habana, pp. 8-9.

- **Dictamen No. 232.** Acuerdo No. 100 de 25 de junio de 1985. **Comiso (artículo 8. 2).**
Si hubiese piezas de convicción, en un asunto donde se resuelve conforme al apartado 2 del artículo 8 —delito de actividades económicas ilícitas, por ejemplo—, procede el comiso de las mismas, en atención a lo preceptuado en el apartado 4 del artículo 271 de la LPP.
* Aquí se ofrece solución, a un problema que no pudo ser previsto en la Ley procesal, ya que el CP es de fecha posterior.
- **Dictamen No. 246.** Acuerdo No. 64 de 29 de abril de 1986. **Indemnización (artículo 8. 2).**
En caso de resolver el Tribunal, conforme al apartado 2 del artículo 8 —auto de abstención, sobreseimiento libre o absolución—, si hubiese daños y perjuicios, el perjudicado puede reclamar ante el Tribunal de lo civil.
* La hipótesis que suscita la consulta, es prácticamente imposible de confirmarse en la realidad, habida cuenta que, para la aplicación de la invocada norma, entre otros presupuestos se encuentra, “el que las consecuencias del hecho sean de escasa entidad”; por tanto, no deben existir daños o perjuicios de cierta consideración.
- **Dictamen No. 275.** Acuerdo No. 91 de 30 de septiembre de 1987. **Retirada de la denuncia (artículo 8. 2).**
* El Dictamen no tiene vigencia, pues se refiere a una modalidad delictiva que ya no rige, lesiones levisimas —artículo 328 del CP de 1979— donde el denunciante o perjudicado, luego de formular la denuncia, pretende desistir de la misma, lo que no estaba autorizado legalmente en ese Código —ni en el actual en caso de lesiones—; no obstante, se recomienda en esta disposición, que la invocada solicitud puede ser tomada en cuenta, para resolver conforme al apartado 2 del artículo 8; criterio de utilidad en la solución de casos análogos, en los que se pretenda desistir de la denuncia, sin estar preceptuado en la ley.

CAPÍTULO II

Los delitos intencionales y por imprudencia (artículo 9)

- **Instrucción No. 110 de 5 de julio de 1983. Delitos de homicidio y lesiones —por imprudencia— presuntamente cometidos por médicos, personal profesional o auxiliar de la medicina, en el ejercicio de sus respectivas especialidades.**
Ver esta Instrucción en *delito de Homicidio* (artículo 261).
- **Dictamen No. 216.** Acuerdo No. 40 de 19 de marzo de 1985. **Abuso en el ejercicio del cargo. Infracción de las normas de protección a los consumidores. Intencionalidad.**
El delito de abuso en el ejercicio de cargo o empleo en entidad económica y el de engaño a los consumidores, previstos respectivamente en los artículos 269, inciso c (hoy artículo 225. 1, inciso c) y artículo 271, inciso c (en la actualidad, artículo 227, inciso c), requieren para su integración, no sólo los elementos objetivos de los respectivos tipos, sino la **actuación intencional** del agente.
- **Dictamen No. 231.** Acuerdo No. 99 de 25 de junio de 1985. **Daños por imprudencia. Prueba pericial.**
El delito de daños puede cometerse por imprudencia. En cualquiera de sus manifestaciones —por intención o imprudencia—; se precisa la determinación pericial de su magnitud, tanto a los fines de la calificación delictiva, como de la posible responsabilidad civil. Los peritos pueden ser designados, bien por la Policía o por el Tribunal.

- **Dictamen No. 280.** Acuerdo No. 113 de 13 de noviembre de 1987. **Permitir que otro conduzca ebrio o drogado. Responsabilidad por el resultado lesivo de la conducción. Imprudencia.**

Quien es propietario de un vehículo, o lo tiene encargado por cualquier concepto, y permite, a sabiendas, que otro estando ebrio o intoxicado por drogas, y en consecuencia, incapacitado para conducir, lo haga, y a resultas de la ebriedad o intoxicación, ocasione un efecto de lesión para un bien jurídico —homicidio, lesiones o daños—; además de responder del delito previsto en el artículo 181. 1 b) —permitir que otro conduzca ebrio o drogado—, también incurre en el **título de imprudencia** de los señalados resultados —homicidio, lesiones o daños—, si entre la infracción de peligro —permitir que otro conduzca— y el resultado lesivo, se aprecia una íntima relación causal y él pudo o debió haber previsto el citado efecto.

* Recuerdo haber intervenido en la redacción de la consulta, pues en la Sala —TPPSS— se tenía conocimiento de tres interesantes y fundadas sentencias del TSP con posiciones distintas para la solución del mismo supuesto.

- **Dictamen No. 297.** Acuerdo No. 108 de 29 de noviembre de 1988. **Relación de causalidad.**

¿Qué responsabilidad tiene el Instructor que adiestra a un conductor que está aprendiendo, o el examinador que lo evalúa?

En los delitos por imprudencia lo determinante de la culpabilidad, está dado en la relación causal que se manifiesta entre el actuar del infractor y el resultado lesivo, tal comportamiento determina la causa eficiente del evento; de manera que, el que con su actuación produzca ese vínculo de causalidad, responde penalmente por el hecho justiciable.

- **Dictamen No. 331.** Acuerdo No. 31 de 29 de julio de 1992. **Incumplimiento de normas de seguridad en entidades económicas. Incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades económicas.**

Los delitos de incumplimiento de normas de seguridad en entidades económicas e incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades estatales —artículos 221 y 222—, “son delitos cometidos esencialmente, por imprudencia”.

* En el Dictamen no se afirma que sean delitos imprudentes, sino que son cometidos esencialmente por imprudencia ¿se trata entonces de delitos intencionales?

- **Acuerdo No. 25 de 24 de marzo de 1987. Tenencia de drogas. Intencionalidad.**

Si en ocasión de practicársele un registro en el vestuario a un ciudadano, se hallan partículas o picadura de la hierba conocida por marihuana —cualquiera que fuera su cantidad— ese hecho constituye el delito de tenencia de drogas, siempre que —en el caso concreto— concurren los elementos de la culpabilidad; es decir, la tenencia querida y consciente de esa sustancia.

* Al exigirse en el Acuerdo para la integración del tipo penal —tenencia de drogas— en el plano subjetivo, “la tenencia querida y consciente de esa sustancia”, se afirma que se está ante un delito que sólo se comete por intención.

CAPÍTULO III

La unidad y pluralidad de acciones y delitos (artículos 10 y 11⁴)

- **Instrucción No.104 de 16 de febrero de 1982 (modificada por el Acuerdo No. 3 de 13 de enero de 1987). Concurso ideal (lesionado pendiente de curación, artículo 275 de la LPP).**

Si a consecuencia de un mismo acto, surgen distintas violaciones penales, consistiendo una de ellas en el delito de lesiones; aun cuando la sanidad estuviere pendiente de atestarse, los Tribunales darán curso a la acción penal, sin ejercitar conjuntamente la civil, siempre que las diligencias de pruebas permitan la calificación del delito y la adecuación de la sanción.

* Ejemplo de lo anterior, es cuando se está ante un delito de homicidio, lesiones y daños en ocasión del tránsito. Si el lesionado se encuentra pendiente de curación, ello no impide el ejercicio de la acción penal, si del examen pericial es posible calificar el carácter de las lesiones.

- **Dictamen No. 273.** Acuerdo No. 69 de 21 de julio de 1987. **Robo y hurto. No pueden ser continuados por sus diferentes formas de comisión.**

Los delitos de robo —con violencia o fuerza— y hurto, no se funden nunca en un solo delito de carácter continuado, habida cuenta que en sus formas de comisión, no guardan similitud en su ejecución, lo que constituye un requisito para declarar la continuidad.

* En el Dictamen se aclara, que apreciar la continuidad en el caso consultado —delitos de robo y hurto—, además de ser incorrecto por la razón expuesta, conlleva a sancionar más severamente, que en caso de reprimir cada delito por separado, afirmando que lo que se pretende con la aludida institución “es beneficiar al reo”.

- **Dictamen No. 303.** Acuerdo No. 24 de 14 de marzo de 1989. **Continuidad. Incumplimiento de las obligaciones derivadas de la comisión de contravenciones.**

El delito de incumplimiento de las obligaciones, derivadas de la comisión de contravenciones —artículo 170— no puede calificarse en forma de delito continuado, por su especial naturaleza.

* En verdad, no encuentro razón dogmática alguna, para impedir la continuidad en el caso consultado; no obstante, en el propio Dictamen se establece que se podrán conocer en un mismo expediente —causa y juicio—, las diversas denuncias que sobre este delito se formulen contra un mismo acusado, por guardar relación de conexidad, según el artículo 13, apartado 5 de la LPP.

- **Dictamen No. 310.** Acuerdo No. 22 de 17 de abril de 1990. **Continuidad. Aspectos procesales. Reclamo de actuaciones.**

Si un TMP está conociendo de un proceso en el que aún no ha recaído sentencia; y las actuaciones le son reclamadas por la Instrucción o por la Fiscalía, ya que ese hecho forma parte de un delito continuado, cuya tramitación esta a cargo de cualquiera de los órganos reclamantes; debe el TMP remitirle las actuaciones solicitadas.

* Similar solución se ofrece en el Dictamen, ante delitos comprendidos en los supuestos de conexidad procesal, previstos en el artículo 13 de la LPP.

⁴ En relación con el delito continuado, que en el Código de Defensa Social, era concebido sobre la base de la teoría objetivo-subjetiva, en la ley actual se funda en la teoría objetiva pura, reduciendo el campo de interpretación en relación con la anterior. Con apoyo en la posición adoptada en el Código en uso, que sólo atiende a elementos objetivos, no hay restricción para apreciar la continuidad en caso de hechos imprudentes.

- **Dictamen No. 318.** Acuerdo No. 9 de 19 de febrero de 1991. **Robo con violencia. No puede ser continuado en caso de víctimas diferentes.**

No es posible declarar la continuidad, en el caso del delito de robo con violencia o intimidación en las personas —artículo 327—, cuando se trata de distintas víctimas, porque además de atacar bienes patrimoniales, se lesionan derechos inherentes a la persona misma, como la integridad corporal o la libertad (artículo 11.2).

* Recuerdo haber formulado esta consulta. En el **Glosario** de términos jurídicos del *Anteproyecto de Código Civil*, publicado bajo el término “Derechos de la personalidad”, se expresa:⁵ «También se les llaman derechos inherentes a la personalidad): la vida, la integridad física, la libertad, la dignidad, el honor, el derecho al nombre, a la propia imagen, etc. (la Constitución, en su artículo 123, párrafo inicial e inc. “d”, establece el amparo de estos derechos entre los principales objetivos de la actividad de los Tribunales)».

- **Dictamen No. 321.** Acuerdo No. 21 de 2 de abril de 1991. **Concurso ideal. Aspectos procesales. Procedibilidad.**

En el caso de un delito en concurso ideal de homicidio, lesiones y daños (artículo 10. 1, inciso b), para conocer del delito de daños (artículo 179), se requiere la denuncia del perjudicado; formalidad que se cumple en los llamados **delitos complejos**, tomándosele declaración al perjudicado o la víctima, en la que se acreditará el daño sufrido, y su interés en que se conozca judicialmente de los mismos, o la ausencia de la invocada pretensión.

* En las diligencias sumariales, debe quedar establecido claramente, si el perjudicado por el delito de daños, está interesado en que estos se conozcan por la vía judicial, en caso contrario, no es posible proceder en cuanto a los mismos, aun cuando —hipotéticamente— formen parte de un concurso ideal.

- **Dictamen No. 386.** Acuerdo No. 86 de 5 de mayo de 1999. **Continuidad. Competencia. Integración. Tipo de proceso.**

En el caso de un delito de carácter continuado, para la determinación del Tribunal competente, cantidad de miembros que lo integrarán, en su caso, o del procedimiento a seguir, se atenderá al marco normal o abstracto del tipo penal calificado, sin tener en cuenta los aumentos establecidos en la Ley por razón de la continuidad.

* Ver artículo 39 (inciso a) del *Reglamento de la Ley No. 82, De los Tribunales Populares*.

- **Dictamen No. 399.** Acuerdo No. 39 de 28 de marzo de 2001. **Continuidad. Competencia. Integración. Tipo de proceso.**

* Reitera el criterio establecido en el Dictamen No. 386. Ver bajo este mismo rubro.

- **Dictamen No. 411.** Acuerdo No. 206 de 8 de noviembre de 2001. **Delito continuado. Acciones delictivas bajo el imperio de dos leyes.**

Tratándose de varios delitos, que pudieran integrar uno solo de carácter continuado; al cometerse los actos particulares bajo el imperio de dos leyes, con distinto grado de represión sobre los hechos —la última más severa—; la solución es declarar la continuidad, en su caso, agrupándolos respectivamente bajo el imperio de la Ley vigente al momento de su comisión, determinar las respectivas sanciones, y luego formar la sanción conjunta.

* Otro criterio distinto al del Dictamen, consiste en sancionar el delito continuado de acuerdo con la última Ley —aunque sea más severa— ya que el comisor, a pesar de entrar en vigor una Ley que reprime el hecho con superior dureza, persistió en su actuar delictivo, demostrando mayor rebeldía al ordenamiento jurídico.

⁵ *Vid.*, a propósito, COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR (s. f.): *Anteproyecto de Código Civil*, Ciudad de La Habana, p. 4.

CAPÍTULO IV**El delito consumado, la tentativa y los actos preparatorios (artículos 12 y 13)****CAPÍTULO V****El delito imposible (artículo 14)****CAPÍTULO VI****El lugar y tiempo de la acción (artículo 15)****TÍTULO V. La responsabilidad penal****CAPÍTULO I****Personas penalmente responsables (artículos 16 y 17⁶)****• Instrucción No. 89 de 2 de febrero de 1980. Modo de acreditar la edad.**

Basta extender diligencia por el actuante, con expresión de los datos obrantes en el carnet de identidad, entre estos, los del asiento en el Registro Civil; en caso de duda, se pedirá certificación a dicha Oficina, o en su defecto, se dispondrá prueba pericial médica con ese fin.

• Instrucción No. 169 de 15 de enero de 2002. Juzgamiento de personas jurídicas.

* Establece el modo de proceder ante los Tribunales, para exigir responsabilidad penal a persona jurídica.

CAPÍTULO II**La participación (artículos 18 y 19)****• Acuerdo No. 6 de 12 de enero de 1988. La complicidad no genera responsabilidad civil.**

Si son varios autores los que han de responder en el orden civil, el Tribunal tiene que determinar en la sentencia la parte que corresponde abonar a cada uno, con independencia de que tal obligación sea solidaria entre los mismos.

La complicidad no genera responsabilidad civil, sólo la autoría. Tampoco los receptadores responden por los daños y perjuicios causados por el delito antecedente, ya que la receptación es un delito totalmente independiente de aquel.

CAPÍTULO III**Las eximentes de la responsabilidad penal****Sección Primera (artículo 20)****— La enfermedad mental.****• Instrucción No. 150 de 4 de abril de 1995 (deroga la Instrucción No. 113 de 10 de abril de 1984). Sanción de muerte. Peritación psiquiátrica.**

Ver esta Instrucción en sanción de *Muerte*.

⁶ La decisión para atenuar la sanción de los jóvenes ha sido —sin duda— la mayor sensibilidad penal de la misma, esto es, la presunción de que los fines de reeducación de la pena son susceptibles de ser alcanzados, con respecto a los jóvenes, en menor tiempo que el que requieren los adultos.

Sección Segunda (artículo 21)

- La legítima defensa.

Sección Tercera (artículo 22)

- El estado de necesidad.

Sección Cuarta (artículos 23 y 24)

- El error.

Sección Quinta (artículo 25)

- El cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho, profesión, cargo u oficio.

Sección Sexta (artículo 26)

- Miedo insuperable.

Título VI. Las sanciones

CAPÍTULO I

Los fines de la sanción (artículo 27)

CAPÍTULO II

Las clases de sanciones (artículo 28)

CAPÍTULO III

Las sanciones principales

Sección Primera (artículo 29)

- Muerte.

- **Instrucción No. 150 de 4 de abril de 1995** (deroga la Instrucción No. 113 de 10 de abril de 1984). **Peritación psiquiátrica.**

En caso de solicitar el Fiscal la imposición de la pena de muerte, los Tribunales cuidarán que el peritaje psiquiátrico se haya realizado de acuerdo con la metodología que se acompaña a la presente Instrucción; de no haberse obrado así, devolverán las actuaciones con ese propósito, en mérito al apartado 2do del artículo 263 de la LPP.

En el supuesto que no se haya solicitado inicialmente dicha condena —muerte— en el escrito de calificación provisional, y el Fiscal la pida en el momento de las calificaciones definitivas —artículo 349 de la LPP—, o el Tribunal la traiga a consideración haciendo uso de la fórmula del artículo 350 de la LPP, este órgano verificará que se haya practicado el peritaje psiquiátrico según la aludida metodología; en caso contrario, con apoyo en los artículos 346 apartado 7mo (debe ser el 8vo) y 351 de la LPP, dispondrá su realización en los señalados términos.

* La Instrucción reafirma el cuidado con que la justicia cubana ha enfrentado el tema de la imposición de la pena de muerte, en los excepcionales supuestos que la ley la prevé.

Es interesante lo acordado en el apartado 3ro de la Instrucción, pues concluida la fase de recepción de pruebas, y ya estando en la de conclusiones definitivas, se autoriza volver a la anterior para la práctica de la prueba pericial en los términos expuestos, lo que se hace apoyándose en los artículos señalados.

● **Dictamen No. 78.** Acuerdo No. 459 de 20 de octubre de 1979. **Intervención judicial en la ejecución.**

La intervención judicial en relación con la ejecución de la sanción de muerte, se limita a la adopción de las disposiciones necesarias para la misma, quedando a cargo de autoridades de otro orden llevar a cabo su cumplimiento efectivo, sin otra participación ulterior por parte del Tribunal sentenciador que la racional de comprobar dicha ejecución.

* Resulta curioso que la LPP en su versión original, en el artículo 488 (496), que es el citado en el Dictamen, exprese, que es la Sala respectiva del TSP la encargada de disponer lo necesario para la ejecución de la sentencia donde se impone la pena de muerte; rompiendo así con el principio de carácter general, recogido en el artículo 482 (492) de esa propia versión, que establece que la ejecución de la sentencia sancionadora, una vez firme, corresponde al Tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia, dándole esa atribución a la Sala pertinente del TSP, aun cuando en primera instancia haya conocido del asunto un Tribunal inferior en grado.

Sobre la comprobación de la ejecución, guarda silencio la ley actual; en el artículo 989 de la derogada Ley de Enjuiciamiento Criminal española (LECrim) se establecía: "Ejecutada que sea la sanción de muerte, se extenderá en los autos diligencia por el Secretario que hubiere asistido a ella [...]".

● **Acuerdo No. 83 de 10 de marzo de 1980. Reglas para la tramitación.**

El Acuerdo ofrece un grupo de reglas para la tramitación de esta clase de asuntos, a saber:

- 1- Establece la obligación de remitir parte de inicio al Presidente de la Sala Penal del TSP.
- 2- Indica los aspectos de las actuaciones sobre los que dará cuenta el ponente al Tribunal.
- 3- Señala las diligencias del expediente a las cuales el ponente prestará especial atención.
- 4- Dispone el análisis del material probatorio propuesto, y su suficiencia para la comprobación de los hechos, con el propósito de adoptar las medidas necesarias para el esclarecimiento total.
- 5- Ofrece normas complementarias para la celebración del juicio, en la sede o fuera de esta, entre las que se encuentran: hacer saber a los familiares más allegados del acusado y de la víctima, la fecha y lugar en que se efectuará, así como procurar grabar las declaraciones de acusados, testigos y el informe de los peritos, en su caso.
- 6- Reitera la observancia de los plazos y las consecuencias de sus incumplimientos.

Sección Segunda (artículos 30 y 31)

— Privación de libertad.

● **Instrucción No. 72 de 13 de julio de 1978. Ejecución. Suspensión. Aplazamiento.**

Los Tribunales, fuera del caso de la remisión condicional de la sanción de privación de libertad, sólo están autorizados a interrumpir o suspender, posponer o aplazar o —de otro modo—, dilatar el exacto e inmediato cumplimiento de esta clase de sanción, cuando concurra alguna de las causas previstas en los artículos 491(497) y 492 (498) de la LPP, lo que harán mediante auto y por el tiempo que determinan dichos preceptos.

* El artículo 497 se refiere al interno que extingue sanción en establecimiento penitenciario u otro, y enferme de enajenación mental; entonces se suspende el cumplimiento, adoptándose la medida de seguridad que corresponda, hasta que recobre su salud. El artículo 498, alude a razones de enfermedad, embarazo, hijos menores de un año y circunstancias especiales del trabajo; aquí se aplaza el inicio de la ejecución —retarda, difiere—, se trata de una sanción cuya ejecución no ha comenzado. Una opinión diferente sostiene, que es posible el empleo del invocado aplazamiento —artículo 498— en caso de sanciones que ya se están ejecutando. Ver Dictamen No. 377 de 1996 en la sanción de ***Trabajo correccional con internamiento***.

● **Instrucción No. 84 de 10 de mayo de 1979. Ejecución. Liquidación de sanciones.**

Una vez firme la sentencia sancionadora, o al recibirse las actuaciones, a consecuencia de un recurso, el Tribunal llamado a ejecutarla, de ser posible, procede de inmediato a la práctica de su liquidación (sanciones principales y accesorias cuando corresponda se liquidan al mismo tiempo), lo que hará un secretario designado al efecto, con la aprobación de dicho órgano.

Si la sanción es de privación de libertad efectiva, así como en el caso de apremio personal por impago de la multa, y el sancionado está en libertad, se liquida una vez que conste su ingreso en prisión, para lo que previamente se libran los despachos oportunos.

En el plazo de diez días, contados a partir de la firmeza de la sentencia o el recibo de las actuaciones procedentes del Tribunal del recurso, el Tribunal ejecutor remitirá al establecimiento penitenciario, testimonio de la sentencia y liquidación, en el caso que el sancionado guarde prisión provisional; de estar en libertad, los diez días se cuentan a partir de su ingreso en prisión.

Este propio plazo rige para las otras clases de sanciones, tanto principales, como accesorias, y también en el supuesto de rectificaciones.

* Liquidar, significa determinar en el tiempo los efectos de una sanción, lo que es propio de las sanciones principales de privación de libertad temporal, sanciones sustitutivas de esta, y multa, en su caso. También hay sanciones accesorias cuya extensión en el tiempo, es necesario precisar. Ejemplos: La prohibición del ejercicio de una profesión, cargo u oficio; o de frecuentar medios o lugares determinados. El señalado plazo para remitir la documentación, rige con carácter general, salvo que en otra disposición se establezca uno distinto.

● **Instrucción No. 86 de 24 de septiembre de 1979. Ejecución. Sentencia extranjera.**

En el caso de ciudadanos cubanos, sancionados a privación de libertad por Tribunales extranjeros, que sean entregados a nuestro país para el cumplimiento de la sanción —en todo o en parte—, de acuerdo con los tratados suscritos con otros Estados, la Sala competente del TSP, ordenará mediante auto el cumplimiento de la ejecutoria al Tribunal que corresponda, previa comprobación de aquellas exigencias extrínsecas. El Tribunal designado por dicha Sala, dispone por auto la ejecución, el que será notificado al sancionado y al Fiscal, y contra el mismo podrán estos establecer el recurso que, según el caso, autoriza la ley de procedimiento contra las sentencias dictadas en primera instancia.

* Resulta interesante lo que se expone en relación con los recursos; de ser designado un TPP, entonces el recurso sería el de casación.

Ver ***en La ejecución de sentencia extranjera*** el Dictamen No. 225 de 1985, sobre ***la concesión de libertad condicional***.

- **Instrucción No. 175 de 21 de julio de 2004. Ejecución. Sustitución de la privación de libertad (artículo 30. 13 y 30.14).**

Los Tribunales adoptarán las medidas necesarias para examinar y pronunciarse, de manera ágil y coherente, ante las solicitudes de sustitución de la sanción temporal de privación de libertad, para lo cual se designarán Salas o Jueces determinados.

* Nótese que para proceder a la invocada sustitución, el Tribunal tendrá que observar nuevamente “la índole del delito, sus circunstancias y connotación social del hecho”, elementos que ya se tuvieron en cuenta al momento de acordar la sanción cuyo reemplazo se pretende.

- **Dictamen No. 167.** Acuerdo No. 143 de 13 de septiembre de 1983. **Ejecución. Liquidación.**

A los efectos de la liquidación de la sanción de privación de libertad, se computará como un día, la privación de libertad sufrida antes de las 24:00 horas de ese propio día.

- **Dictamen No. 178.** Acuerdo No. 12 de 31 de enero de 1984. **Ejecución. Lugar de cumplimiento para sancionados, llamados al Servicio Militar.**

Las sanciones de privación de libertad se cumplen en los establecimientos penitenciarios y no en las unidades militares, independientemente que el sancionado haya sido llamado al servicio militar activo.

- **Dictamen No. 182.** Acuerdo No. 23 de 6 de marzo de 1984. **Ejecución. Aplazamiento.**

El aplazamiento de la ejecución de la sanción de privación de libertad, se acuerda siempre que el sancionado padezca de una enfermedad que le imposibilite su cumplimiento, y se podrán disponer subsiguientes prórrogas del mismo, mientras subsistan las causas de incompatibilidad con la vida en prisión.

* El aplazamiento, como su nombre lo indica, se acuerda antes que el sancionado comience a extinguir la sanción y no durante su cumplimiento. (¿Puede aplazarse el cumplimiento de las sanciones subsidiarias de la de privación de libertad? Sí, es posible. Ver Dictamen No. 377 de 1996 en *Trabajo correccional con internamiento*, por el cual se autoriza el aplazamiento de una sanción subsidiaria en el transcurso de su ejecución, apartándose del criterio antes expuesto.)

- **Dictamen No. 187.** Acuerdo No. 73 de 5 de junio de 1984. **Ejecución.**

El Dictamen considera acertada la práctica del Tribunal consultante (en correspondencia con la ley y la Instrucción No. 84 de 1979 del CGTSP, que regula esta materia), para la ejecución de la sanción de prisión, en el caso de sancionados que se encuentren en libertad, la cual consiste, en que una vez que la sentencia adquiere firmeza, por no haberse establecido recurso o recibirse las actuaciones procedentes del Tribunal que resolvió la impugnación, se libra orden a la PNR de búsqueda y captura del sancionado que se encuentra en libertad, y en esa propia fecha, se emite mandamiento de admisión al establecimiento penitenciario donde debe extinguir la sanción. Constándole al Tribunal el ingreso del sancionado en prisión, se practica la liquidación de sanción, cuyo testimonio se remite al establecimiento, junto con la copia de la sentencia, a la mayor brevedad, siempre antes de transcurrir los diez días.

* En otros Tribunales del país no se obra de la indicada manera, pues se cita previamente al sancionado para el cumplimiento de la sanción impuesta y, sólo ante su injustificada incomparecencia, se libra orden de presentación por la fuerza pública.

- **Dictamen No. 201.** Acuerdo No. 141 de 11 de septiembre de 1984. **Ejecución. Aspectos Procesales.**

No corresponde a los Tribunales determinar el establecimiento penitenciario donde el sancionado debe cumplir la sanción de privación de libertad, ni el régimen en que ha de extinguirla; una y otra decisión es facultad del Ministerio del Interior. Asimismo, carecen de potestad los Tribunales para disponer el traslado de un recluso de una provincia a otra para el cumplimiento de la sanción.

* Recuerdo haber intervenido en la elaboración de esta consulta, pues en el TPP de Sancti Spiritus en la parte dispositiva de la sentencia, se consignaba en el caso de sancionados a privación de libertad, el régimen en que deberían extinguir la sanción (artículo 30. 2 de la Ley No. 21) y el establecimiento penitenciario.

Por la Instrucción No. 30 de 13 de mayo de 1974, se dispuso la creación de un *Libro índice de sancionados a privación de libertad*, en el que se consignaban las fechas de comienzo y de extinción de la sanción, el centro penitenciario de cumplimiento, y los traslados, en su caso. Esta Instrucción fue reiterada por el Acuerdo No. 250 de 9 de junio de 1975. En el actual Reglamento de la Ley de Tribunales, no aparece el citado registro, no llevándose en la actualidad.

- **Dictamen No. 235.** Acuerdo No. 123 de 6 de agosto de 1985. **Ejecución. Reclusión domiciliaria.**

El tiempo en que el acusado fue objeto de la medida cautelar de reclusión domiciliaria, no se abona al de duración de la sanción de privación de libertad impuesta, por no estar previsto en la Ley.

- **Dictamen No. 242.** Acuerdo. No. 180 de 24 de diciembre de 1985. **Ejecución. Prisión provisional por otro proceso.**

Una vez firme la sentencia que impone una sanción de privación de libertad, se ordena sin dilación su ejecución, y si el sancionado en la indicada sentencia, se encuentra guardando prisión provisional por otro proceso, esta medida cautelar se interrumpe —con independencia de la jerarquía de la autoridad que la acordó—, y comienza a extinguir la de privación de libertad impuesta.

* Ejemplo, se interrumpe la prisión provisional —acordada por un Tribunal provincial— para ejecutar una sanción privativa de libertad, dictada por un Tribunal municipal: ¿cómo proceder si la sanción que adquiere firmeza es una de las sustitutivas de la de privación de libertad?

- **Dictamen No. 295.** Acuerdo No. 103 de 8 de noviembre de 1988. **Ejecución. Evasión de presos. Sancionado que no se presenta al vencimiento del permiso de salida.**

Si a un sancionado a privación de libertad, de acuerdo con los reglamentos, se le concede permiso de salida del establecimiento penitenciario por tiempo limitado (artículo 31.3.a), y no se reincorpora al centro en la fecha que se le indique, no comete el delito de evasión de presos (artículo 163.1), y sí una infracción, que debe ser corregida disciplinariamente.

- **Dictamen No. 326.** Acuerdo No. 58 de 18 de diciembre de 1991. **Ejecución. Evasión de presos.**

Si un sancionado a privación de libertad —en régimen correccional laboral—, abandona o se ausenta del establecimiento donde se encuentra recluso, o del lugar destinado para ejecutar el trabajo, incurre en el delito de evasión de presos, previsto en el artículo 163, con independencia de la medida que en el orden disciplinario se le pudiera imponer por las autoridades penitenciarias.

- **Dictamen No. 330.** Acuerdo No. 14 de 15 de abril de 1992. **Ejecución. Excluíbles.**
En el caso de los denominados “excluíbles” (quienes abandonaron el país en 1980 con destino a Estados Unidos), que tenían condenas de privación de libertad pendientes de extinguir en Cuba y han regresado, y cuyos procesos se habían suspendido provisionalmente, conforme a la Instrucción No. 95 de 1980 del CGTSP —a los efectos del cumplimiento de las invocadas condenas—, se le abonará el tiempo de permanencia en que estuvieron reclusos, o detenidos, a partir de su arribo a ese país (EE.UU.), de acreditarse este dato por la autoridad cubana competente.
- **Dictamen No. 333.** Acuerdo No. 34 de 29 de julio de 1992. **Revisión.**
Si a consecuencia de un procedimiento de revisión, es sancionado a privación de libertad, quien antes lo fue a multa, el importe de esta se devuelve y extingue la nueva sanción de prisión, acordada en dicho procedimiento.
- **Dictamen No. 402.** Acuerdo No. 59 de 3 de mayo de 2001. **Ejecución. Sancionado que no se presenta para el cumplimiento de la condena.**
Si el sancionado a privación de libertad —debidamente citado para el cumplimiento de la sanción— no se presenta injustificadamente, el Tribunal libra requisitoria para su búsqueda y captura, y una vez transcurrido el término de la misma sin ser presentado, lo declara rebelde, archivándose la causa.
* Con el pronunciamiento del Dictamen, cambia una sostenida posición; esta es que la declaración de rebeldía sólo comprende al acusado —ver artículos 442 y siguientes de la LPP—. El sancionado que no acudía al ser llamado para cumplir la sanción, luego de proveerse lo correspondiente para su aprehensión, se dictaba providencia, archivando provisionalmente las actuaciones. En el Dictamen se ofrece una solución distinta, a la que han de atenderse los Tribunales.
- **Dictamen No. 413.** Acuerdo No. 244 de 10 de diciembre de 2001. **Ejecución. Síntomas de enajenación mental.**
La peritación de un sancionado o asegurado, que presente síntomas de enajenación mental durante el cumplimiento de la sanción o la medida —en establecimiento penitenciario o de otro tipo—, sólo puede acordarla el Tribunal que dispuso la ejecución de la resolución.
Una vez impuesta la medida de seguridad de internamiento en un hospital psiquiátrico, por razón de enfermedad mental, el control del Tribunal sobre su ejecución no se extiende a las cuestiones propias del tratamiento terapéutico (otorgamiento de visitas y los permisos de salida temporales); ello es potestad exclusiva de la institución hospitalaria. Por último, es el Tribunal el órgano facultado para decidir la salida definitiva del asegurado de la invocada entidad.
* En el propio Dictamen se señala que lo acordado en él, se hace extensivo a los asegurados que cumplen medida de internamiento en centros de enseñanza especializada, o establecimiento asistencial de desintoxicación, cuyo régimen de tratamiento terapéutico obedece a las disposiciones internas de estas instituciones.
- **Acuerdo No. 160 de 30 de abril de 1980. Tramitación de libertades.**
En caso de hallarse guardando prisión en un centro en otra provincia, la persona cuya libertad se ha dispuesto, el Tribunal debe dirigirse a la Sección de Control de la Dirección de Prisiones del MININT “vía telex”, y no utilizar otro medio.

- **Acuerdo No. 111 de 19 de mayo de 1981. Ejecución. Aplazamiento. Recurso.**
Contra la resolución que deniega una solicitud de aplazamiento de ejecución de la sanción de privación de libertad, sólo procede el recurso de súplica, de conformidad con las disposiciones del artículo 56 de la LPP.
- **Acuerdo No. 19 de 22 de enero de 1985. Ejecución. Aplazamiento.**
En caso de aplazamiento de la ejecución de la sanción por motivo de enfermedad, el sancionado o sus familiares, con la periodicidad que el Tribunal indique, presentarán el correspondiente informe del estado de salud, lo que no impide que este órgano disponga las oportunas comprobaciones para resolver lo procedente.
* En determinados casos, el Tribunal puede acordar que por el servicio de medicina legal se hagan las comprobaciones necesarias.

— **Licencia extrapenal (artículos 30.4 y 31.3b y 31.4)**

- **Instrucción No. 132 de 20 de septiembre de 1988. Ejecución. Procedimiento.**
La solicitud se formula ante el Tribunal sancionador, con expresión de las razones y tiempo. El Tribunal la radica, y puede rechazarla de plano o sustanciarla; en este último supuesto, está facultado para pedir informaciones complementarias. El auto resolviendo la pretensión no es susceptible de recurso. De concederse el beneficio —para lo cual se valorarán las razones expuestas, delito cometido y conducta en prisión entre otros aspectos—, que como regla debe ser en una sola ocasión, en la resolución se expondrá por qué período (el que se abona al cumplimiento de la sanción) y las obligaciones que deberá observar (mantener buen comportamiento social y no cambiar de domicilio), librándose comunicación a la PNR. Asimismo, es posible su revocación.
* La Instrucción no expresa quién puede establecer la solicitud; sí aclara que se presenta ante el Tribunal sancionador. En el supuesto en que el TSP o el TPP dicte sentencia sancionadora, por la vía de un recurso, ¿ante qué Tribunal se presenta, el sancionador (TSP o TPP) o el de instancia, encargado de su ejecución? No encuentro razón para no permitir recurrir en súplica.
- **Instrucción No. 137 de 1ro de noviembre de 1990 (Apartado Decimocuarto). Concesión.**
Exige una valoración cuidadosa para su concesión, en el caso de los comisores de los delitos a que hace alusión dicha Instrucción. Recomienda solicitar las informaciones complementarias que sean necesarias, de manera que se asegure el mantenimiento en prisión de los sancionados más peligrosos y connotados.
- **Instrucción No. 156 de 30 de abril de 1997. Ejecución. Control por la PNR.**
Ver en *Remisión condicional*.
- **Instrucción No. 163 bis de 24 de abril de 2004. Ejecución. Juez de control.**
Ver en *Remisión condicional*.
- **Instrucción No. 170 de 11 de diciembre de 2002 (Apartado Séptimo). Drogas.**
En el caso de los delitos relacionados con drogas, proceder con extremo cuidado en la concesión del beneficio, solicitando —en su caso— las informaciones complementarias pertinentes, para no errar en la decisión.
- **Instrucción No. 175 de 21 de julio de 2004 (Apartado Séptimo). Tramitación.**
Los Tribunales adoptarán las medidas necesarias para examinar y pronunciarse, consecuentemente, ante las solicitudes de licencia extrapenal.

- **Acuerdo No. 6 de 9 de enero de 1990. Sancionados en libertad.**

La licencia extrapenal, sólo se concede a los sancionados reclusos en establecimiento penitenciario, durante el cumplimiento de la sanción.

* Interviene en la redacción de la consulta, que consistía en saber si era posible, conceder la licencia extrapenal a un sancionado que se encuentra pendiente de extinguir, en todo o en parte, la sanción de privación de libertad.

Sección Tercera (artículo 32)

— El trabajo correccional con internamiento

- **Instrucción No. 84 de 10 de mayo de 1979. Ejecución. Liquidación de sanciones.**

Ver en *Privación de libertad*. Se refiere a todas las sanciones, tanto principales, como accesorias, en las que haya que determinar sus efectos en el tiempo.

- **Instrucción No. 127 de 12 de abril de 1988. Cancelación de oficio del antecedente penal.**

En la Secretaría—Tribunal, Sala o Sección— se formarán cuadernos con las copias de la liquidación de sanción, organizadas cronológicamente en forma trimestral, según la fecha de extinción. Al vencer cada trimestre, y dentro de los diez primeros días del siguiente, el secretario comunicará al Registro Central de Sancionados que la sanción fue extinguida, a los efectos de la cancelación del antecedente proveniente de la misma. De revocarse la sanción sustitutiva del encarcelamiento, y disponerse el cumplimiento de la de privación de libertad originalmente fijada, se extraerá el documento de los citados legajos, no ordenándose la invocada cancelación.

- **Instrucción No. 128 de 12 de abril de 1988. Sentencia. Ejecución. Suspensión. Revocación.**

La sentencia contendrá los fundamentos fácticos (artículo 32. 1) y jurídicos que permiten la imposición de esta sanción; en su parte dispositiva, se expondrán las obligaciones que se derivan de la misma (artículo 32. 3), así como cualquier otra acordada. Para su ejecución, se libra al centro de cumplimiento mandamiento de ingreso, testimonio de la sentencia y de la liquidación de sanción, quedando en la causa constancia de su recepción.

La suspensión de la ejecución de esta sanción, para lo que la ley no establece tiempo, debe ser instada por el centro de cumplimiento, acompañando fundada evaluación de conducta. Si el Tribunal accede a la pretensión aludida, lo informa a la PNR.

La revocación de la sanción tiene como presupuestos, que el sancionado no se haya presentado injustificadamente en la fecha y lugar señalado para su extinción; expresamente se niegue a ello (ver bajo este mismo rubro el *Dictamen No. 292 de 1988*); incumpla u obstaculice la observancia de las obligaciones impuestas en la sentencia, todo lo que informará el centro receptor al Tribunal; o resulte sancionado a privación de libertad por un nuevo delito (se unirá copia de la sentencia a la causa). En la tramitación de la revocación se podrá escuchar el parecer del Fiscal.

* Antes de adoptar la decisión de revocación de la sanción, el Tribunal debería escuchar al sancionado y, en su caso, a los representantes del centro de trabajo que presentó dicha solicitud.

- **Instrucción No. 154 de 13 de marzo de 1997. Suspensión. Revocación.**

La suspensión de la sanción de trabajo correccional con internamiento no equivale a la extinción. Cuando se suspende, el sancionado queda sometido a un control por parte del Tribunal—Juez de ejecución—(ver en *Remisión condicional*/la Instrucción No. 163 bis de 2002), y de los organismos correspondientes. Él deberá observar un buen comportamiento

social; en caso contrario, el Tribunal sancionador puede revocar la suspensión señalada, y ordenar que extinga la sanción de privación de libertad originalmente fijada, abonándole el tiempo de suspensión, para lo cual practicará nueva liquidación.

- **Instrucción No. 156 de 30 de abril de 1997. Ejecución. Control por la PNR.**
Ver en *Remisión condicional*.
- **Instrucción No. 163 bis de 24 de abril de 2004. Ejecución. Juez de control.**
Ver en *Remisión condicional*.
- **Dictamen No. 270.** Acuerdo No. 66 de 21 de julio de 1987. **Ejecución. Revocación. Sanción conjunta.**
Ver en *Limitación de libertad*; puede resultar de utilidad.
- **Dictamen No. 292.** Acuerdo No. 89 de 29 de agosto de 1988. **Ejecución. Revocación. Sancionado que de inicio se niega al cumplimiento.**
Si al notificar verbalmente a un acusado, la sentencia que impone la sanción de trabajo correccional con internamiento, en un juicio celebrado ante un Tribunal Municipal, este manifiesta en ese propio acto de notificación que no la cumplirá, el Tribunal tiene que esperar a que dicha resolución adquiera firmeza para su ejecución. Una vez firme, requerirá al sancionado para el cumplimiento de la sanción impuesta y, de negarse, se hará constar en acta extendida al efecto, revocándole el Tribunal la señalada sanción, y disponiendo que sufra la de privación de libertad, originalmente fijada.
* Este mismo proceder se puede utilizar en las demás sanciones subsidiarias de la de privación de libertad.
- **Dictamen No. 295.** Acuerdo No. 103 de 8 de noviembre de 1988. **Ejecución. Revocación. Sancionado que no se presenta al vencimiento del permiso de salida.**
Si a un sancionado a trabajo correccional con internamiento, se le concede permiso de salida del centro de extinción por tiempo limitado, y no se reincorpora en la fecha indicada, su actuar puede estar comprendido en el apartado 8 del artículo 32, teniendo el Tribunal la facultad para revocar la mencionada sanción.
- **Dictamen No. 296.** Acuerdo No. 104 de 8 de noviembre de 1988. **Determinación. Aspectos procesales. Sanción más grave.**
Si el Fiscal solicita la imposición de una de las sanciones sustitutivas de la de privación de libertad —trabajo correccional con o sin internamiento o limitación de libertad—, el Tribunal puede imponer la sanción de privación de libertad efectiva sin hacer uso de la fórmula del artículo 350 de la LPP.
* Sin duda, es un polémico asunto donde el CGTSP ha dado una importante definición, de manera que siempre que el Fiscal interese una sanción subsidiaria de la de privación de libertad, cabe la posibilidad de que el acusado sea condenado con prisión efectiva, sin el previo aviso de la invocada fórmula. Ver Dictamen No. 388 de 1999 sobre el procedimiento abreviado.
- **Dictamen No. 303.** Acuerdo No. 24 de 14 de marzo de 1989. **Obligaciones a imponer en la sentencia. Delito de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la comisión de contravenciones, artículo 170.**

No es posible establecer en la sentencia, dentro de las obligaciones a que se refiere el inciso b) del apartado 3 del artículo 32, la de emplear los ingresos provenientes del trabajo, para satisfacer la multa cuyo impago motivó el delito por el que se le sanciona.

- **Dictamen No. 305.** Acuerdo No. 43 de 11 de julio de 1989. **Sanción. Delito de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la comisión de contravenciones (artículo 170).**

Cuando en el apartado 2 del artículo 170 se establece, que el Tribunal “puede sustituir la sanción privativa de libertad por la de trabajo correccional con internamiento”, ello constituye un llamado de alerta para que los Tribunales impongan esta clase de sanción, lo que no impide la adopción de otras posibles, de acuerdo con la ley.

* La fórmula legislativa constituye una rareza, afortunadamente aclarada por el Dictamen, ya que al reprimirse el invocado delito con sanción de privación de libertad, que discurre de uno a seis meses, en principio, es posible la sustitución de esta sanción por cualquiera de las autorizadas —trabajo correccional con o sin internamiento, o limitación de libertad—, o su remisión condicional.

- **Dictamen No. 308.** Acuerdo No. 9 de 9 de enero de 1990. **Imposición a jóvenes de 16 años.**

El Tribunal podrá imponer las sanciones de trabajo correccional, con o sin internamiento, a jóvenes que tengan 16 años de edad, lo que no contradice la legislación laboral vigente.

- **Dictamen No. 317.** Acuerdo No. 8 de 19 de febrero de 1991. **Ejecución. Revocación. Sanción conjunta.**

Si durante el cumplimiento de una sanción de trabajo correccional con internamiento, el sujeto es condenado a privación de libertad por un delito cometido con anterioridad a la fecha en que se le impuso la mencionada sanción de trabajo correccional, se le revoca esta sanción subsidiaria, y se forma la sanción conjunta por el Tribunal que corresponda. De igual manera se procede, si una persona condenada a la sanción de privación de libertad, sin comenzar a extinguirla, es sancionada nuevamente a la pena de trabajo correccional con internamiento.

* El Dictamen interpreta el apartado 8 del artículo 32, en el cual se afirma que, si durante el cumplimiento de la sanción de trabajo correccional con internamiento, el sujeto es sancionado a privación de libertad por un “nuevo delito”, el Tribunal dispondrá que sufra lo que le resta de la sanción de privación de libertad originalmente fijada, después de deducir de la misma el tiempo cumplido de aquella. La interpretación del citado apartado 8, consistente en que para la revocación de la sanción a consecuencia de una condena ulterior, debe ser por un nuevo delito, entendiéndose esto como un delito cometido en el tiempo, con posterioridad a ser sancionado mediante sentencia ejecutoria a trabajo correccional con internamiento, no rige.

- **Dictamen No 326.** Acuerdo No. 58 de 18 de diciembre de 1991. **Ejecución. Evasión de presos. Revocación.**

El sancionado a trabajo correccional con internamiento, que abandone o se ausente del establecimiento donde se encuentra internado, para el cumplimiento de dicha sanción, o del lugar de trabajo destinado por esa institución, comete el delito de evasión de presos, previsto en el artículo 163, y, además, se le revoca la sanción subsidiaria.

* El delito señalado, según su nombre lo indica, se refiere a la evasión de presos o detenidos, que no es la condición del sancionado a trabajo correccional con internamiento, pero como en el tipo penal se expresa que la evasión puede ser del establecimiento penitenciario o del lugar en que el sujeto se halle cumpliendo la sanción; al parecer, esta es la razón por la que se le ha dado esa interpretación. Sostengo que las conductas objeto de la consulta, en su caso, sólo pueden motivar la revocación de la sanción

subsidiaria, pero no constituyen delito; de todas formas, la interpretación dada en el Dictamen, tiene carácter vinculante en la aplicación de la ley.

- **Dictamen No. 327.** Acuerdo No. 1 de 22 de enero de 1992. **Ejecución. Revocación. Sancionado que no se presenta al vencimiento del permiso de salida.**

Si un sancionado a trabajo correccional con internamiento —al vencimiento del término del pase o permiso de salida del establecimiento—, no se presenta en la fecha indicada para el cumplimiento de la sanción, ello puede constituir una falta grave, que de ser informada por la citada institución al Tribunal, este órgano procederá sin dilación a revocar la sanción subsidiaria, participándolo de inmediato a dicho centro.

* En la motivación de este acuerdo se reitera lo dispuesto en el Dictamen No. 326 de 1991, sobre sancionados a trabajo correccional con internamiento que se evadan de los centros, o lugares de trabajo, donde extinguen dicha sanción.

- **Dictamen No. 377.** Acuerdo No. 62 de 26 de diciembre de 1996. **Ejecución. Aplazamiento por incapacidad temporal. Revocación por incapacidad definitiva.**

Si un sancionado a trabajo correccional con internamiento —al ingresar en el establecimiento correspondiente para el cumplimiento de esta sanción, o durante el cumplimiento de la misma—, enferma o presenta padecimientos que lo incapacitan para el trabajo, el Tribunal deberá disponer el aplazamiento de la ejecución de la sanción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 498. I de la LPP por todo el tiempo que dure el impedimento, pero si este es de carácter definitivo o permanente para realizar las actividades laborales en el centro de trabajo al que se le destinó, entonces lo que procede es revocar la sanción subsidiaria (artículo 32.8), y disponer que el sancionado cumpla lo que le resta de la sanción de privación de libertad, originalmente fijada.

* Sin duda el Dictamen contiene tres aspectos de gran interés. Primero, extiende la institución del aplazamiento de la sanción de privación de libertad (artículo 498.1) a la subsidiaria de trabajo correccional con internamiento. Segundo, la aplicación del aplazamiento a una sanción, que se está ejecutando, constituye una novedad, pues siempre se entendió que lo que se aplazaba era el inicio de su cumplimiento (¿se abona el tiempo de aplazamiento al cumplimiento de la sanción?). Tercero, se da solución a un problema real que no está previsto en la ley, al ordenar la revocación de la sanción subsidiaria, en caso de imposibilidad de su extinción por razones ajenas a la voluntad del sancionado. (¿Podiera acordarse la licencia extrapenal en estos casos?)

Ver en *Privación de libertad*, los comentarios a la Instrucción No. 72 de 13 de julio de 1978.

- **Dictamen No. 381.** Acuerdo No. 6 de 13 de marzo de 1997. **Determinación. La condición de reincidente o multirreincidente no es un impedimento para su imposición.**

El hecho que un acusado tenga la condición de reincidente o multirreincidente, no impide que el Tribunal pueda imponerle la sanción de trabajo correccional con internamiento, pues la Ley no lo prohíbe (el Dictamen hace alusión a la Circular del Presidente del TSP No. 84 de 7 de enero de 1992, donde imparte indicaciones sobre este asunto).

- **Dictamen No. 416.** Acuerdo No. 70 de 14 de mayo de 2002. **Determinación. Ejecución. Revocación. Sanción conjunta.**

Cuando una persona es sancionada a cualquiera de las penas subsidiarias de trabajo correccional, con o sin internamiento, limitación de libertad; o la sanción de privación de libertad se remite condicionalmente, y sin comenzar a extinguir cualquiera de ellas, o durante su cumplimiento, es sancionada a privación de libertad por un delito

cometido con anterioridad o posterioridad al de la sentencia ejecutoria, no procede sustituir la nueva pena por cualquiera de estas subsidiarias (de igual o distinta calidad), ni remitirla condicionalmente, y de haber obrado así el Tribunal, lo procedente es revocar ambas condenas y formar la sanción conjunta.

El Tribunal encargado de formar la invocada sanción conjunta de privación de libertad —conforme al artículo 56— si estima que concurren los requisitos legales y las circunstancias que aconsejan racionalmente sustituir o remitir condicionalmente esta nueva pena, puede hacerlo en el ejercicio de su arbitrio judicial, según lo establecido en los artículos 32.1, 33.4, 34.4 y 57.

* El Dictamen resulta sumamente interesante para la interpretación de un complicado tema. Constituye un novedoso planteamiento que, una vez revocadas las sanciones subsidiarias, y formada la sanción conjunta de privación de libertad, esta pueda ser sustituida por una pena subsidiaria o remitida condicionalmente, cuando las penas bases para la constitución de la global no tienen esa consideración. Lamentablemente, en nuestro ordenamiento penal (artículo 56), si bien se establecen las reglas para la formación de la sanción conjunta —una vez determinado el nuevo marco penal— no se consignan qué factores se deben tener en cuenta para escoger una pena en su clase y extensión dentro de dicho marco; corriéndose el riesgo de incurrir en una doble valoración (en perjuicio o a favor del reo), al observar por segunda ocasión, elementos que ya se tuvieron en cuenta en la determinación de las penas individuales o bases de la conjunta. Ejemplo, en la determinación de las penas individuales, se aprecia las categorías de reincidencia y multirreincidencia, imponiendo las sanciones cercanas o coincidentes con sus límites máximos; y en el momento de formar la conjunta, esta se fija en el límite superior de la nueva escala, lo que se hace bajo los propios fundamentos antes mencionados.

Sección Cuarta (artículo 33)

— El trabajo correccional sin internamiento

- **Instrucción No. 84 de 10 de mayo de 1979. Ejecución. Liquidación de sanciones.**
Ver en *Privación de libertad*, ya que se refiere a todas las sanciones, tanto principales, como accesorias, en las que hay que determinar sus efectos en el tiempo.
- **Instrucción No. 127 de 12 de abril de 1988. Cancelación de oficio del antecedente penal.**
Ver en *Trabajo correccional con internamiento*.
- **Instrucción No. 128 de 12 de abril de 1988. Sentencia. Ejecución. Revocación.**
La sentencia contendrá los presupuestos fácticos (artículo 33. 1 y 4) y la fundamentación jurídica que permiten la imposición de esta sanción. En su parte dispositiva, se expondrá claramente las obligaciones que ella conlleva (artículo 33. 3), así como cualquier otra; el centro de trabajo al que se le destina (artículo 33.5) y las limitaciones que tendrá en el ámbito laboral durante su extinción (artículo 33. 7).
Se ejecuta la sanción, librando una orden de presentación al centro de trabajo previamente determinado en la resolución, lo que se informa a la PNR.
Puede revocarse, si el sancionado *ab initio* se niega a su extinción (ver el Dictamen No. 292 de 1988 en *Trabajo correccional con internamiento*); injustificadamente no se presenta en el centro; incumple u obstaculiza su cumplimiento, todo lo cual informará dicho centro

en su caso; o es sancionado a privación de libertad por un nuevo delito (se unirá testimonio de la ejecutoria a la causa). Antes de decidir, el Tribunal podrá escuchar el parecer del Fiscal. El proceder expuesto, se complementa con lo establecido en la Instrucción No. 163 *bis* de 2002.

- **Instrucción No. 156 de 30 de abril de 1997. Ejecución. Control por la PNR.**
*Ver en *Remisión condicional*.
- **Instrucción No. 163 Bis de 24 de abril de 2004. Ejecución. Juez de control.**
Ver en *Remisión condicional*.
- **Dictamen No. 270.** Acuerdo No. 66 de 21 de julio de 1987. **Ejecución. Revocación.**
*Ver en *Limitación de libertad, puede resultar de utilidad*.
- **Dictamen No. 292.** Acuerdo No. 89 de 29 de agosto de 1988. **Ejecución. Revocación. Sancionado que de inicio se niega al cumplimiento.**
Ver en *Trabajo correccional con internamiento*; puede resultar de utilidad.
- **Dictamen No. 296.** Acuerdo No. 104 de 8 de noviembre de 1988. **Determinación. Aspectos procesales. Sanción más grave.**
Si el Fiscal solicita la imposición de la sanción de trabajo correccional sin internamiento, sustitutiva de la de privación de libertad, el Tribunal puede imponer la sanción de privación de libertad efectiva sin hacer uso de la fórmula del artículo 350 de la LPP.
Ver comentarios a este Dictamen en *Trabajo correccional con internamiento*.
- **Dictamen No 308.** Acuerdo No. 9 de 9 de enero de 1990. **Imposición a jóvenes de 16 años de edad.**
El Tribunal podrá imponer las sanciones de trabajo correccional con internamiento o sin internamiento a jóvenes que tengan 16 años de edad, lo que no contradice la legislación laboral vigente.
- **Dictamen No 317.** Acuerdo No. 8 de 19 de febrero de 1991. **Ejecución. Revocación.**
Ver en *Trabajo correccional con internamiento*.
- **Dictamen No. 377.** Acuerdo No. 62 de 26 de diciembre de 1996. **Ejecución. Aplazamiento. Revocación.**
Ver en *Trabajo correccional con internamiento*, los criterios ofrecidos pueden resultar de utilidad.
- **Dictamen No. 416.** Acuerdo No. 70 de 14 de mayo de 2002. **Determinación. Ejecución. Revocación. Sanción conjunta.**
Ver en *Trabajo correccional con internamiento*.
- **Acuerdo No. 52 de 26 de octubre de 1992.**
Se deben crear en los municipios las condiciones adecuadas, para el eficaz cumplimiento de esta sanción.

Sección Quinta (artículo 34)

— La limitación de libertad

- **Instrucción No. 84 de 10 de mayo de 1979. Ejecución. Liquidación de sanciones.**
Ver en *Privación de libertad*, ya que se refiere a todas las sanciones, tanto principales, como accesorias, en las que hay que determinar sus efectos en el tiempo.
- **Instrucción No. 127 de 12 de abril de 1988. Cancelación de oficio del antecedente penal.**
Ver en *Trabajo correccional con internamiento*.
- **Instrucción No. 156 de 30 de abril de 1997. Ejecución. Control por la PNR.**
*Ver en *Remisión condicional*.

- **Instrucción No. 163 bis de 24 de abril de 2004. Ejecución. Juez de control.**
Ver en *Remisión condicional*.
- **Dictamen No. 270.** Acuerdo No. 66 de 21 de julio de 1987. **Ejecución. Revocación. Sanción conjunta.**
Cuando un sancionado a limitación de libertad, comete un delito durante el cumplimiento de la sanción, para la formación de la sanción conjunta se constata lo que le restaba por cumplir, a partir de la fecha en que incurrió en el nuevo delito.
* Este mismo criterio puede ser aplicado para las demás penas subsidiarias de la de privación de libertad.
- **Dictamen No. 292.** Acuerdo No. 89 de 29 de agosto de 1988. **Ejecución. Revocación. Sancionado que de inicio se niega al cumplimiento.**
*Ver en *Trabajo correccional con internamiento*; puede resultar de utilidad.
- **Dictamen No. 296.** Acuerdo No. 104 de 8 de noviembre de 1988. **Determinación. Aspectos procesales. Sanción más grave.**
Si el Fiscal solicita la imposición de la sanción de limitación de libertad, sustitutiva de la de privación de libertad, el Tribunal puede imponer la sanción de privación de libertad efectiva sin hacer uso de la fórmula del artículo 350 de la LPP.
Ver los comentarios a este Dictamen en *Trabajo correccional con internamiento*.
- **Dictamen No. 317.** Acuerdo No. 8 de 19 de febrero de 1991. **Ejecución. Revocación.**
Ver en *Trabajo correccional con internamiento*. El Dictamen es aplicable a esta sanción.
- **Dictamen No. 416.** Acuerdo No. 70 de 14 de mayo de 2002. **Determinación. Ejecución. Revocación. Sanción conjunta.**
Ver en *Trabajo correccional con internamiento*.
- **Acuerdo No. 61 de 30 de junio de 1987. Ejecución. Control.**
Deben unirse a la causa, los acusos de recibo de las comunicaciones libradas a la PNR, con la debida constancia de su recepción.

Sección Sexta (artículo 35)

— La multa

- **Instrucción No. 84 de 10 de mayo de 1979. Ejecución. Liquidación de sanciones.**
Ver en *Privación de libertad*, ya que se refiere a todas las sanciones, tanto principales, como accesorias, en las que hay que determinar sus efectos en el tiempo.
- **Instrucción No. 121 de 10 de febrero de 1987. Ejecución.**
En los casos en que se imponga la medida cautelar de fianza o multa y la preste una entidad estatal por medio de cheque emitido a través del Tribunal correspondiente, este procederá de inmediato a endosarlo debidamente, presentándolo en la sucursal de crédito del Banco Nacional de Cuba más próxima, gestionando le aplique los trámites establecidos para los depósitos judiciales sujetos a las resultas de la causa.
- **Instrucción No. 131 de 3 de mayo de 1988. Ejecución.**
En el caso del TPP, una vez firme la sentencia que impone la sanción de multa, previa liquidación de su importe en caso de haber estado el sancionado detenido o sufrido prisión provisional, se requiere para que la pague dentro de los treinta días siguientes, ante la oficina de control y cobro de multas de su lugar de residencia. En ese propio acto —requerimiento—, se le instruirá de las consecuencias del impago —apremio de bienes y personal, en su caso— entregándole copia de la boleta para hacerla efectiva y del requerimiento. Durante el mencionado período, podrá el sancionado solicitar al Tribunal pagar a plazos; de acceder este órgano, fijará los mismos y el monto a abonar en

cada uno. Para la ejecución por la citada oficina, el Tribunal le remite la documentación correspondiente. De no abonarla en el tiempo señalado, ni ser posible el cobro por la vía de apremio que establece el Decreto-ley No. 99 de 1987, la oficina lo informa al Tribunal y este, previa declaración de insolvencia —lo que hará por auto— dispone el apremio personal, con la prevención de ponerlo en libertad tan pronto abone el importe, descontando el tiempo de prisión sufrido a razón de un día por cuota.

En el caso de los TMP, se observarán las propias reglas, con la excepción que la diligencia de requerimiento se practica una vez concluido el juicio oral, sin esperar la firmeza de la sentencia; de recurrirse, dicha diligencia queda sin efecto. El TPP cuando resuelva el recurso con la celebración de vista, en esa propia fecha, efectúa un nuevo requerimiento, cuyo original unirá al rollo, remitiendo una copia junto con las actuaciones al TMP, y la otra la entrega al sancionado. De imponer por sí el TPP la sanción de multa, confecciona nueva boleta; en caso de ratificar la adoptada por la instancia, se emplea la originalmente elaborada.

* Sobre esta materia rigen las Instrucciones No. 87 de 1979, complementada por la No. 90 de 1980, ambas fueron derogadas por la No. 111 de 1983 y esta, a su vez, lo fue por la No. 112 de 1984. Aunque las mismas no tienen vigencia, su lectura resulta interesante. Por ejemplo, en la No. 87 (Apartado Segundo), se dan indicaciones para que quede constancia en la diligencia de requerimiento de los bienes susceptibles de embargo, en caso de impago, lo que no se reproduce en las posteriores.

Referido a la Instrucción vigente, No. 131, en el momento que se dictó, todo juicio de apelación se resolvía con la celebración de vista. Luego esta situación cambió (Decreto-ley No. 151 de 1994), de manera que hay recursos de esta clase que se deciden sin vista; en estos casos, ¿quién practica el requerimiento? Una solución pudiera ser que el TPP, al citar al sancionado para notificarle lo acordado, lo requiera. Otro supuesto que no pudo prever la Instrucción, lo es en el caso del procedimiento abreviado, cuando en el acto se declara la firmeza (artículo 487. 6 de la LPP), aquí el requerimiento se puede practicar a continuación.

- **Dictamen No. 21.** Acuerdo No. 376 de 4 de septiembre de 1978. **Determinación. Límite mínimo** (“hasta”).

Cuando una ley penal expresa solamente el límite máximo de la sanción de multa, empleando la fórmula “hasta”, deberá entenderse que el límite mínimo es una cuota.

* Este Dictamen se acordó bajo la vigencia del Código de Defensa Social y es aplicable a la ley actual. Ejemplos de delitos donde aparece la invocada fórmula, lo son los comprendidos en los artículos 178.3, 179.9, 181.2, 184.1 c) y d), entre otros. Según el artículo 35.2, las cuotas no serán inferiores a un peso ni superior a cincuenta pesos. Para determinar el importe de las cuotas, se tendrá en cuenta la posición económica del infractor, cuidando —en lo posible— de no afectar la parte de los recursos destinados a satisfacer sus necesidades básicas y la de los familiares a su abrigo (artículo 35.4).

- **Dictamen No.49.** Acuerdo No. 4 de 11 de enero de 1979. **Ejecución ante impago. Sujeto que extingue medida de seguridad.**

Impuesta la sanción de multa a un asegurado que extingue una medida detentiva —dado su estado peligroso—, de acordarse por el Tribunal sancionador el apremio personal por su impago, se suspende el cumplimiento de dicha medida y se recluye al sancionado en el establecimiento correspondiente, de modo que sufra —con preferencia

a la medida indicada—, prisión subsidiaria en defecto del pago de la multa en los términos que establece la ley. Una vez cumplida la sanción, toma de nuevo su curso la medida.

* Este Dictamen se acordó estando en vigor el Código de Defensa Social, pero considero que tiene vigencia, según lo establecido en el artículo 77.2. La suspensión de la medida la acuerda el Tribunal que la dispuso, y no el Tribunal sancionador, excepto que sea el mismo órgano. La medida y el apremio personal, se cumplen en establecimientos diferentes, en virtud de sus fines (ver artículo 592 del CDS).

• **Dictamen No. 88.** Acuerdo No. 71 de 29 de febrero de 1980. **Ejecución. Sancionado a privación de libertad y multa.**

Impuestas en una misma sentencia, las sanciones de privación de libertad y multa, a los efectos de la ejecución de esta última —una vez firme la resolución— hay que requerir al sancionado para que la abone en el término de 30 días, contados a partir de la práctica de dicha diligencia, y transcurrido este plazo sin hacerla efectiva, se dispone su cobro mediante la vía de apremio. Luego de la declaración de insolvencia, se acordará el apremio personal en los términos establecidos en la Ley, rectificándose —en su caso— la liquidación de la sanción de privación de libertad originalmente fijada, incluyendo en la nueva liquidación el citado apremio.

* El Dictamen deja esclarecido que no es posible la práctica simultánea de las dos liquidaciones: la de la sanción de privación de libertad y la de multa, sin antes haber obrado, como establece la Ley, para el cumplimiento de esta última sanción. Una vez declarado el apremio personal —en defecto del pago de la multa— se procede a la rectificación de la liquidación de la sanción de privación de libertad, añadiéndole el referido apremio (¿se extinguen una a continuación de la otra, o se forma una sanción conjunta?).

• **Dictamen No. 148.** Acuerdo No. 101 de 17 de agosto de 1982. **Ejecución. Sancionado a privación de libertad y multa.**

Cuando se sanciona a un acusado a privación de libertad y, a la vez, al pago de una multa, no hay impedimento legal para que, ejecutándose la sanción de privación de libertad, se dé cumplimiento a lo dispuesto en la ley con respecto a la ejecución de la sanción pecuniaria. Esto consiste en practicar el requerimiento —en el supuesto de impago ir a la vía de apremio— y, en el caso de insolvencia, disponer que sufra apremio personal, para lo cual se hará la correspondiente rectificación de la liquidación de la sanción de privación de libertad que está cumpliendo.

* El contenido de este Dictamen es similar al No. 88 de 1980 —también tratado en esta sanción—. Sería interesante la cuestión de cómo proceder ante el supuesto que el sancionado a multa, en el momento de ser declarado insolvente y disponerse el apremio personal, esté cumpliendo una sanción sustitutiva de la de privación de libertad, TCCI, TCSI o LL. (¿Se interrumpe el cumplimiento de estas para que extinga el apremio personal? ¿Se revocan estas condenas, aun cuando la nueva no constituye privación de libertad —efectiva o no— y se forma una sanción conjunta?)

• **Dictamen No. 333.** Acuerdo No. 34 de 29 de junio de 1992. **Revisión. Es sancionado a privación de libertad quien antes lo fue a multa.**

Si a consecuencia de un procedimiento de revisión, es sancionado a privación de libertad quien antes lo fue a multa, el importe de esta se devuelve, y extingue la nueva sanción de prisión acordada en dicho procedimiento.

- **Dictamen No. 363.** Acuerdo No. 32 de 30 de mayo de 1995. **Ejecución. Pago de la multa a plazos.**

La oficina de cobro de multas, de no poder hacer efectivo el cumplimiento de esta sanción en los términos que establecen las disposiciones legales sobre la materia, lo informará de inmediato al Tribunal a los efectos procedentes.

Sólo la ley faculta al Tribunal para acordar el pago de la multa a plazos (artículo 35.6), y este órgano lo comunicará a la oficina de cobro de multas. El incumplimiento en el pago de alguno de los plazos lleva aparejada la pérdida de ese beneficio, lo que acontece al vencimiento de dicho término, sin necesidad de declaración judicial (de lo cual debe instruirse al sancionado en la resolución en que se dispone este beneficio), y la mencionada oficina procederá, mediante la vía de apremio que establece la legislación correspondiente, pudiendo disponer el embargo de cualquier ingreso que perciba el obligado, hasta cubrir el monto total de los plazos que quedaban por abonar, pero esta operación se hará en una sola ocasión, pues en caso contrario (embargo a próximos ingresos) —de hecho— se convertiría nuevamente en el pago de la multa a plazos. De no cobrarse la multa de la manera indicada, la oficina lo informará al Tribunal, el que dispondrá el apremio personal.

Sección Séptima (artículo 36)

— La amonestación

- **Dictamen No. 251.** Acuerdo No. 146 de 4 de noviembre de 1986. **Ejecución.**

Cuando un TMP imponga una sanción de amonestación, luego de la notificación verbal de la sentencia, el Presidente requerirá al acusado para que manifieste si tiene intención de recurrir la misma; de ser negativa la respuesta, la amonestación se ejecuta de inmediato, sin esperar la firmeza de la resolución, lo que no impide que el acusado pueda establecer el recurso, si lo hace dentro del plazo que establece la ley.

* El proceder indicado, se aparta del principio de que sólo se procede a la ejecución de una sentencia, cuando esta adquiere su firmeza. (¿Puede obrarse de la manera indicada en el caso del procedimiento abreviado ante el TPP, pues la sentencia también se pronuncia en forma verbal?)

- **Dictamen No. 272.** Acuerdo No. 68 de 21 de julio de 1987. **Ejecución.**

Si se ejecuta la sanción de amonestación antes de que la sentencia adquiera firmeza, y el acusado establece recurso de apelación, se entenderá que la amonestación ha quedado sin efecto, y que se estará a lo que, en definitiva, resulte de la apelación.

* En caso de declararse el recurso sin lugar, se ejecuta nuevamente esta sanción.

CAPÍTULO IV

Las sanciones accesorias

ASPECTOS PROCESALES DE CARÁCTER GENERAL

- **Instrucción 84 de 10 de mayo de 1979. Ejecución. Liquidación de sanciones.**

*Ver *Privación de libertad*, ya que se refiere a todas las sanciones, tanto principales, como accesorias, en las que hay que determinar sus efectos en el tiempo.

- **Dictamen No. 265.** Acuerdo No. 34 de 23 de abril de 1987. **Solicitud por el Fiscal.**
El Fiscal, en su escrito de calificación, debe solicitar las sanciones accesorias que correspondan; de no hacerlo, el Tribunal le devolverá el expediente, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 263 de la LPP para que supla dicha falta.
De insistir el Fiscal en su negativa de solicitar la aplicación de las sanciones accesorias, señaladas por el Tribunal, en el supuesto que estas sean preceptivas, se impondrán sin hacer uso de la fórmula (artículo 350 de la LPP), pero en el caso de las facultativas, para declararlas, tendrá que hacerse uso de la mencionada institución.
* Recuerdo haber intervenido en la redacción de la consulta.
- **Acuerdo No. 47 de 31 de enero de 1979. Sentencia.**
Los Tribunales, en la parte dispositiva de la sentencia, señalarán de modo expreso y concreto, las sanciones accesorias acordadas, así como sus términos de duración; sin perjuicio de su fundamentación en el correspondiente considerando.
* En ocasiones, se ha recomendado, o sugerido, tratar las sanciones accesorias en un considerando, independiente, del que hace alusión a las sanciones principales.
- **Acuerdo No. 5 de 4 de enero de 1983. Sentencia.**
*Reitera el Acuerdo No. 47 de 1979. Ver bajo este mismo rubro.

Sección Primera (artículo 37)

— La privación de derechos

- **Dictamen No. 244.** Acuerdo No. 48 de 10 de abril de 1986. **Determinación.**
Se aplica en todos aquellos casos en que se impone la de privación de libertad.
* A pesar del laconismo del dictamen, donde no se hace distinción entre prisión efectiva o sustituida, entiendo que es en todos los casos (ver Ley electoral).

Sección Segunda (artículo 38)

— La privación o suspensión de los derechos paterno filiales

Sección Tercera (artículo 39)

— La prohibición del ejercicio de una profesión, cargo u oficio

Sección Cuarta (artículo 40)

— La suspensión de la licencia de conducción

- **Dictamen No. 154.** Acuerdo No. 161 de 7 de diciembre de 1982. **Ejecución. Remisión condicional.**
En los delitos cometidos en ocasión de conducir vehículos por las vías públicas, cuando se remita condicionalmente la sanción principal de privación de libertad, y deba ejecutarse la accesoria de suspensión de la licencia de conducción impuesta —al no autorizar la Ley que dicha remisión se extienda a las sanciones accesorias—, a los efectos de su cumplimiento, se computará a partir del día en que el sancionado comience a disfrutar de la remisión condicional.
* Se trata de una importante interpretación para la ejecución de esa sanción accesoria, pues la ley en su artículo 182.2 expresa: “El término de dicha sanción accesoria será equivalente al de la más grave sanción de privación de libertad impuesta y se contará desde el día en que el sancionado comienza a disfrutar de libertad, aunque sea condicional”.

En el caso de remitirse condicionalmente la sanción de privación de libertad, no queda la menor duda de a partir de cuándo comienza a extinguirse la sanción accesoria comentada.

- **Dictamen No. 160.** Acuerdo No. 72 de 27 de abril de 1983. **Determinación.**

La sanción accesoria de suspensión de la licencia de conducción sólo se impone en los casos de delitos cometidos contra la seguridad del tránsito, y no en otros.

* El Dictamen apareció bajo el imperio del CP de 1979, pero conserva su vigencia. Véase artículo 182.1. Ejemplo, no es posible acordar dicha sanción por un delito de daños cometido por imprudencia (artículo 339.1 en relación con el 9.3), al chocar dos vehículos en el área de un parqueo ubicado en el sótano de un edificio (no se trata de un delito cometido en las vías públicas).

- **Acuerdo No. 175 de 22 de noviembre de 1983. Determinación.**

* La consulta consiste en conocer, si el Tribunal puede acordar la sanción accesoria de suspensión de la licencia de conducción, contra un sujeto que no la posea, por no habersele expedido por el órgano competente. El Acuerdo se limita a exponer, que el asunto consultado se halla previsto en el artículo 182. 6.

Sección Quinta (artículo 41)

— La prohibición de frecuentar medios o lugares determinados

- **Instrucción No. 156 de 30 de abril de 1997. Ejecución. Control por la PNR.**

Ver en *Remisión condicional*.

Sección Sexta (artículo 42)

— El destierro

- **Instrucción No. 156 de 30 de abril de 1997. Ejecución. Control por la PNR.**

Ver en *Remisión condicional*.

Sección Séptima (artículo 43)

— El comiso

- **Instrucción No. 109 de 27 de abril de 1983 (Apartado Tercero). Estafa. Efectos del delito.**

Cuando, en causas seguidas por el delito de estafa, la defraudación proviene de un acto jurídico celebrado de común acuerdo, entre el victimario y la víctima, en contra de una prohibición legal, o de los intereses de la sociedad y del Estado; o incumpliendo formalidades legales, establecidas con carácter de requisito esencial, y nulo, por tanto, desde el punto de vista del Derecho civil, no puede hacerse declaración sobre responsabilidad civil en beneficio de la víctima en la sentencia, más lo que hubiese recibido el autor del delito en virtud de dicho acto, se decomisa y pasa al patrimonio del Estado, en concepto de efectos del delito.

- **Dictamen No. 44.** Acuerdo No. 505 de 1ro de diciembre de 1978. **Ejecución. Vehículos.** Los vehículos automotores que caigan en comiso deben ser entregados al Ministerio de Transporte.

* Es necesario revisar la vigencia de este Dictamen.

- **Dictamen No. 94.** Acuerdo No. 147 de 21 de abril de 1980. **Determinación. Objeto destinado a servir para su perpetración.**

En el caso del delito de actividades económicas ilícitas, previsto en el artículo 272 del CP de 1979, cometido por personas dedicadas a transportar pasajeros en un carro particular sin estar autorizado para ello, el vehículo utilizado en ese servicio caerá en comiso, a menos que pertenezca a un tercero que no haya tenido intervención en su comisión, por constituir un objeto destinado a servir para su perpetración.

* A los efectos de determinar si el comportamiento objeto de la consulta, constituye delito actualmente y, por tanto, poder acordar el comiso, hay que examinar las normas especiales sobre la materia, dictadas posteriormente.

- **Dictamen No. 140.** Acuerdo No. 45 de fecha 6 de abril de 1982. **Determinación. Bienes provenientes del delito.**

Los objetos adquiridos con el dinero apropiado a consecuencia de la comisión de los delitos de malversación, robo, hurto u otros de similar naturaleza, caen en comiso, en concepto de bienes provenientes del delito.

* Los referidos bienes, tienen el concepto de bienes que proceden indirectamente del delito.

- **Dictamen No. 156.** Acuerdo No. 170 de 21 de diciembre de 1982. **Ejecución. Vehículos.**

Los vehículos que resulten decomisados o confiscados por sentencia firme de los Tribunales, serán recepcionados por la Empresa de equipos y piezas de la provincia donde radique el órgano que dispuso dicha sanción.

* Es necesario revisar la vigencia de este Dictamen.

- **Dictamen No. 205.** Acuerdo No. 168 de 20 de noviembre de 1984. **Determinación. Bienes de terceras personas.**

Sólo se decomisan los bienes poseídos por el acusado “que sirvieron, o estaban destinados a servir, para la perpetración del delito, así como de los provenientes, directa o indirectamente del mismo, y que no pertenezcan a un tercero no responsable”; por lo tanto, no se pueden decomisar los bienes de terceras personas.

El perjudicado tiene el derecho a que se le restituya el bien objeto del delito, aun cuando hubiese sido lícitamente adquirido por un tercero, el que podrá repetir por la vía civil.

* En el artículo 43 del CP de 1979, quedaba establecida la prohibición de decomisar bienes pertenecientes a un tercero no responsable. En la Ley No. 62 se reprodujo dicha aclaración, la que luego fue suprimida por modificación posterior (Decreto-ley No. 150 de 1994), y es como rige actualmente. Sin embargo, haya o no la aclaración, no es posible decretar el comiso de bienes que pertenezcan a un tercero no responsable; excepto que estén comprendidos en el supuesto del apartado 2 del artículo 43, “que se encuentren en posesión o propiedad de terceros no responsables, cuando tal posesión o propiedad resulte el medio para ocultar o asegurar esos bienes u objetos, o para beneficiar a terceros”.

En cuanto a la restitución de los bienes, el Tribunal la ejecuta directamente, según preceptúa el artículo 70.1.

- **Dictamen No. 232.** Acuerdo No. 100 de 25 de junio de 1985 (artículo 8. 2).

En el caso de no considerarse delito el hecho —según lo preceptuado en el artículo 8, apartado 2— de haber piezas de convicción ocupadas, si se trata de cosas de uso, tenencia o comercio ilícito; procede decretar su comiso.

* El Dictamen establece una curiosa fórmula, pues las sanciones accesorias, como su nombre lo señala, se imponen junto a las que tienen la categoría de principal. En el caso de la consulta, se indica imponer la sanción accesoria de comiso, sin haber

sanción principal, lo que constituye una novedad en nuestro ordenamiento penal (ver artículo 271. 4 de la LPP).

- **Dictamen No. 256.** Acuerdo No. 161 de 3 de diciembre de 1986. **Procedimiento de revisión. Devolución de bienes decomisados.**

Si se decretó el comiso por sentencia firme, y luego el sancionado es absuelto en un procedimiento de revisión, se devolverán los bienes decomisados y, de no ser posible, por su destrucción o haberlos adquirido legalmente un tercero, el sancionado absuelto tendrá derecho a reclamar, mediante la vía civil, la indemnización correspondiente.

- **Dictamen No. 278.** Acuerdo No. 110 de 13 de noviembre de 1987. **Ejecución Vehículos.** Los vehículos decomisados o confiscados serán entregados a la Empresa de Abastecimiento y Venta de Equipos y Piezas de la provincia.

* Es necesario revisar la vigencia de este Dictamen.

- **Dictamen No. 364.** Acuerdo No. 33 de 30 de mayo de 1995. **Comiso en caso del delito de receptación.**

Primero: La sanción accesoria de comiso de los efectos o instrumentos del delito, no contempla excepción de su empleo en ilícito penal alguno y teniendo vida propia el delito de receptación, le es de aplicación en lo atinente tal sanción accesoria.

Es requisito que los objetos, sobre los cuales recaiga la sanción accesoria de comiso, hayan servido como instrumentos necesarios para la realización del acto ilegal, que en el caso de la consulta resultarían aquellos medios utilizados para adquirir, cambiar u ocultar bienes que el autor conocía, o debía suponer racionalmente que procedían de un delito; o resultan consecuencia, o provengan, directa o indirectamente, de ese actuar ilícito.

Segundo: Los objetos susceptibles de comiso en virtud de este delito, han de resultar medios necesarios y útiles, empleados de manera expresa e intencional para poder adquirir, cambiar u ocultar los artículos cuyo autor conocía, o debía suponer, provenían de un delito anterior, y no basta con que su empleo resulte de la eventualidad del momento, o la habitualidad de su uso; de modo que en cada caso resulte necesario el análisis individualizado y la fundamentación correcta, y así determinar el empleo de esta sanción accesoria.

De lo anterior es preciso concluir —en cuanto a los medios de transporte empleados, que pueden ser objeto de comiso— el requisito de que concurra su elección de forma intencional, para poder materializar la adquisición, el cambio o la ocultación de aquellos artículos que su autor sabe que provienen de un delito o debe suponerlo. Ello excluye su aplicación mecanicista en casos en que la persona, habitualmente, emplea ese medio de transporte y este no resulta esencial para ejecutar el hecho, o cuando el momento de consumación de este acto punible se produce de modo casual, en la oportunidad en que su autor se traslada en un medio de transporte, sin que esta circunstancia haya sido elegida expresamente con ese propósito.

* Por la importancia del contenido del Dictamen lo transcribo de manera íntegra.

- **Acuerdo No. 396 de 23 de junio de 1976. Carnet de Identidad.**

Firme una sentencia referida a la falsedad de un Carnet de Identidad, este documento será remitido a la Sección del Carnet de Identidad y Registro de Población del MININT.

- **Acuerdo No. 229 de 11 mayo de 1977. Carnet de Identidad.**

* Reitera el Acuerdo No. 396 de 1976. Ver bajo esta misma sanción.

Sección Octava (artículo 44)

— La confiscación de bienes

- **Dictamen No. 256.** Acuerdo No. 161 de 3 de diciembre de 1986. **Comiso y procedimiento de revisión.**
Ver en *Comiso*, puede resultar de utilidad.
- **Dictamen No. 278.** Acuerdo No. 110 de 13 de noviembre de 1987. **Ejecución. Vehículos.**
Los vehículos decomisados o confiscados serán entregados a la Empresa de Abastecimiento y Venta de Equipos y Piezas de la provincia.
* Es necesario revisar la vigencia de este Dictamen.

Sección Novena (artículo 45)

— La sujeción a la vigilancia de los órganos y organismos que integran las Comisiones de Prevención y Atención Social

Sección Décima (artículo 46)

— La expulsión de extranjeros del territorio nacional

CAPÍTULO V

La adecuación de la sanción

Sección Primera (artículo 47)

— Disposiciones Generales

- **Instrucción No. 115 de 20 de junio de 1984. Artículo 8. 2.**
La Instrucción establece un grupo de normas para la aplicación del Apartado Segundo de artículo 8, “conducta carente de peligrosidad social”, lo que en el orden procesal conduce a la absolución. Asimismo, en su Apartado Tercero dispone, “que aun cuando de acuerdo con las mismas no se exonere al comisor, estas deben ser tenidas en cuenta en la adecuación de la sanción”.
Las invocadas reglas, sirven para apreciar la gravedad del hecho y las condiciones personales del comisor. Entre las primeras, encontramos las consecuencias ocasionadas, el grado de realización, móvil, modo de ejecución, características de tiempo, lugar y situación político social. Las segundas, hacen alusión a la edad, antecedentes, actividad a la que se dedica, medio familiar, hijos, capacidad de discernimiento y condiciones de salud, en particular, compatibilidad con el régimen penitenciario en su caso.
* Recuerdo haber escuchado al Dr. Francisco Varona, en aquel entonces Vicepresidente del TSP, y jurista de gran prestigio, que esta Instrucción constituyó en su época un “plan de política criminal”. No es menos cierto, que muchas de las novedosas instituciones que aparecieron en el Código Penal de 1979, entre las que se encuentra el apartado 2 del artículo 8, inicialmente fueron tomadas con cierta reserva para su aplicación (sucedió así también con la sanción de limitación de libertad).
- **Instrucción No. 118 de 15 de marzo de 1985. Prisión provisional.**
* La Instrucción se refiere de manera exclusiva a la prisión provisional, y fue dictada con el propósito de “reducir al máximo” el número de acusados sujetos a esta medida.

La misma, obedeció a las indicaciones impartidas al TSP y la FGR por el Consejo de Estado mediante Acuerdo de 8 de marzo de 1985. No obstante limitarse a la prisión provisional, derogó la No. 91 de 1980, la cual trataba conjuntamente el referido tema —prisión provisional— con la adecuación de la sanción, ésta a su vez substituyó la No. 66 de 1977 y No. 70 de 1978, que abordaban los mismos asuntos.

En la comentada Instrucción, encontramos definiciones que resultan de utilidad para la adecuación de la sanción, máxime cuando parten de un Acuerdo del Consejo de Estado, entre las que se encuentran: cuando se considera que un acusado posee buenos antecedentes personales y observa buena conducta,⁷ que el delito ha producido alarma, o que es de los que se cometen con frecuencia; factores o elementos que, comúnmente, son tomados en cuenta para la medición de la sanción.

• **Instrucción No. 137 de 1ro de noviembre de 1990.**

La Instrucción se corresponde con las circunstancias y condiciones por las que atravesaba el país en el momento de su adopción: “Período especial en tiempos de paz”. En esta se recomiendan, con carácter general, “sancionar con la consecuente severidad a los que pretendan medrar a expensas del pueblo honesto y trabajador, y obtener un provecho personal ilícito, perturbando la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos [...] sin menoscabar los derechos y garantías de los enjuiciados [...]”. A continuación relaciona un grupo de delitos, “que presentan particular significación”, entre los que se encuentran el robo, hurto y sacrificio de ganado mayor, malversación, enriquecimiento ilícito, especulación y acaparamiento, cohecho, atentado, resistencia, desobediencia, delitos vinculados con la alimentación de la población, el combustible, o contra extranjeros. También alude a manifestaciones de codeincuencia. Reitera la necesidad de imponer las sanciones accesorias de los artículos 39 (inhabilitación para...) y 43 (comiso), cuando corresponda. Así como no acordar la remisión condicional, o sancionar a limitación de libertad en los señalados casos. Ratifica las Circulares No. 51 y 52 de 1987 del Presidente del TSP, referidas a delitos contra extranjeros la primera y casos de atentado, resistencia y desobediencia la otra.

* La Instrucción obedece a un momento histórico; le siguieron el Acuerdo Circular No. 52 de 26 de octubre de 1992 y la Circular No. 98 de 27 de septiembre de 1993 del Presidente del TSP a la que se acompaña un documento titulado “Precisiones sobre la política penal a seguir, complementarias de la Instrucción No. 137 de 1990 y del Acuerdo Circular No. 52 de 1992 del CGTSP”. Las citadas Disposiciones no han sido expresamente substituidas y, sin duda, sus contenidos son de un gran valor.

• **Instrucción No. 170 de 11 de diciembre de 2002. Drogas.**

Los Tribunales actuarán con el rigor necesario, sin menoscabo de los derechos y garantías fundamentales de los enjuiciados, en los casos de delitos relacionados con la producción, cultivo, venta, demanda, tráfico, distribución y tenencia ilícita de drogas,

⁷ Se considera que el acusado posee buenos antecedentes personales y observa buena conducta, cuando reuniendo las cualidades comunes del ciudadano respetuoso de la legalidad socialista, cumplidor de sus deberes y de las normas de convivencia social, no haya sido sancionado a privación de libertad por delito intencional o sujeto a una medida de seguridad detentiva ni advertido oficialmente en tres oportunidades, sin exigir requisitos de superior comportamiento. En los casos en que el acusado hubiere sido anteriormente sancionado o sujeto a una medida de seguridad detentiva o advertido oficialmente en tres o más ocasiones, deberá tenerse en cuenta, a los efectos de considerar que no posee buenos antecedentes o no observa una buena conducta, la naturaleza y gravedad del delito cometido anteriormente, la existencia o no de intencionalidad, el tiempo transcurrido y la conducta social mantenida a partir de la extinción de la sanción impuesta, del cumplimiento de la medida de seguridad o de las advertencias oficiales.

estupefacientes, sustancias psicotrópicas y otras de efectos similares; especialmente en casos de tráfico internacional, búsqueda y escamoteo de recalos, cultivadores, comercialización, en particular en centros nocturnos, o facilitándolas a menores de edad, estudiantes, o ante manifestaciones de asociación para dicha comisión. No siendo recomendable, como regla, el empleo de sanciones sustitutivas de la de prisión, ni la remisión condicional de esta en los mencionados supuestos. Aplicar, consecuentemente, las penas accesorias de comiso y confiscación.

• **Instrucción No. 175 de 21 de julio de 2004.**

Recomienda con carácter general, evitar la imposición de la sanción de privación de libertad efectiva, en los casos de delitos donde la ley prevé sanciones de multa, o es posible su sustitución por penas subsidiarias, especialmente, cuando se trate de acusados jóvenes, menores de 21 años de edad y de normal conducta anterior. Reitera la necesidad de imponer las sanciones accesorias que correspondan, particularmente las de comiso y confiscación. Reclama especial atención en la individualización en caso de pluralidad de acusados. Solicita un cuidadoso examen sobre las circunstancias modificativas de la responsabilidad y, en el caso de las atenuantes, acordar la atenuación extraordinaria cuando proceda. Indica no apreciar antecedentes penales cancelados o que debieron serlo, de oficio, por el transcurso del tiempo, ni tampoco los procedentes de sanciones subsidiarias extinguidas. No deroga expresamente ninguna de las disposiciones referidas a la adecuación de la sanción, “ratifica las orientaciones contenidas en las diversas Instrucciones, Acuerdos y Circulares del TSP”.

* Considero entre las disposiciones más importantes, sobre adecuación de la sanción, a partir de 1990, las Instrucciones No. 137 de 1990 y No. 170 de 2002, el Acuerdo Circular No. 52 de 1992, y la Circular No. 98 de 1993 (incluyendo la comentada No. 175). Hay un grupo de circulares que se citan en las propias disposiciones estudiadas, que abordan particulares asuntos dentro de esta materia.

• **Dictámenes. No. 221.** Acuerdo No. 51 de 2 de abril de 1985. **Antecedentes de conducta.**

En las investigaciones preparatorias del juicio oral, deben obrar las relacionadas con la personalidad del acusado y su conducta moral, política y social, lo que exigirá el Tribunal de no haberse cumplido cabalmente.

* Entre los elementos que el legislador exige tener en cuenta para la adecuación de la sanción —artículo 47—, se encuentra el comportamiento del acusado, con anterioridad y con posterioridad a la comisión del delito; con esa finalidad, en el artículo 157 de la LPP se expresa “[...] se traerá a las actuaciones el informe que emita sobre ello la Policía [...]”; cumpliéndose normalmente tal disposición, uniendo a las investigaciones un informe cuyo origen se desconoce, siendo —en ocasiones— objeto de múltiples e innecesarias controversias (“nadie se responsabiliza con la información ofrecida”). Esta situación se puede revertir con facilidad, llevando al expediente un informe elaborado por el Jefe del Sector Policial, por ejemplo; o por representantes populares —instituciones del poder estatal o de organizaciones de masas—, pero constando siempre quien ofrece la información.

La LECrim, en sus artículos 377 y 378, exigía que los informes sobre moralidad y conducta del acusado, fueran expedidos por los Alcaldes de Barrio, o los funcionarios correspondientes de la Policía del Pueblo, y tenían que ser fundados. Además, podía recibírsele declaración sobre estos aspectos, a todas las personas que pudieran

ilustrar sobre los mismos. De manera que se conocía el origen de la información, y quien la ofrecía, no tenía responsabilidad alguna, “sino en caso de malicia probada”.

Sobre el concepto de acusado que posee buenos antecedentes personales y observa buena conducta ver en esta propia Sección los comentarios a la Instrucción No. 118 de 1985.

• **Acuerdo No. 52 de 26 de octubre de 1992. Complementa la Instrucción No. 137 de 1990.**

Recomienda en determinados supuestos imponer multas elevadas, remitir condicionalmente la condena, o sancionar a trabajo correccional sin internamiento, así como decretar el comiso y la confiscación, en su caso.

* El Acuerdo precisa los términos de la Instrucción No. 137 de 1990, aconsejando —en determinados asuntos— el empleo de sanciones distintas a la privación de libertad efectiva.

Puede resultar de interés, por su valor histórico, el Acuerdo No. 331 de 14 de julio de 1979, también referido a esta materia.

• **Acuerdo No. 239 de 8 de octubre 1999.**

De forma excepcional, autoriza a los Tribunales —en todos sus grados—, a adecuar la sanción partiendo del marco penal correspondiente a la modalidad básica del delito de que se trate, si estiman que aun el límite mínimo previsto para la figura agravada, por la que se procede, resulta excesivamente severo de acuerdo con la peligrosidad del hecho, la entidad de sus consecuencias y la personalidad del comisor.

* Su antecedente lo es el Acuerdo No. 71 de 10 de junio de 1986. Sin duda, resulta una fórmula de muy útil aplicación para los casos previstos. Veo su fundamento, en que es posible la obtención de las finalidades programáticas de la sanción, al determinarla, partiendo del marco penal de la figura o modalidad básica del delito de que se trata, ya que el empleo de la agravada —modalidad calificada—, resultaría un despropósito. Me surge la siguiente interrogante, una vez apreciado dicho Acuerdo ¿es posible la modificación de ese marco penal, utilizando reglas de agravación o atenuación de la pena? Ejemplos las de los artículos 11.1, 12. 5, 17, 19. 2, 20. 2, 54 y 55. Del propio Acuerdo No. 239, que restablece las facultades otorgadas a los Tribunales por el citado Acuerdo No. 71, se deduce claramente que sí es posible, al emplear la frase “partiendo”; por otro lado, nunca esto fue motivo de polémica durante la vigencia del Acuerdo No. 71, apreciando los Tribunales las invocadas reglas. Una opinión negativa se apoya en el Dictamen No. 417 de 2002, y de la cual respetuosamente disiento. El Dictamen responde a la pregunta siguiente: ¿en caso de los delitos de robo con violencia o fuerza, en sus modalidades agravadas por la reincidencia específica, de hacerse uso del Acuerdo No. 239 de 1999, es posible aumentar el marco penal de la modalidad básica por dicha condición? El CGTSP responde negativamente, de forma inobjetable y con total apego a la ley (artículo 47. 2), ya que la reincidencia aludida constituye un elemento del tipo agravado calificado; y así da respuesta a la pregunta, y aun cuando se emplea la frase “sin otra consideración”; esta se refiere al particular consultado.

Relación de Instrucciones y Dictámenes sobre particulares instituciones

A continuación, relaciono un grupo de Instrucciones y Dictámenes que aluden a la adecuación de la sanción, de manera total o parcial, los que organizo según la institución que tratan, y es en aquel lugar, donde los he resumido y comentado, en su caso.

- **Remisión condicional:** Instrucción No. 72 de 1978 (se acuerda en la sentencia). Dictámenes No. 154 de 1982 (sólo alcanza las sanciones principales) y 416 de 2002 (puede aplicarse en la sanción conjunta).
- **Trabajo correccional con internamiento y sin este:** Instrucción No. 128 de 1988, Dictámenes No. 296 de 1988, No. 303 de 1989, No. 305 de 1989, No. 308 de 1990, No. 381 de 1997, y No. 416 de 2002.
- **Limitación de libertad:** Dictámenes No. 296 de 1988 y No. 416 de 2002.
- **Multa:** Dictamen No. 21 de 1978.
- **Privación de derechos:** Dictamen No. 244 de 1986.
- **Comiso:** Instrucción No. 109 de 1983. Dictámenes No. 94 de 1980, No. 140 de 1982, No. 160 de 1983, No. 205 de 1984, No. 232 de 1985 y No. 364 de 1995.
- **Atenuación y agravación extraordinaria:** Dictámenes No. 398, No. 400 y No. 401, todos de 2001.
- **Reincidencia y multirreincidencia:** Instrucciones No. 125 de 1988 y No. 175 de 2004. Dictámenes No. 149 de 1982, No. 174 de 1983, No. 210 de 1985, No. 211 de 1985, No. 250 de 1986, No. 299 de 1989, No. 301 de 1989, No. 398 de 2001, No. 410 de 2001 y No. 417 de 2002.
- **Sanción conjunta:** Instrucción No. 130 de 1988, Dictámenes No. 103 de 1980, No. 149 de 1982, No. 202 de 1984, No. 250 de 1986, No. 270 de 1987, No. 273 de 1987, No. 317 de 1991 y No. 416 de 2002.

Sección Segunda (artículo 48)

— La adecuación de la sanción en los delitos por imprudencia

- **Dictamen No. 255.** Acuerdo No. 160 de 3 de diciembre de 1986. **Marco penal en caso de delitos cometidos por imprudencia (artículo 48).**

Los delitos cometidos por imprudencia, salvo que otra cosa se disponga en la Parte Especial del Código o en otra ley, son sancionables con privación de libertad o multa, aun en aquellos casos en que la forma intencional se encuentra sancionada únicamente con privación de libertad (artículo 48). A los delitos contra la seguridad del tránsito no le es aplicable esta regla, desde luego, pues las sanciones que les corresponden son las señaladas taxativamente en la Parte Especial del Código Penal.

* En el Dictamen se pone un ejemplo de lo antes expuesto con el delito de daños de considerable valor, preceptuado en el artículo 402. 2 del CP de 1979, y que llevo al delito de lesiones de carácter grave de la ley actual (artículo 272.1) para una mejor comprensión. El citado delito de lesiones, cuya formulación en la ley aparece de manera intencional, tal y como es la regla en nuestro Código, se reprime sólo con sanción de privación de libertad que discurre de 2 a 5 años. Ahora bien, para la represión del mismo —al ser cometido por imprudencia, de acuerdo con las reglas del artículo 48—, el nuevo marco penal discurre de 5 días a 2 años y 6 meses de privación de libertad (mitad del límite superior de la escala sancionadora del delito intencional) y multa de 5 a 1500 cuotas. En la ejemplificación he seguido la orientación del Dictamen, pero tengo mis dudas en cuanto a si, al expresar la ley en el artículo 48:

“La sanción no podrá exceder de la mitad de la establecida para cada delito en particular”, se refiere a la mitad del límite máximo, como se ha entendido mayoritariamente, lo que, en ocasiones, trae en consecuencia, que el delito en su modo imprudente se pueda reprimir con igual sanción al delito cometido en su forma intencional; lo que me resulta difícil de comprender, o lo correcto es tomar la mitad del límite mínimo. En el ejemplo que he expuesto del delito de lesiones, hay una porción coincidente, que discurre de 2 años a 2 años y 6 meses. Otro criterio que evita lo anterior, sería entender que la citada frase de la ley, se refiere a la mitad del límite mínimo de la sanción del delito en su forma intencional, el que constituiría el límite máximo de la escala para la represión del delito cometido por imprudencia, lo que impediría la situación planteada.

Sección Tercera (artículo 49)

— La adecuación de la sanción en los actos preparatorios y la tentativa

Sección Cuarta (artículo 50)

— La adecuación de la sanción en cuanto a los autores y cómplices

Sección Quinta (artículo 51)

— La incommunicabilidad de las circunstancias

- **Dictamen No. 415.** Acuerdo No. 3 de 15 de enero de 2002. **Corrupción de menores. Venta y tráfico de menores. Robo con fuerza en las cosas. Pluralidad de participantes.**

Los tipos cualificados de corrupción de menores —previsto en el artículo 310 apartado 2, inciso ch) — “si el hecho se realiza por quien tenga la potestad, guarda o cuidado del menor”; venta y tráfico de menores —previsto en el artículo 316 apartado 2, inciso b)— “si es cometido por la persona o responsable de la institución que tiene al menor bajo su guarda y cuidado”; y robo con fuerza en las cosas —previsto en el artículo 328 apartado 3, inciso b)— “si el hecho se ejecuta por una persona que con anterioridad ha sido sancionada por el delito de robo con fuerza en las cosas o de robo con violencia o intimidación en las personas”; sólo abarcan a los sujetos en quienes concurren los descritos elementos de agravación, en cuanto a los demás no comprendidos en dichos supuestos, responden por las modalidades penales que correspondan; lo que se fundamenta en el artículo 51.

Sección Sexta (artículos 52 y 53)

— Las circunstancias atenuantes o agravantes

Sección Séptima (artículo 54)

— La atenuación y agravación extraordinaria de la sanción

- **Dictamen No. 398.** Acuerdo No. 38 de 28 de marzo de 2001. **Determinación. Delitos de evasión de presos o detenidos; ayuda a la evasión de presos o detenidos y desórdenes en los establecimientos penitenciarios o centros de reeducación. Aspectos procesales.**

La agravación extraordinaria de la sanción constituye una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal.

En los delitos de evasión de presos o detenidos (artículo 163), ayuda a la evasión de presos o detenidos (artículo 164), y desórdenes en establecimientos penitenciarios o centros de reeducación (artículos 165 y 166), no es posible apreciar la regla de agravación extraordinaria de la sanción del apartado 4 del artículo 54, porque dichos delitos sólo se cometen, hallándose su autor extinguiendo una sanción o medida de seguridad, o estando sujeto a una medida cautelar de prisión provisional, lo que constituye un presupuesto en los referidos tipos penales (ver artículo 47.2).

* Resulta de interés la clasificación que otorga el Dictamen a las reglas de agravación extraordinaria de la sanción —previstas en los Apartados 2 y 4 del artículo 54— considerando a estas como circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, lo que sin duda, tiene trascendencia en el orden procesal, pues si las alega la acusación, el Tribunal está obligado a resolverlas en la sentencia, y de no hacerlo, incurriría en el vicio de incongruencia por defecto.

- **Dictamen No. 400.** Acuerdo No. 40 de 28 de marzo de 2001. **Determinación (“hasta”).** Cuando la ley establece en el apartado 4 del artículo 54, que el Tribunal “aumentará hasta el doble los límites mínimos y máximos de la sanción prevista para el delito cometido”, esto significa que en la formación del nuevo marco penal se podrá llegar hasta el doble de los referidos límites, sin que sea necesario extender los aumentos siempre al doble, pues de entenderlo así, la ley hubiese empleado la frase “aumentando en la mitad” (véase artículo 55.3b).

* La anterior interpretación, no permite conocer el nuevo marco penal —formado al emplearse la invocada regla para determinar la sanción— lo que, de hecho, impide su control. Recuérdese, que la pena es relativa, quiere esto decir que está en relación con un marco penal previamente fijado. Ejemplo, el delito de lesiones de carácter grave (artículo 272) se reprime con sanción de privación de libertad, que discurre de 2 a 5 años; al disminuirse ese marco por aplicación de la regla del apartado 1 del artículo 17 (infractor de 16 años), los límites de la sanción “pueden ser reducidos hasta la mitad”, de manera que se puede establecer un marco que discurre de 1 a 2 años y 6 meses. En este caso, una sanción de 2 años de privación de libertad, tiene una significación distinta en relación con cada marco penal. En el primero, coincide con el límite mínimo, y en el segundo está más próximo al límite máximo, siendo cada una consecuencia de un proceso de determinación donde se tienen en cuenta diversos factores. (¿Es legal una sanción de 3 años en el ejemplo anterior? ¿Cómo puede controlarse la medición de la pena —si adolece de un exceso de lenidad o severidad—, si se desconoce el marco penal que tuvo en cuenta el Tribunal para su determinación?).

- **Dictamen No. 401.** Acuerdo No. 41 de 28 de marzo de 2001. **Determinación. Se pueden apreciar conjuntamente otras reglas que aumentan el marco penal.**

El hecho que el Tribunal aprecie la regla de agravación extraordinaria de la sanción —prevista en el Apartado 4 del artículo 54— no impide que, también, se consideren otras, como las del Apartado 2 de ese propio artículo, y las de la reincidencia y multirreincidencia del artículo 55, lo que no conlleva, ineludiblemente, a la imposición de una pena injusta.

* Reproduzco el comentario hecho al Dictamen No. 400 en este mismo epígrafe (¿Cómo es posible el aumento sucesivo del normal marco penal, si se desconoce de qué manera quedó fijado, de acuerdo con la interpretación dada al término “hasta”? Ejemplo: Se aprecia la regla del Apartado 4 del artículo 54, luego, ¿sobre qué base o marco se aprecia la del Apartado 2 del propio artículo, o la reincidencia o multirreincidencia

del artículo 55?). Sin duda, se trata de un complicado tema, al que se une el del orden en que se aplican las invocadas reglas, ante la concurrencia de una pluralidad de ellas.

Sección Octava (artículo 55)

— La reincidencia y la multirreincidencia

- **Instrucción No. 125 de 12 de abril de 1988. Determinación. Efectos.**

Los Tribunales no apreciarán la reincidencia o multirreincidencia cuando las sanciones anteriores no constituyan antecedentes penales (ver artículo 66), o estos hayan sido cancelados por disposición legal (Decreto-ley No. 93 de 1ro de diciembre de 1997), a instancia del sancionado, o de oficio; o los provenientes de sanciones cumplidas hace más de diez años sin ser el reo reincidente, multirreincidente o tratarse de delitos contra la seguridad del Estado [ver artículo 67. 2 g) y 3], que debieron ser cancelados de oficio. De no declarar la sentencia la condición de reincidente o multirreincidente, ello no puede producir efecto alguno en perjuicio del sancionado. Ejemplos: al acordar la sanción de amonestación, la remisión condicional, libertad condicional, o para cancelación de los antecedentes penales, o disponer una medida de seguridad postdelictiva.

* La Instrucción deja claramente establecido, que sólo el Tribunal sancionador en la sentencia, puede declarar la condición de reincidente o multirreincidente y, de no hacerlo, ello no podrá traer consecuencia alguna en disfavor del sancionado, aun cuando consten en las actuaciones, u otros registros, o se conozca con posterioridad de la existencia de condenas anteriores.

- **Instrucción No. 175 de 21 de julio de 2004 (Apartado Quinto). No se apreciarán los antecedentes cancelados o que debieron serlo.**

Para declarar la condición de reincidente o multirreincidente, los Tribunales se cerciorarán que los antecedentes penales no hayan sido cancelados, o haya transcurrido el tiempo para su cancelación de oficio, o provengan de sanciones subsidiarias extinguidas (ver Instrucción No. 127 de 1988 en *Trabajo correccional con internamiento*).

* Con justeza, la Instrucción, en su Apartado Quinto, pretende evitar que se aprecien antecedentes penales que debieron ser cancelados, y que, por razones ajenas al condenado, no lo fueron.

- **Dictamen No. 149. Acuerdo No. 133 de 28 de septiembre de 1982. Definición.**

La reincidencia y multirreincidencia son elementos agravatorios del marco penal, sólo aplicables en los delitos intencionales. Se considera reincidente el que, al cometer un delito, ya había sido sancionado con anterioridad por otro delito intencional.

* Es el primer Dictamen que se refiere a esta interesante institución. Nótese que se considera elemento agravatorio del marco penal; y se deja establecido que, para su apreciación, el sujeto en el momento de delinquir ya había sido sancionado con anterioridad por otro delito intencional (mediante sentencia firme). Si en el momento de incurrir en el delito que se conoce, el anterior no había sido juzgado, o la sentencia no era firme, no es posible apreciar la reincidencia, pues no había sido sancionado (a través de sentencia firme, reitero). Igual acontece si fue sancionado por un delito cometido con posterioridad al que ahora se juzga, o si, en una causa, se juzgan varios delitos a la vez contra un mismo acusado.

- **Dictamen No. 174.** Acuerdo No. 177 de 22 de noviembre de 1983. **Sólo puede acordarla el Tribunal en su sentencia.**

El órgano que ejecuta las sanciones de privación de libertad (establecimientos penitenciarios) no está facultado para apreciar la reincidencia o multirreincidencia, por ser ésta una atribución exclusiva del Tribunal sentenciador.

La reincidencia y multirreincidencia la determinan el Tribunal en el momento de acordar la sentencia, teniendo en cuenta las sanciones respecto a las cuales no han transcurrido los términos fijados en el artículo 67 —a propósito de la cancelación de los antecedentes penales—, sin que proceda variar este pronunciamiento por la circunstancia de que los referidos términos se cumplan en el transcurso de la ejecución de las correspondientes sanciones.

* El Dictamen tiene tres pronunciamientos muy interesantes. Primero, sólo el Tribunal sancionador puede declarar la condición de reincidente o multirreincidente de un sujeto, y esto es, en el momento de acordar la sentencia, no en otro posterior. Segundo, sólo es posible apreciar la reincidencia o multirreincidencia de aquellas sanciones respecto a las cuales no han transcurrido los términos fijados en el artículo 67 para la cancelación de los antecedentes penales. Pese a que el Dictamen aparece bajo el imperio del CP de 1979 —que regulaba este asunto de manera distinta a la ley actual—, el pronunciamiento no deja de tener trascendencia, pues del mismo se deduce, que no se deben apreciar en la referida declaración las sanciones que, dado el transcurso del tiempo, sus antecedentes debieron ser cancelados —entiendo yo de oficio—. Similar criterio pudiera regir, hoy día, respecto a las penas subsidiarias de la de privación de libertad, que fueron extinguidas, y cuyo antecedente no se ha cancelado cuando por mandato de la ley debió hacerse (artículos 32.7, 33.9, y 34.7). Tercero, lo acordado en la sentencia sobre reincidencia y multirreincidencia, no puede variar con posterioridad, debido a la circunstancia de que los referidos términos para la cancelación se cumplan en el curso de la ejecución de las correspondientes sanciones.

- **Dictamen No. 194.** Acuerdo No. 100 de 17 de julio de 1984. **Demostración.** Sólo mediante la certificación expedida por el Registro Central de Sancionados, o la copia certificada de la sentencia del Tribunal sancionador, puede acreditarse que un sujeto ha sido condenado anteriormente, a menos que demostrada la destrucción del archivo del Tribunal o de la causa, sea necesario acudir a los medios subsidiarios de pruebas: copia simple de la sentencia presente en el expediente carcelario, o en otra oficina pública.
- **Dictamen No. 210.** Acuerdo No. 8 de 8 de enero de 1985. **Demostración. Registros policiales.**

Reitera el criterio del Dictamen No. 194 de 1984 (tratado en esta misma Sección), pero en esta ocasión se apoya en el Acuerdo No. 147 de 1984 (también abordado aquí), que reafirma lo expuesto.

* Lo interesante del Dictamen parte de la consulta, donde se pregunta si es posible afirmar el dato de la condena anterior, apoyado en los informes que ofrece el Registro Operativo de la Policía, cuando aparece incluso el número de la causa y las sanciones. El CGTSP se limita a reiterar el criterio expuesto en el señalado Dictamen No. 194 y el citado Acuerdo No. 147. Los informes que ofrecen los registros de la Policía, pueden resultar muy útiles para la búsqueda de los antecedentes penales del acusado por los órganos de investigación del delito, pero sobre su base no es posible declarar la condición de reincidente o multirreincidente del acusado —como acertadamente se expresa en el Dictamen—; además, sostengo el criterio que tampoco se deben llevar dichos informes al hecho probado de la sentencia, pues nada acreditan sobre el tratado

aspecto, ni han de tener influencia en la medición de la sanción. Con posterioridad, el Acuerdo No. 165 de 31 de diciembre de 1986, ratifica la posición adoptada en las invocadas decisiones.

- **Dictamen No. 211.** Acuerdo No. 9 de 8 de enero de 1985. **Definición. Aspectos procesales.**

La reincidencia y multirreincidencia constituyen elementos de hecho, que determinan la ampliación de los límites mínimo y máximo de la sanción correspondiente al delito de que se trata, convirtiéndolos en figuras agravadas.

En el orden procesal, el Dictamen establece que cuando el Fiscal presente la causa al Tribunal, y este advierta que consta de las actuaciones que el acusado, o los acusados, tienen antecedentes penales, sin que se hubiese consignado ese particular en las conclusiones acusatorias, debe devolver la causa al Fiscal, al amparo del artículo 263 de la LPP. Si el Tribunal se da cuenta de la citada omisión del Fiscal en el curso del juicio oral, puede hacer uso de la fórmula del artículo 350 de la LPP; ello le permitirá ampliar los límites de la sanción en los términos que establece la Ley. De no hacer uso de la fórmula, “podrá tomar en consideración ese hecho para la adecuación de la sanción”, pero no modificar el marco penal.

El fundamento jurídico de esta institución se coloca en el considerando de la sentencia, que trata lo concerniente a la medición de la sanción; excepto el caso en que se haya aplicado la fórmula del artículo 350, que se argumentará en el primer considerando.

* Recuerdo haber intervenido en la elaboración de la consulta. El Dictamen trata varios aspectos. Primero, define la reincidencia y multirreincidencia (no constituyen circunstancias modificativas de la responsabilidad penal). Segundo, establece cómo proceder en el caso de que, aun constando el dato de la sanción anterior en las actuaciones, el Fiscal no lo hubiere colocado en la acusación, y el Tribunal lo advierta al ingreso del expediente, entonces devolverá el asunto apoyado en el artículo 263 de la LPP (sin hacer alusión al apartado en el Dictamen). Interpreto que de lo que se trata, es que el Fiscal no consignó el dato del antecedente penal en el hecho imputado —cosa distinta a que lo haya colocado— pero sin solicitar la apreciación de la institución. Luego se plantea que, por la vía de la fórmula, es posible subsanar la omisión señalada; es decir, incorporar el dato y, de este modo, apreciar la institución. Por último, si el Tribunal no lo devolvió, ni hizo uso de la fórmula, se establece que puede tenerlo en cuenta para adecuar la sanción dentro del marco penal, debiendo entonces consignar el antecedente penal en el hecho de la sentencia, aun cuando no fue imputado; lo que me resulta dudoso.

- **Dictamen No. 217.** Acuerdo No. 41 de 19 de marzo de 1985. **Determinación en caso de delitos militares. Definición.**

Las sanciones por delitos militares, sólo pueden servir de base para apreciar la reincidencia o multirreincidencia, cuando constituyan antecedentes penales.

La reincidencia y multirreincidencia no son circunstancias agravantes, sino elementos de hecho que, preceptivamente, determinan la ampliación de los límites —máximo y mínimo— de la sanción, correspondiente al delito de que se trate, convirtiendo dichos casos en figuras agravadas del delito calificado.

* Este Dictamen reitera la definición dada en el Dictamen No. 211 de 1985 (ver bajo ese mismo rubro).

- **Dictamen No. 250.** Acuerdo No. 119 de 9 de septiembre de 1986. **Formación de la sanción conjunta en caso de reincidencia y multirreincidencia.**

Ver en *Sanción conjunta*.

- **Dictamen No. 299.** Acuerdo No. 8 de 10 de enero de 1989. **Delito de hurto cometido por carterista (artículo 324). Reincidencia.**

Para declarar la reincidencia a que se refiere el apartado 2 del artículo 324, el acusado tiene que haber sido objeto de una condena anterior a tenor del mismo delito, es decir, el preceptuado en el artículo invocado, y no en otra modalidad de hurto. También dentro de ese concepto de reincidencia, se incluye la multirreincidencia por esta propia modalidad delictiva.

Si al acusado le constaren como antecedentes penales, delitos que constituyen la reincidencia o multirreincidencia específica —y también la reincidencia o multirreincidencia genérica—, los Tribunales, además de calificar el hecho por el artículo 324 apartado 2, apreciarán sólo la reincidencia o multirreincidencia genérica.

* Sin duda, se trata de un polémico tema, pero muy interesante. El legislador incorporó la categoría de “reincidente” como elemento de agravación del tipo. El Dictamen aclara en qué consiste este concepto, expresando que sólo incluye al sancionado en virtud de uno o más delitos comprendidos en esta propia modalidad de hurto, es decir, del artículo 324. Además, se expone que, si junto a la reincidencia señalada, aparece la reincidencia o multirreincidencia específica a tenor de hurtos de otras modalidades, por ejemplo, o la genérica, sólo se apreciará esta última. Este criterio me resulta difícil de comprender, pues si no hubiera la referida modalidad —agravada a resultados de la reincidencia específica—, y el acusado hubiera sido objeto de condenas anteriores por delitos de la misma especie y de especies distintas, el Tribunal se limitaría a declarar la reincidencia o multirreincidencia específica, sin tener en cuenta los delitos de otra especie. De otro lado, la mencionada interpretación hace que una misma institución sea empleada doblemente en disfavor del acusado; primero como elemento del tipo, y luego, en cuanto elementos que determinan la ampliación de los límites del delito calificado (considero válido este comentario para las modalidades de robo con violencia o fuerza, en su tipo agravado en virtud de la reincidencia (ver más adelante el Dictamen No. 417 de 2002).

- **Dictamen No. 301.** Acuerdo No. 10 de 10 de enero de 1989. **Demostración. Aspectos procesales.**

Reitera el criterio seguido en los Dictámenes Nos. 194 de 1984 y 210 de 1985 sobre el modo en que se acredita la condición de reincidente o multirreincidente.

De no consignarse por el Fiscal en la relación fáctica, contenida en la primera de sus conclusiones provisionales, los elementos de hecho que avalen los antecedentes penales de la persona acusada, esa omisión impide —legalmente— la consideración por el Tribunal de la condición de reincidente o multirreincidente.

* Redacté personalmente esta consulta. El Dictamen hace alusión a disposiciones anteriores sobre el propio tema, estimando que tratan puntos de la consulta; afirmando —por último— que si el dato de la condena anterior no aparece en la imputación del Fiscal, no es posible apreciar la comentada institución.

- **Dictamen No. 398.** Acuerdo No. 38 de 28 de marzo de 2001. **Agravación extraordinaria y delitos de evasión de presos o detenidos, ayuda a la evasión de presos o detenidos y desórdenes en los establecimientos penitenciarios o centros de reeducación**

Ver en *La atenuación y agravación extraordinaria de la sanción*; los criterios pueden resultar de utilidad.

- **Dictamen No. 410.** Acuerdo No. 169 de 6 de septiembre del 2001. **Determinación. Aspectos procesales.**

Sólo el Tribunal sancionador —en el momento de dictar sentencia— puede declarar la condición de reincidente o multirreincidente de un sujeto. De modo que, si en esta resolución no se hace tal afirmación —aun por error del juzgador al no apreciarla, pues objetivamente debía haberse estimado—, el órgano encargado de la ejecución de la sanción (establecimiento penitenciario) no puede bajo ningún concepto considerar reincidente o multirreincidente al sancionado, aunque le consten los datos necesarios para ello. La condición de reincidente o multirreincidente de un acusado es una cuestión que se debe acreditar en el resultando probado de la sentencia, con expresión de los datos siguientes: Tribunal, Sala o Sección, causa, delito y sanción (ver Acuerdo No. 147 de 1984).

* Este Dictamen reitera una posición casi invariable del CGTSP sobre el tema, constituyendo una excepción los Dictámenes No. 194 de 1984 y No. 247 de 1986 (sin vigencia de acuerdo con disposiciones posteriores de ese órgano).

- **Dictamen No. 417.** Acuerdo No. 129 de 6 de septiembre del 2002. **Determinación. Modalidades agravadas de robo con violencia o fuerza por reincidencia. Acuerdo No. 239 de 1999.**

En los delitos de robo con violencia y robo con fuerza —en sus formas agravadas (artículos 327.1.4ch y 328.1.3b)—, por haber sido sancionado el autor con anterioridad, en virtud de cualquiera de los invocados tipos penales, modalidad básica, agravada o privilegiada, en su caso, no es posible emplear nuevamente el dato de la sanción precedente —ya utilizado para agravar el tipo— con el propósito de apreciar la reincidencia específica (artículo 55.1.3.a), pues lo prohíbe la regla del apartado 2 del artículo 47, ni siquiera en aquellos casos en que se eligió el marco sancionador de la figura básica, por haberse aplicado el Acuerdo No. 239 de 8 de octubre de 1999 del CGTSP.

* ¿Cómo proceder en los casos siguientes?

El autor había sido sancionado por varios delitos de robo con fuerza o violencia (véase en esta Sección el Dictamen No. 299 de 1989); o a tenor de delitos de la misma especie —distintos a los señalados robos—; o a consecuencia de un delito de similar carácter y otro de índole diferente; o por varios delitos de naturaleza distinta.

- **Acuerdo No. 147 de 11 de octubre de 1984. Demostración.**

Los Tribunales al redactar la sentencia, en caso de apreciar los antecedentes penales que pueden servir de base para la declaración de la reincidencia o multirreincidencia, los consignarán en el resultando probado, con expresión del Tribunal, Sala o Sección, número de causa, delito y sanción.

- **Acuerdo No. 165 de 31 de diciembre de 1986. Demostración.**

*Reitera el Acuerdo No. 147 de 1984 y el Dictamen No. 210 de 1985.

Sección Novena (artículo 56)

— La sanción conjunta

- **Instrucción No. 130 de 12 de abril de 1988. Tribunal competente. Aspectos procesales.**

Corresponde la formación de la sanción conjunta, entre Tribunales de igual grado, a aquel que conoció de la última causa, lo que se determina atendiendo a la fecha de firmeza de la sentencia, con independencia de la data de radicación de la causa. En caso de Tribunales de distintos grados —excepto el TSP—, corresponderá la formación de dicha

sanción al superior, sin tener en cuenta la señalada fecha. Por último, cuando el TSP en virtud de un recurso de casación o procedimiento de revisión, modifique una sentencia de la instancia, es a este último Tribunal al que compete formar la sanción conjunta. El Tribunal competente para la formación de dicha sanción, puede basarse en cualquiera de los siguientes documentos: copia de la sentencia, del auto, de la liquidación de sanción, informe del establecimiento penitenciario, o solicitud del Fiscal, debidamente fundada. La sanción conjunta —en los casos de sentencias firmes— se acuerda por auto, copia del cual se envía a todos los Tribunales sancionadores, y se notifica al sancionado.

* La ley establece las reglas para la determinación de qué Tribunal, dentro de una misma jurisdicción, es el competente para la construcción de la sanción conjunta (no así cuando se trata de jurisdicciones distintas, civil y militar); y también para la formación del nuevo marco penal donde se escogerá la sanción única, pero guarda silencio total, en qué normas se deben utilizar para fijar dicha sanción dentro del nuevo marco penal ¿caso pueden emplearse las propias reglas que ya se usaron para la determinación de las penas individuales? Ejemplos, el grado de peligro social de los hechos, o la juventud del sancionado. Se trata de un asunto que requiere solución legislativa.

• **Dictamen No. 103.** Acuerdo No. 324 de 5 de agosto de 1980. **Formación.**

Los Tribunales Municipales, al formar la sanción conjunta prevista en el artículo 56, pueden exceder los límites máximos establecidos por la competencia objetiva en el artículo 8 de la LPP.

* En la fecha de este Dictamen, la competencia objetiva determinada por la Ley procesal en su artículo 8, autorizaba a los Tribunales Municipales a conocer de los delitos sancionables con privación de libertad que no excedan de 9 meses o multa que no exceda de 270 cuotas o ambas. Estos límites fueron modificados con posterioridad. En aquel momento —al parecer— se entendía que el TMP —al acordar las penas particulares que luego formarían la conjunta—, no estaba facultado para excederse de los límites señalados en la competencia objetiva. Este criterio no rige en la actualidad. Ejemplo, puede un TMP por el denominado procedimiento sumario —hasta 1 año de privación de libertad o multa hasta trescientas cuotas o ambas—, conocer de un delito de carácter continuado de hurto (artículo 323) y reprimirlo con sanción de 1 año y 6 meses de privación de libertad (ver Dictámenes No. 386 de 1999 y No. 399 del 2001; así como el artículo 39, inciso a, del Reglamento de la Ley No. 82 “De los Tribunales Populares”).

• **Dictamen No. 149.** Acuerdo No. 133 de 28 de septiembre de 1982. **Formación. Reincidencia y multirreincidencia.**

En el caso de que fuera juzgada una persona acusada de la comisión de varios delitos a la que, por lo tanto, correspondiera aplicarle una sanción conjunta, solamente se le considerará reincidente o multirreincidente si con anterioridad a los hechos por los que se le juzga hubiera sido sancionada como autor o cómplice de un delito intencional. Es decir, que se considera reincidente el que al cometer un delito ya había sido sancionado con anterioridad por otro delito intencional.

• **Dictamen No. 202.** Acuerdo No. 151 de 11 de octubre de 1984. **Formación. Aspectos procesales. Acumulación de causas.**

Cuando el Fiscal presente la acusación contra una persona que está cumpliendo una sanción de privación de libertad, en el escrito de calificación debe consignar los siguientes datos: a) sanción que se encuentre cumpliendo el acusado (Tribunal, Sala o Sección, causa,

delito y sanción); b) fecha en que comenzó a extinguirla; y c) fecha en que la dejará extinguida. Los referidos datos serán utilizados para la formación de la sanción conjunta. Cuando ante un mismo Tribunal, o en más de uno, se cursen procesos seguidos contra una misma persona —de ser posible, de oficio, o a instancia de parte—, el Tribunal que tuviere la información, dispondrá la acumulación de los más antiguos al más moderno, con el propósito de que se resuelvan en una misma sentencia definitiva todos los delitos cometidos. No procederá la acumulación del proceso en que se hubiere dictado sentencia definitiva, pero —en este supuesto— si se establece recurso de casación, la Sala del TSP podrá acordar la sanción conjunta.

Cuando una misma persona esté cumpliendo distintas sanciones de privación de libertad —a instancia de parte, y por la vía de los incidentes a que se refiere el artículo 493 (495) de la LPP—, se procederá a la aplicación de la sanción conjunta. Los Directores de los establecimientos penitenciarios deberán informar al Fiscal los reclusos que aparezcan sancionados por más de un delito, de manera que se promueva el incidente de aplicación de la sanción conjunta.

* El Dictamen se refiere a aspectos procesales para la aplicación de la sanción conjunta.

Primero, indica los datos que debe contener la acusación cuando es presentada contra un acusado que esté cumpliendo sanción de privación de libertad, los que —por supuesto— deben quedar acreditados en el expediente de fase preparatoria. Segundo, se ofrece una solución, de la cual carece la ley, para el caso en que, contra una persona, se cursen varios procesos ante el mismo Tribunal o Tribunales distintos, disponiendo las reglas para su acumulación (Solución esta que puede entrar en contradicción con los criterios de conexidad, establecidos en el artículo 13 de la LPP). Tercero, establece cómo proceder cuando una misma persona esté sentenciada a distintas sanciones de privación de libertad, y no se haya acordado la sanción conjunta.

• **Dictamen No. 250.** Acuerdo No. 119 de 9 de septiembre de 1986. **Formación. Reincidencia y multirreincidencia.**

Las reglas de agravación de los marcos penales, por razón de la reincidencia y multirreincidencia, se aplicarán para la determinación de las penas individuales, las cuales —una vez precisadas— se tomarán como base, en la formación de la sanción conjunta.

* El Dictamen establece que para la formación de la sanción conjunta —en el supuesto de un individuo responsable de dos o más delitos— primero, se deben determinar las sanciones para cada delito en particular, y es aquí en el caso que proceda, que se deben aplicar las reglas de la reincidencia y multirreincidencia. Una vez establecidas las sanciones —en virtud de cada uno de los delitos conocidos—, estas penas servirán de base para la formación de la sanción conjunta. El asunto se complica, cuando se debe determinar qué regla emplear, la de la reincidencia o multirreincidencia genérica o específica, en el supuesto de ser juzgados delitos de especie distinta. Ejemplo, se conocen en una misma causa los delitos de atentado y daños, y el acusado tiene un antecedente penal por resistencia. Al momento de determinar las penas individuales, para el delito de atentado se aprecia la reincidencia específica, sin duda, pero ¿qué regla se ajusta al delito de daños, la propia reincidencia específica, que no es el caso, o la genérica? En mi opinión —no exenta de objeciones— al delito de daños se aplica la reincidencia genérica.

• **Dictamen No. 270.** Acuerdo No. 66 de 21 de julio de 1987. **Formación. Subsidiaria revocada.**

Cuando un sancionado a limitación de libertad, incurre en un delito durante el cumplimiento de la sanción, para la formación de la sanción conjunta se constata lo que le restaba por cumplir, a partir de la fecha en que cometió el nuevo delito.

* Este mismo criterio puede ser aplicado para las demás penas subsidiarias de la de privación de libertad.

- **Dictamen No. 273.** Acuerdo No. 69 de 21 de julio de 1987. **Continuidad. Robo y hurto.** No es posible declarar la continuidad en caso de concurrir delitos de robo y hurto, pues precisamente a estos los diferencian su modo de comisión, por otro lado, a través de esta institución se agravaría la sanción; lo procedente es formar la sanción conjunta.
- **Dictamen No. 317.** Acuerdo No. 8 de 19 de febrero de 1991. **Formación. Subsidiaria revocada.**

*Ver en *Trabajo correccional con internamiento*.

- **Dictamen No. 416.** Acuerdo No. 70 de 14 de mayo de 2002. **Formación. Subsidiaria revocada.**

Cuando una persona es sancionada a cualquiera de las penas subsidiarias de trabajo correccional con o sin internamiento, limitación de libertad, o la sanción de privación de libertad se remite condicionalmente, y sin comenzar a extinguir cualquiera de ellas, o durante su cumplimiento, es sancionada a privación de libertad por un delito cometido con anterioridad o posterioridad al de la sentencia ejecutoria, no procede sustituir la nueva pena por cualquiera de estas subsidiarias (de igual o distinta calidad), ni remitirla condicionalmente, y de haber obrado así el Tribunal, lo procedente es revocar ambas sanciones y formar la sanción conjunta.

El Tribunal encargado de formar la invocada sanción conjunta de privación de libertad —conforme al artículo 56— si estima que concurren los requisitos legales, y las circunstancias, que aconsejan racionalmente sustituir o remitir condicionalmente esta nueva pena, puede hacerlo en el ejercicio de su arbitrio judicial, según lo establecido en los artículos 32.1, 33.4, 34.4 y 57.

* El Dictamen resulta sumamente interesante para la interpretación de un complicado tema. Constituye un novedoso planteamiento que, una vez revocadas las sanciones subsidiarias, y formada la sanción conjunta de privación de libertad, esta pueda ser sustituida por una pena subsidiaria o remitida condicionalmente, cuando las penas bases para la constitución de la global no tienen esa consideración. Lamentablemente, en nuestro ordenamiento penal (artículo 56), si bien se establecen las reglas para la formación de la sanción conjunta —una vez determinado el nuevo marco penal— no se consignan qué factores se deben tener en cuenta para escoger una pena en su clase y extensión dentro de dicho marco; corriéndose el riesgo de incurrir en una doble valoración (en perjuicio o a favor del reo), al observar por segunda ocasión, elementos que ya se tuvieron en cuenta en la fijación de las penas individuales o bases de la conjunta. Ejemplo, en la determinación de las penas individuales, se aprecian las categorías de reincidencia y multirreincidencia, imponiendo las sanciones cercanas o coincidentes con sus límites máximos; y en el momento de formar la conjunta, esta se fija en el límite superior de la nueva escala, lo que se hace bajo los propios fundamentos antes considerados.

CAPÍTULO VI

La remisión condicional de la sanción de privación de libertad (artículo 57)

- **Instrucción No. 72 de 13 de julio de 1978. Determinación.**

La remisión condicional se acuerda en el momento de dictarse la sentencia, exponiendo los fundamentos jurídicos de tal decisión en el Considerando de medición de la sanción, y haciendo expreso pronunciamiento en el fallo.

* Los datos o presupuestos de hecho que tiene en cuenta el Tribunal para adoptar este beneficio, entre los que se encuentran las características individuales, vida anterior, relaciones y medio en que se desenvuelve y vive, han de aparecer claramente establecidos en el hecho probado. En el considerando de medición de la sanción, se razonará la acogida de esta institución; y en la parte dispositiva, se hará pronunciamiento expreso sobre la misma.

• **Instrucción No. 156 de 30 de abril de 1997. Ejecución. Control por la PNR.**

Los Tribunales comunicarán a la PNR lo pertinente de la sanción, dentro del plazo de diez días, a partir de la firmeza de la sentencia o del recibo de las actuaciones procedentes del Tribunal del recurso. Asimismo, la PNR informará al Tribunal sobre cualquier incidente, y este resolverá dentro de los cinco días siguientes a dicha comunicación.

La aludida comunicación se libra en los casos de sanción de trabajo correccional sin internamiento, limitación de libertad, prohibición de frecuentar medios o lugares determinados, destierro, remisión condicional, libertad condicional, suspensión del trabajo correccional con internamiento y licencia extrapenal.

• **Instrucción No. 163 bis de 24 de abril de 2002. Ejecución. Juez de ejecución (sustituye la No. 163 de 14 de diciembre de 2000).**

Establece el procedimiento para que los sancionados a penas remitidas condicionalmente, trabajo correccional sin internamiento, limitación de libertad, o beneficiados por libertad condicional, licencia extrapenal, suspensión del trabajo correccional con internamiento o sustitución de la sanción de privación de libertad, sean controlados por el Juez encargado del control de la ejecución del municipio de residencia, a quien el Tribunal sancionador remitirá copia de la sentencia y liquidación de sanción.

• **Dictamen No. 154. Acuerdo No. 161 de 7 de diciembre de 1982. Determinación. No comprende las sanciones accesorias.**

La institución de la remisión condicional de la sanción sólo se refiere a la sanción de privación de libertad con los requisitos establecidos en la Ley, y no alcanza a las sanciones accesorias.

* Del Dictamen se deduce que tampoco abarca a la sanción accesoria de privación de derechos.

• **Dictamen No. 416. Acuerdo No. 70 de 14 de mayo de 2002. Determinación. Ejecución.**

*Ver en *Trabajo correccional con internamiento*.

• **Acuerdo No. 208 de 7 de septiembre de 1981. Control en casación.**

Sólo resulta permisible casar una sentencia en relación con la remisión condicional de la medida sancionadora impuesta, en el supuesto que aquella se hubiera acordado con violación de los requisitos a que debe ajustarse el Tribunal de instancia, al hacer uso de dicha facultad.

* Nótese, como el Acuerdo limita, en alguna medida, el examen en casación de la remisión condicional, pues si el Tribunal la adoptó, apoyado en sus presupuestos legales (artículo 57. 1 y 2), el acto discrecional de acordarla no es revisable en casación. ¿Debe seguirse este criterio en el caso de sanciones sustitutivas de la de privación de libertad?

• **Acuerdo No. 61 de 30 de junio de 1987. Ejecución. Control.**

Deben unirse a la causa, los acusos de recibo de las comunicaciones libradas a la PNR, firmados como constancia de su recepción.

Título VII. La libertad condicional (artículo 58)

- **Instrucción No. 125 de 12 de abril de 1988 (Apartado Tercero). Otorgamiento. Reincidencia.**

Si el Tribunal en su sentencia no declaró la condición de reincidente o multirreincidente del sancionado, el establecimiento penitenciario no puede considerarlo comprendido dentro de estas categorías, a los efectos del término para la concesión de la libertad condicional, aun cuando le consten datos al respecto.

- **Instrucción No. 137 de 1ro de noviembre de 1990 (Apartado Decimocuarto). Otorgamiento.**

Exige una valoración cuidadosa para su concesión, en el caso de los comisores de los delitos a que hace alusión dicha Instrucción. Recomienda solicitar las informaciones complementarias que sean necesarias, de modo que se asegure el mantenimiento en prisión de los sancionados más peligrosos y connotados.

- **Instrucción No. 156 de 30 de abril de 1997. Ejecución. Control por la PNR.** Ver en *Remisión condicional*.

- **Instrucción No. 162 de 12 de octubre de 2000. Promoción por el Ministro de Justicia.**

Promovida por el Ministro de Justicia, la solicitud de libertad condicional ante la Sala correspondiente del TSP, acompañando evaluación de conducta y causa, el asunto se radica y turna. El ponente, dentro de las veinticuatro horas siguientes, informará a la Sala, proponiendo su rechazo de plano o admisión. En este último supuesto, se dará traslado al Fiscal por el plazo de tres días para escuchar su parecer, luego se resolverá. De acceder la Sala, libra el mandamiento de libertad y las comunicaciones pertinentes.

- **Instrucción No. 163 bis de 24 de abril de 2004. Ejecución. Juez de control.** Ver en *Remisión condicional*.

- **Instrucción No. 170 de 11 de diciembre de 2002 (Apartado Séptimo). Drogas.** En el caso de los delitos relacionados con drogas, se debe proceder con extremo cuidado en la concesión del beneficio, solicitando —en su caso— las informaciones complementarias pertinentes, para no errar en la decisión.

- **Instrucción No. 175 de 21 de julio de 2004 (Apartados Sexto y Octavo). Otorgamiento.**

El Tribunal, en el examen para resolver sobre la instancia de libertad condicional, debe evitar sobredimensionar el reanálisis del delito, y la repercusión que en su momento tuvo; elementos que, seguramente, se consideraron al acordar la sanción, siendo esencial, verificar los requisitos que establece la ley para su concesión. Esta labor será encargada a Salas o Jueces determinados, para su atención periódica y sistemática.

* Resulta muy esclarecedor el invocado apartado; otrora fue objeto de la consulta sobre la que recayó el Dictamen No. 316 de 1991 (tratado en este Título).

- **Dictamen No. 106.** Acuerdo 327 de 5 de agosto de 1980. **Otorgamiento. Requisitos.** La libertad condicional, de acuerdo con su regulación legal, puede concederse a todos los condenados a privación temporal de libertad, cualquiera que sea la duración de esta sanción. Este Dictamen fue ampliado por el Acuerdo No. 166 de 1986 (aparece bajo el mismo título).

* Aquí el CGTSP resuelve la consulta con estricto apego a la ley, pero hace una importante aclaración, en cuanto a las sanciones de privación de libertad de corta duración (hasta un año), y esta consiste en plantear que dichas sanciones, por su fugacidad,

no permiten con suficiente fundamento evaluar el comportamiento del sancionado, lo que constituye un esencial requisito para su concesión. Si el otorgamiento de dicho beneficio se funda en una prognosis, que se apoya en la evaluación del comportamiento del sancionado en el centro penitenciario, sin duda, en esta clase de sanciones —dada su corta duración— se hace difícil la señalada valoración.

- **Dictamen No. 225.** Acuerdo No.71 de 14 de mayo de 1985. **Tramitación. Tribunal competente en caso de sentencia extranjera.**

Sólo los funcionarios de la Fiscalía General de la República —en la instancia provincial con la categoría de Fiscal—, están autorizados para suscribir el escrito contentivo del parecer del Fiscal jefe provincial sobre el otorgamiento de la libertad condicional.

Es competente el Tribunal Provincial Popular, que dio cumplimiento a la sentencia dictada por Tribunal extranjero, para otorgar la libertad condicional.

- **Dictamen No. 243.** Acuerdo No. 31 de 11 de marzo de 1986. **Términos. Bonos de rebaja.** Los bonos de rebaja, concedidos a los sancionados a privación de libertad por las autoridades penitenciarias, se adicionarán al tiempo de la sanción de privación de libertad realmente cumplido, a los efectos del otorgamiento de la libertad condicional.

- **Dictamen No. 293.** Acuerdo No. 90 de 29 de agosto de 1988. **Otorgamiento. Menores de 20 años de edad. Reincidencia o multirreincidencia. Requisitos.**

En caso de sancionados reincidentes o multirreincidentes, que no hayan arribado a los 20 años de edad al momento de comenzar a extinguir la sanción de privación de libertad, para disponerse su libertad condicional, deben haber cumplido las dos terceras partes de la sanción impuesta, además de cumplimentar los restantes requisitos.

- **Dictamen No. 316.** Acuerdo No. 6 de 19 de febrero de 1991. **Informe de conducta. Contenido y parecer del Fiscal.**

No le compete al Tribunal, valorar conceptualmente los argumentos que exponen el Fiscal, ni el órgano de prisiones, cuando expresan su parecer sobre la concesión de la libertad condicional.

* Interviene en la redacción de la consulta ya que, en ocasiones, el Fiscal se oponía a la concesión de la libertad condicional, bajo el fundamento de apreciar nuevamente la “índole del delito”, lo que, seguramente, en su oportunidad constituyó uno de los presupuestos para la medida de la sanción (la Instrucción No. 175 de 2004, en su apartado sexto, se refiere a este aspecto).

- **Dictamen No. 409.** Acuerdo No. 168 de 6 de septiembre de 2001. **Términos. Bonos de rebajas.**

A los efectos del término del cumplimiento de la sanción, para acceder al beneficio de la libertad condicional u otros, así como determinar la extinción de la misma, se tendrá en cuenta para el tiempo cumplido, aquel que se otorga mediante bonos de rebaja, confeccionándose la rectificación de la correspondiente liquidación.

* Reitera el Dictamen No. 243 de 1986 (ver bajo este mismo Título).

- **Dictamen No. 410.** Acuerdo No. 169 de 6 de septiembre de 2001. **Otorgamiento. Reincidencia.**

Sólo el Tribunal sancionador, en el momento de dictar sentencia, puede declarar la condición de reincidente o multirreincidente de un sujeto.

De modo que, si en esta resolución no se hace tal afirmación —aún por error del juzgador al no apreciarla, pues objetivamente debía haberse estimado—, el órgano encargado de la ejecución de la sanción (establecimiento penitenciario), no puede —bajo ningún concepto— considerar reincidente o multirreincidente al sancionado, aunque le consten los datos necesarios para ello.

La condición de reincidente o multirreincidente de un acusado es una cuestión que se debe acreditar en el resultando probado de la sentencia, con expresión de los datos siguientes: Tribunal, Sala o Sección, causa, delito y sanción (así se dispone en el Acuerdo No. 147 de 11 de octubre de 1984).

* Este Dictamen reitera una posición casi invariable del CGTSP sobre el tema, constituyendo una excepción los Dictámenes No. 194 de 1984 y No. 247 de 1986 (sin vigencia, según disposiciones posteriores de ese órgano).

- **Acuerdo No. 204 de 24 de mayo de 1980. Promoción.**

En el caso en que un sancionado, o algún familiar allegado al mismo, soliciten la libertad condicional, si se ha cumplido el plazo legal —de oficio— se reclamará el informe de conducta al organismo correspondiente, y previa audiencia del parecer del Fiscal, se resolverá lo procedente.

- **Acuerdo No. 166 de 30 de diciembre de 1986. Ampliación del Dictamen No. 106 de 1980.**

Los sancionados a privación de libertad, cualquiera que sea la extensión de dicha sanción, pueden recibir el beneficio de la libertad condicional, ya que la ley no hace distinción alguna sobre este asunto.

- **Acuerdo No. 61 de 30 de junio de 1987. Ejecución. Control.**

Deben unirse a la causa, los acusos de recibo de las comunicaciones libradas a la PNR, firmados como constancia de su recepción.

- **Acuerdo No. 92 de 30 de septiembre de 1987. Impugnabilidad.**

Contra el auto que otorga o deniega la instancia de libertad condicional, no procede el recurso de casación, siendo posible resolver el asunto por otras vías como las quejas.

* ¿Procede el de súplica?

- **Acuerdo No. 52 de 26 de octubre de 1992. Tramitación. Otorgamiento.**

El Tribunal resolverá, de manera cuidadosa y objetiva, las solicitudes de libertades condicionales que sean presentadas junto con la evaluación de conducta, dentro de los quince días siguientes a su presentación, comunicando lo resuelto, en ese propio plazo al centro solicitante. Asimismo, creará las condiciones con la Dirección Provincial de Prisiones, para tramitar con la mayor agilidad posible, las solicitudes que partan del sancionado o sus familiares.

Título VIII. La extinción de la responsabilidad penal (artículos 59 al 65)

- **Dictamen No. 393.** Acuerdo No. 228 de 14 de septiembre de 200. **Muerte del reo.**

El Tribunal declara mediante auto la extinción de la responsabilidad penal por muerte del reo, con independencia de que —en caso de tratarse de un acusado— este haya sido instruido, o no, de cargos.

- **Dictamen No. 395.** Acuerdo No. 300 de 24 de noviembre de 200. **Prescripción. Interrupción.**

En el caso de interrupción de la prescripción, el CP precisa que después de cada interrupción, el término de prescripción comenzará nuevamente su decurso, como si fuera desde el principio, por igual término, pero el plazo de prescripción definitiva no podrá nunca exceder el doble del tiempo establecido en la Ley para que se extinga la acción penal o la ejecución de la pena, el cual será contado a partir del inicio de ese término. En consecuencia, cada interrupción permite ampliar el tiempo de la prescripción, pero dentro de un límite absolutamente impostergable, que es igual al doble del término establecido en la Ley para la prescripción, atendiendo al tipo de delito. De lo contrario, un delito podría perseguirse eternamente.

Título IX. Los antecedentes penales (artículos 66 al 69)

- **Instrucción No. 125 de 12 de abril de 1988. Determinación.**
Ver en *La reincidencia y multirreincidencia*.
- **Instrucción No. 127 de 12 de abril de 1988. Cancelación de oficio, en caso de sanciones sustitutivas de la de privación de libertad.**
Ver en *Trabajo correccional con internamiento*.
- **Instrucción No. 175 de 21 de julio de 2004 (Apartado Quinto). No se apreciarán los antecedentes cancelados o que debieron serlo.**
Ver en *La reincidencia y la multirreincidencia*.
- **Dictamen No. 215. Acuerdo No. 33 de 5 de marzo de 1985. Decreto Ley No. 83.**
El Decreto-ley No. 83 de 1ro de octubre de 1984, ordenó la cancelación de los antecedentes penales provenientes de sentencias dictadas por lo juzgados correccionales, juzgados Municipales en función de correccionales, y por los Tribunales populares que declaró extinguidos la Ley No. 1250 de 23 de junio de 1973, pero en ninguno de sus preceptos, se dispuso dejar incumplidas las sanciones provenientes de dichas sentencias.

Ver en *La reincidencia y multirreincidencia*, los siguientes Dictámenes: No. 149 de 1982, No. 174 de 1983, No. 194 de 1984, Nos. 210, 211 y 217 de 1985, No. 250 de 1986, Nos. 299 y 301 de 1989, Nos. 398 y 410 de 2001 y No. 417 de 2002. También los Acuerdos No. 147 de 1984 y No. 165 de 1986.

Título X. La declaración y ejecución de las obligaciones civiles provenientes del delito (artículos 70 y 71)⁸

- **Instrucción No. 103 de 16 de febrero de 1982. Responsabilidad civil. Muerte. Lesiones. Aspectos procesales. Modificación de la pensión acordada.**
En caso de muerte, debe acreditarse en la investigación, si la víctima en vida tenía obligaciones alimentarias, proporcionando la identificación de los alimentistas. Asimismo, se consignará en cuanto al acusado, su nivel regular de ingreso y las obligaciones familiares a su cargo. Los datos anteriores permiten determinar, en su caso, la renta en dinero que ha de disponerse en concepto de responsabilidad civil.
Si se trata de daño a la integridad corporal, hay que dejar constancia de la pérdida total o parcial de la capacidad laboral —mediante prueba pericial médico legal—, de existir; también lo relacionado con Salarios dejados de percibir, gastos de curación y otros desembolsos relacionados de manera directa y necesaria con la lesión, lo que permitirá acordar una renta en dinero o suma alzada, según proceda.
De no aparecer en el expediente los señalados datos, el Tribunal, de oficio, dispondrá las pruebas para su obtención en el juicio oral, y sólo devolverá el asunto al Fiscal, en el caso de que no sea posible su determinación en este acto.
Por último, para la modificación o cese de las pensiones alimentarias acordadas en la sentencia penal, o por el Tribunal civil (artículo 275 de la LPP), el obligado tendrá que acudir ante el Tribunal civil competente; en el primer supuesto, empleando el Proceso sumario en caso de alimentos; y en el segundo, la vía incidental.

⁸ Bajo este Título se colocan las disposiciones referidas a la Responsabilidad civil por actos ilícitos, reguladas en el Código Civil; así como sus aspectos procesales.

- **Instrucción No.104 de 16 de febrero de 1982 (modificada por el Acuerdo No. 3 de 13 de enero de 1987). Responsabilidad civil. Aspectos procesales Lesionado pendiente de curación. Artículo 275 de la LPP.**

Los Tribunales darán curso a la acción penal, sin ejercitar conjuntamente la civil, cuando exista un lesionado cuya sanidad estuviere pendiente de atestarse, siempre que las diligencias de pruebas permitan la calificación del delito y la adecuación de la sanción. Una vez firme la sentencia, se instruirá al perjudicado para que ejercite la acción civil ante el Tribunal de lo civil competente, para lo cual el Tribunal de lo penal, le proporcionará toda la información necesaria. El Tribunal de lo civil, cuidará evitar cualquier posible inferioridad de la parte perjudicada en el proceso, para lo que adoptará las prevenciones convenientes. En el orden sustantivo, serán de aplicación las normas del Código Civil —Responsabilidad civil por actos ilícitos—, y supletoriamente las del Código de Familia —De la obligación de dar alimentos—; y en el orden adjetivo, las que disciplinan el Proceso sumario en caso de alimentos. Firme la sentencia, el pago de las indemnizaciones se hará a través de la Caja de Resarcimientos.

* Atestar sanidad, significa determinar si el lesionado está o no restablecido de las lesiones, lo que corresponde decidir mediante prueba pericial a los servicios de medicina legal (ver Dictámenes No. 79 de 1979 y 338 de 1993).

La Instrucción autoriza el ejercicio de la acción penal independiente de la civil, sólo cuando sea posible establecer las calificaciones jurídicas de cada delito en particular —aun en el caso de los artículos 10 y 11 del CP—, y se tengan los datos necesarios para adecuar la sanción (artículo 272. 3 del CP).

- **Instrucción No. 109 de 27 de abril 1983. Responsabilidad civil. Determinación. Homicidio. Lesiones. Estafa.**

En caso de homicidio, si la víctima hubiese estado en vida sujeta a una obligación de dar alimentos, se dispondrá una renta en dinero a favor de los beneficiarios en concepto de indemnización de los perjuicios, y no una suma alzada como se hacía bajo el imperio del CDS.

En causa por lesiones, si el Fiscal ejercita la acción civil, el Tribunal esta obligado a resolverla en la sentencia, sin otra excepción que la del artículo 275 de la LPP.

Finalmente, en causas seguidas por el delito de estafa, cuando la defraudación proviene de un acto jurídico celebrado de común acuerdo, entre victimario y la víctima, en contra de una prohibición legal, o de los intereses de la sociedad y del Estado; o incumpliendo formalidades legales, establecidas con carácter de requisito esencial, y nulo, por tanto, desde el punto de vista del Derecho Civil, no puede hacerse declaración sobre responsabilidad civil en beneficio de la víctima en la sentencia, más lo que hubiese recibido el autor del delito en virtud de dicho acto, se decomisa y pasa al patrimonio del Estado, en concepto de efectos del delito.

* Como ejemplos de este último supuesto, aparecen en la Instrucción, cuando la víctima se proponía adquirir un bien mueble o inmueble sin cumplir las formalidades legales; o de alguien no autorizado, u obtener mercancías por canales irregulares, o lograr un servicio ilegal o aún constitutivo de delito.

- **Dictamen No. 112. Acuerdo No. 458 de 6 de noviembre de 1980. Responsabilidad civil. Aspectos procesales. Auto aclaratorio.**

Si el Tribunal en el Resultando probado de la sentencia, declara un hecho del cual se deriva responsabilidad civil, y en la parte dispositiva de dicha resolución, se omite hacer el oportuno pronunciamiento sobre este particular, que resulta preceptivo, es evidente, y por demás justo, que la Sala mediante auto aclaratorio de sentencia, subsane la señalada omisión.

* En la consulta no se expresa, si el Fiscal ejercitó la acción civil conjuntamente con la penal, lo que se presupone para poder resolver sobre esta materia. De no haberse ejercitado, no es posible resolver al respecto —nadie lo ha solicitado—. Lo curioso es que por el camino indicado, se hace un nuevo pronunciamiento resolutivo, lo que no es propio por vía de aclaración.

- **Dictamen No. 179.** Acuerdo No. 13 de 31 de enero de 1984. **Responsabilidad civil. Aspectos procesales. Auto aclaratorio.**

* El contenido de la consulta es similar a la del Dictamen No. 112 (ver en este Título).

- **Dictamen No. 195.** Acuerdo No. 101 de 17 de julio de 1984. **Responsabilidad civil del tercero.**

La responsabilidad civil de los terceros se fundamenta, en la relación existente entre los órganos, organismos, empresas, organizaciones económicas estatales, cooperativas y sus funcionarios, empleados o dependientes, cuando estos en el ejercicio de sus respectivos cargos cometan delitos

- **Dictamen No. 198.** Acuerdo No. 126 de 28 de agosto de 1984. **Responsabilidad civil. Aspectos procesales. Auto aclaratorio. Aclaración por el Secretario.**

Ante errores materiales de la sentencia —como nombres omitidos o mal consignados—, que impiden la ejecución de la responsabilidad civil; y no pudiendo aclararse esta resolución por no contarse con la mayoría de los miembros de la Sala, el Secretario, con vista a los documentos obrantes en las actuaciones —rollo y expediente—, puede librar las certificaciones pertinentes para la correcta identificación de las personas a los efectos del pago de las indemnizaciones.

* El Dictamen se refiere a simples errores u omisiones. Hay que partir de la consulta para su comprensión.

- **Dictamen No. 212.** Acuerdo No. 10 de 8 de enero de 1985. **Determinación. Acusado que antes del juicio sufragó los daños materiales causados.**

Cuando antes de la celebración del juicio oral, el acusado sufragare a la víctima el valor de los daños materiales ocasionados por el delito, el Tribunal lo consignará así en el hecho probado de la sentencia, y fundamentará que no se dispone el pago del daño material causado, por haber sido abonado por el acusado con anterioridad.

* Recuerdo haber intervenido en la redacción de la consulta.

- **Dictamen No. 291.** Acuerdo No. 72 de 14 de junio de 1988. **Responsabilidad civil. Determinación. Gastos de la Salud Pública.**

No es procedente, que el Tribunal declare en concepto de responsabilidad civil, la indemnización a un centro asistencial de la Salud Pública, por los gastos en que ha incurrido esta institución en la curación de un lesionado por el delito.

- **Dictamen No. 353.** Acuerdo No. 28 de 21 de septiembre de 1994. **Determinación del valor del bien objeto del delito. Grave perjuicio.**

La acertada interpretación del Apartado séptimo de la Circular No. 98 del Presidente del TSP es, que en los delitos contra la propiedad, cuya subsunción en un precepto o tipo legal está determinada por la cuantía del valor del bien o bienes objeto del delito, se atenderá al que se admita como racionalmente justo, según los medios de prueba obrantes en las actuaciones, esto es, el dicho del perjudicado, la evaluación pericial, las declaraciones de los testigos y el juicio racional que al respecto pueda hacer el actuante considerando nuestra realidad social, como bien lo señala el artículo 149 de la LPP.

Otra cosa es confundir el valor del bien o bienes objeto del delito, con el perjuicio causado a su legítimo propietario y víctima, u otras consecuencias derivadas de la sustracción, apropiación o daño del objeto. Debe reconocerse que en las complejas circunstancias en que se desenvuelve nuestra economía, dentro de las cuales el precio oficial o el valor que se haya desembolsado por un objeto no representa en las generalidades de los casos, el valor material que se asigna al propio objeto en la actualidad, expresado en dinero, por lo que puede admitirse en la tasación pericial o de otro modo, se reconozca un valor en dinero —distinto al pagado— para adquirirlo, o al precio oficial asignado al momento de su adquisición.

Debe considerarse que el grave perjuicio —como elemento normativo— no es sólo la lesión patrimonial que se le causa al perjudicado, sino otra consecuencia —no necesariamente económica— que se deriva del delito, y de él trae su causa, distinto al valor económico; consecuencias perjudiciales que podrán considerarse a los efectos de la adecuación de la sanción —en su caso— y, por supuesto, para la fijación de la responsabilidad civil, pero únicamente desempeñarán un papel en la determinación del tipo penal aplicable, en aquellas conductas que contemplen una modalidad agravada por razón del grave perjuicio.

* En el apartado séptimo del documento que se adjunta a la mencionada Circular No. 98 de 27 de septiembre de 1993, se expresa: “En los delitos cuya subsunción en un tipo o subtipo legal, este determinada por la cuantía del valor del bien o bienes objeto del delito, se atenderá necesariamente a la real ascendencia de ese valor en relación con la específica situación económica del país, pues la determinación de ese aspecto —atendiendo al simple valor intrínseco del bien en cuestión— no lo representa con realismo, dado el cierto y efectivo perjuicio que se causa patrimonialmente; de manera que debe estarse a la determinación de la cuantía del valor por las consecuencias o perjuicios que se ocasione con el acto delictivo; y no a la inversa”.

Luego apareció el Dictamen No. 394 de 2000 sobre el propio tema. Ambas formulaciones son de gran importancia para la determinación del valor del bien objeto del delito, lo que puede resultar decisivo en la calificación del tipo penal aplicable, si constituye un elemento del mismo, o en lo concerniente a la responsabilidad de carácter civil.

La fórmula del artículo 149 de la LPP, al afirmar “[...] se estará al dicho del perjudicado [...]”, la interpreto tomando en consideración los argumentos de los comentados dictámenes, en el sentido que se debe escuchar detalladamente al perjudicado sobre aspectos tales como el origen —modo de adquisición—, valor, trascendencia o afectación real, e hipotética reposición del bien objeto del delito, pero en forma alguna, el referido dicho puede resultar concluyente de modo absoluto. Este puede estar sujeto a crítica, confrontación y examen por todos los sujetos participantes en el proceso.

El antecedente del señalado artículo 149 se encuentra en el artículo 365 de la LECrim española, con una redacción comprensible al expresar: “Cuando para la calificación del delito o de sus circunstancias fuere necesario estimar el valor de la cosa que hubiese sido su objeto o el importe del perjuicio causado, o que hubiera podido causarse, el Juez oír sobre ello al dueño o perjudicado, y acordará después el reconocimiento pericial en la forma determinada en el Capítulo VII de este mismo Título. El Juez facilitará a los peritos nombrados las cosas y elementos directos de apreciación sobre qué hubiere de recaer el informe, y si no estuvieren a su disposición, les suministrará los datos oportunos que se pudieran reunir, previniéndoles, en tal caso, que hagan la tasación y regulación de los perjuicios de un modo prudente, con arreglo a los datos suministrados”.

- **Dictamen 362.** Acuerdo No. 19 de 4 de abril de 1995. **Determinación. Estudiantes o ciudadanos incorporados al Servicio Militar General.**

No es posible equiparar la condición de estudiante o de ciudadano incorporado al Servicio Militar Activo, con la de trabajador o pensionado sin bienes propios, a que alude el artículo 89. 1 del Código Civil; de manera que no es procedente en cuanto a los primeros, “adecuar la cuantía de la indemnización a un veinte por ciento del Salario o cualquier otro ingreso periódico que perciba, sin que pueda exceder el término de diez años”, como se establece en citada norma.

- **Dictamen No. 390.** Acuerdo No. 330 de 28 de diciembre de 1999. **Responsabilidad civil. Ejecución. Personas jurídicas. Caja de Resarcimientos.**

La entrada en vigor del Decreto Ley No. 175 de 1997, libera a la Caja de Resarcimientos, de brindar a las personas jurídicas la protección del beneficio del cobro de las cantidades que como responsabilidad civil derivada de la comisión del delito se impone por el Tribunal, quedando limitada su intervención, a las personas naturales.

- **Dictamen No. 394.** Acuerdo No. 299 de 24 de noviembre de 2000. **Determinación** (complementario del Dictamen No. 353 de 1994).

Para determinar el valor de los bienes dañados o sustraídos, cuando estos hayan sido adquirido por sus titulares con moneda extranjera o peso cubano convertible, o las acciones de daño o sustracción recaen directamente sobre este tipo de monedas, haciéndose preciso su avalúo en moneda nacional, para poder definir la competencia, calificación del delito, sus circunstancias o el perjuicio causado, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 149 de la LPP. El valor de cualquier bien, puede ser expresado en la cantidad de dinero, en moneda nacional, que se necesita para su adquisición en nuestra sociedad. El actuante no está obligado a someterse a la tasa de cambio establecida por el Banco Central, ni tampoco a la relación de cambio fijada en las Casas de Cambio (CADECA S.A.). Lo trascendente es la determinación en moneda nacional del precio del bien en nuestra realidad socioeconómica.

Lo antes expuesto exige del Tribunal una actuación libre de dogmas, que le permita arribar al valor real del bien dañado o sustraído, en nuestro cambiante y complejo entorno económico, de manera que se califiquen con certeza las modalidades delictivas, y sean resarcidos los perjudicados de forma efectiva.

Ver los comentarios al ***Dictamen No. 353 de 1994, bajo este mismo Título.***

- **Acuerdo No. 210 de 24 de mayo de 1980. Ejecución de obligaciones civiles.** Corresponde al Tribunal, en los casos de delitos de ocupación y disposición ilícitas de edificios o locales y usurpación —artículos 231, 232 y 333—, adoptar las medidas necesarias para que el inmueble sea desocupado y restituido al organismo que corresponda.
- **Acuerdo No. 39 de 27 de enero de 1981. Responsabilidad civil. Organización Judicial.**

Los presidentes de los TPP, tienen el deber de velar por el cumplimiento de las ejecutorias sobre responsabilidad civil derivada del delito.

- **Acuerdo No. 116 de 19 de julio de 1983. Responsabilidad civil. Renta en dinero.** En el caso de disponer el Tribunal en su sentencia, una renta en dinero en concepto de responsabilidad de carácter civil —en caso de niños o personas que han perdido parcial o totalmente su capacidad laboral, por ejemplo—, se fija el monto y el lapso durante el cual tiene que percibirla el perjudicado, pero no viene obligado a precisar el día exacto de su extinción.

- **Acuerdo No. 6 de 12 de enero de 1988. Responsabilidad civil. Pluralidad de responsables. Cómplices y receptadores.**

Si son varios los que han de responder en el orden civil, el Tribunal tiene que determinar en la sentencia la parte que corresponde abonar a cada uno, con independencia de que tal obligación sea solidaria entre los mismos.

La complicidad no genera responsabilidad civil, sólo la autoría. Tampoco los receptadores responden por los daños y perjuicios causados por el delito antecedente, ya que la receptación es un delito totalmente independiente de aquel.

Por último, no está establecido legalmente un límite para la cuantía de las pensiones que se acuerden en concepto de indemnización, por los perjuicios causados por el delito.

- **Acuerdo No. 37 de 2 de junio de 1989. Responsabilidad civil. Determinación.**

En el artículo 86 del Código Civil se regula el contenido de la indemnización de los perjuicios; y en el inciso e) se hace referencia a “cualquier otro desembolso hecho por la víctima, sus familiares u otra persona, a causa del acto ilícito”, lo que debe entenderse como aquellos gastos, vinculados de una forma directa e imprescindible con el delito y el restablecimiento del mismo —en su caso— sin extenderse a otros gastos, como los incurridos en casa de descanso, cenas en funerales, etcétera.

Título XI. El estado peligroso y las medidas de seguridad (artículos 72 al 90)⁹

- **Instrucción No. 51 de 1ro de abril de 1975. Conducta antisocial. Prostitución.**

Entre los vicios moralmente reprobables, hay que considerar incluido —como de las conductas más repudiadas por nuestra moral socialista— el ejercicio de la prostitución.

* La Instrucción no tiene vigencia, se refiere al CDS, pero sí valor para la comprensión del índice de peligrosidad de conducta antisocial, al clasificar el ejercicio de la prostitución como un vicio socialmente reproable, que resulta una de las conductas comprendidas en dicho índice.

- **Dictamen No. 49. Acuerdo No. 4 de 11 de enero de 1979. Ejecución. Interrupción ante apremio personal por impago de multa.**

Si contra un asegurado que cumple medida de seguridad detentiva, se dispone el apremio personal por impago de una sanción de multa, se interrumpe el cumplimiento de dicha medida por el Tribunal que la dispuso para que extinga la sanción, luego de lo cual, toma de nuevo su curso la medida original.

* Este Dictamen apareció bajo el imperio del CDS, no obstante, ante un caso análogo, la solución que se ofrece también es aplicable con la Ley en vigor. De tratarse de una sanción de privación de libertad efectiva o apremio personal, no hay duda que esta es la manera de proceder (ver artículo 77. 2 y 3). En caso de ser la sanción una de las penas sustitutivas del encarcelamiento ¿también se procede de la manera indicada?

- **Dictamen No. 66. Acuerdo No. 237 de 19 de mayo de 1979. ¿Es recurrible la resolución recaída en un expediente de peligrosidad predelictiva?**

La resolución que afirme, haber o no haber lugar, a la declaración de un índice de peligrosidad predelictiva, es susceptible de ser recurrida en apelación.

⁹ Bajo este Título se insertan todas las Disposiciones que guardan relación con el Estado Peligroso, tanto en el orden sustantivo, como procesal.

* La Ley ha sido modificada luego del Dictamen. En el caso del índice de peligrosidad por conducta antisocial, no tengo la menor duda que la resolución puede ser recurrida (artículo 415. 10 de la LPP).

¿También es recurrible en apelación, la resolución que estima o desestima, los índices de peligrosidad predelictiva por enajenación mental, desarrollo mental retardado, embriaguez habitual, narcomanía o dipsomanía?

La Ley expresamente no concede el derecho a este recurso en los citados casos, y el auto que se dicta al respecto (artículo 414 de la LPP) no está comprendido dentro de los supuestos del artículo 58 de la LPP; de todas formas, me resulta difícil sostener que la citada decisión no es recurrible.

- **Dictamen No. 69.** Acuerdo No. 251 de 31 de mayo de 1979. **Vinculación del Tribunal con la pretensión del Fiscal.**

El Tribunal, puede adecuar a su prudente arbitrio la medida imponible, con independencia de la solicitud del Fiscal.

* Del Dictamen se comprende claramente, que el Tribunal no queda vinculado en modo alguno con los términos de la solicitud del Fiscal, de manera, que puede imponer una medida de mayor rigor —en su clase o extensión— que la pretendida por la Fiscalía.

- **Dictamen No. 146.** Acuerdo No. 93 de 3 de agosto de 1982. **Modificación de la extensión de la medida. Aspectos procesales. Libertad por cumplimiento.**

Si durante el cumplimiento de una medida de seguridad reeducativa, se considera que persiste en el asegurado el estado peligroso, el Tribunal puede cambiar la duración de la misma, siempre que no exceda el límite máximo de cuatro años establecido en la Ley (artículo 80.3); y en el caso de haber extinguido hasta dicho límite —cuatro años—, habrá que iniciar nuevo proceso, de conformidad con el artículo 415 de la LPP.

Una vez que llega la fecha de extinción —fijada en la liquidación por el Tribunal—, de una medida de seguridad reeducativa, el órgano encargado de su ejecución dejará en libertad al asegurado, sin que sea necesario ningún otro pronunciamiento del Tribunal.

- **Dictamen No. 166.** Acuerdo No. 136 de 16 de agosto de 1983. **Presunto asegurado que delinque antes de ser declarado en estado peligroso.**

No existe expresa prohibición impeditiva, para declarar en estado peligroso, a un sujeto que delinquirá en el curso de la tramitación de dicho expediente.

Luego de presentar el Fiscal al Tribunal, un expediente de peligrosidad por vagancia habitual y conducta antisocial, solicitando la imposición de una medida de seguridad predelictiva; si antes de su imposición, el presunto asegurado comete un delito, ello no impide la tramitación del invocado proceso, para la declaración del estado peligroso y la imposición de la correspondiente medida.

* La solución que ofrece el Dictamen, no está exenta de serios reparos, pues con la declaración del estado peligroso y las medidas que del mismo se derivan, lo que se pretende es evitar que el sujeto delinca, de incurrir este en el delito, como se afirma, ¿qué sentido tiene entonces continuar por la vía del estado peligroso?

- **Dictamen No. 199.** Acuerdo No. 127 de 28 de agosto de 1984. **Aspectos procesales. Modificación o cese de la medida a instancia de los familiares del asegurado.**

Los familiares del asegurado, no están legitimados para instar a la modificación o cese de la medida de seguridad adoptada; no obstante, es aconsejable, que si dicha solicitud se formula cuando hubiese transcurrido un término prudencial, el Tribunal de oficio, solicite los informes correspondientes a los efectos procedentes.

* La modificación o suspensión de la medida, según la Ley (artículo 83), sólo puede ser instada por el órgano encargado de su ejecución, o acordarse de oficio por el Tribunal.

- **Dictamen No. 219.** Acuerdo No. 48 de 2 de abril de 1985. **Internamiento provisional.**
De conformidad con lo establecido en el apartado 9 del artículo 374 de la LPP, si la sentencia —en proceso seguido por estado peligroso—, fuere absolutoria, se dejará de inmediato en libertad al presunto asegurado; pero si se le impusiere una medida de seguridad que implique internamiento, puede el Tribunal disponer su internamiento provisional.
* El Dictamen aparece, antes de establecer la Ley procesal —artículo 415— un procedimiento particular para la declaración del estado peligroso por conducta antisocial, pues en aquel momento, el procedimiento que se seguía, era el de los TMP; de todas formas, la respuesta puede tener interés.
- **Dictamen No. 352.** Acuerdo No. 18 de 13 de julio de 1994. **Modificación o cese de la medida.**
El Dictamen reitera lo preceptuado en el artículo 83, en cuanto a la facultad del Tribunal para disponer la suspensión o modificación de la medida de seguridad adoptada, siempre que estén presentes los presupuestos establecidos en la Ley.
- **Dictamen No. 413.** Acuerdo No. 244 de 10 de diciembre de 2001. **Ejecución. Síntomas de enajenación mental.**
La peritación de un sancionado o asegurado, que presente síntomas de enajenación mental durante el cumplimiento de la sanción o medida —en establecimiento penitenciario o de otro tipo—, sólo puede acordarla el Tribunal que dispuso la ejecución de la resolución. Una vez impuesta la medida de seguridad de internamiento en un hospital psiquiátrico, por razón de enfermedad mental, el control del Tribunal sobre su ejecución no se extiende a las cuestiones propias del tratamiento terapéutico (otorgamiento de visitas y permisos de salida temporal); lo que es potestad exclusiva de la institución hospitalaria. Por último, es el Tribunal el órgano facultado, para decidir la salida definitiva del asegurado de la invocada entidad.
* El propio Dictamen señala que lo dispuesto, se hace extensivo a los asegurados que cumplen medidas en los centros de enseñanza especializada, o establecimiento asistencial de desintoxicación, cuyo régimen de tratamiento terapéutico obedece a las regulaciones internas de estas instituciones.

Libro Segundo. Parte Especial¹⁰

Título I. Delitos contra la Seguridad del Estado

- No se encontró disposición al respecto.

Título II. Delitos contra la administración y la jurisdicción

Desobediencia (artículo 134)

- **Dictamen No. 300.** Acuerdo No. 9 de 10 de enero de 1989. **Determinación. Antecedentes.** El delito de desobediencia, permite castigar al funcionario judicial o administrativo, que no dé cumplimiento a resolución firme u orden dictada por el Tribunal o autoridad competente y revestida de las formalidades legales, sin tener que poner en conocimiento del superior jerárquico a que esté subordinado dicho funcionario, el incumplimiento de la resolución u orden.
* Se trata de un delito especial, cuyo antecedente en el CP de 1979 se encuentra en el artículo 144, que contenía una formulación distinta, y consistía en la negativa al cumplimiento de sentencia, resolución u orden de la “autoridad jerárquica superior”; es decir, el sujeto desobedecía la decisión de su superior en grado. Sobre esta concepción recayó el Dictamen No. 137 de 16 de febrero de 1982 y el Acuerdo No. 79 de 10 de junio de 1986 —ambos sin vigencia—. La redacción actual, evita los problemas de la anterior, ya que el tipo no limita la desobediencia a la decisión del superior en grado. Sobre el concepto de funcionario judicial, puede resultar útil, como antecedente, lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1909, donde bajo la denominación general de Funcionarios del Orden Judicial, quedaban comprendidos los Magistrados del Tribunal Supremo y Audiencias; los Jueces —cualquiera que fuera su denominación o clase— y sus suplentes respectivos. Siguiendo esta interpretación, sólo los Jueces son funcionarios judiciales.
- **Acuerdo No. 10 de 19 de febrero de 1991. Determinación. Secreto bancario.** Los directores de las agencias bancarias, están obligados a suministrar a los Tribunales, la información que estos reclamen sobre el monto de cuentas u operaciones bancarias, con independencia del tipo de proceso —civil o penal—; y de negarse a ofrecer los datos solicitados, incurrirán en el delito de desobediencia.

¹⁰ Sólo se relacionan los delitos sobre los cuales han recaído Instrucciones, Dictámenes o Acuerdos del CGTSP.

Atentado (artículo 142)¹¹

- **Dictamen No. 282.** Acuerdo No. 126 de 8 de diciembre de 1987. **Sujeto pasivo. Vigilante nocturno.**

Los vigilantes nocturnos —cuerpo especial creado por la Resolución No. 25 de 9 de junio de 1987 del Ministro del Interior— son sujetos pasivos de los delitos de atentado, resistencia, desobediencia y desacato, por tener idénticas funciones y carácter que los auxiliares de los agentes de la autoridad.

- **Dictamen No. 391.** Acuerdo No. 331 de 28 de diciembre de 1999. **Determinación. Diferencia con el robo con violencia (artículo 327.2a).**

En caso que la víctima objeto de una sustracción de bienes, transcurrido un tiempo, encuentre al autor del hecho con el bien desapoderado, y éste le impida mediante la violencia o amenaza, recuperar lo que le pertenece, incurre en el delito de atentado, de la modalidad del apartado 2 del artículo 142; pues la víctima en ese momento, estaba contribuyendo a la aplicación de las leyes; y por tanto, pasa a ser un agente pasivo de este delito.

* Si la violencia o amenaza de inminente violencia, para retener lo sustraído, se emplea inmediatamente después de cometido el hecho, entonces se está en presencia del delito de robo con violencia, previsto en el apartado 2, inciso a, del artículo 327. El Dictamen es parco en su explicación, y me surge la duda siguiente: ¿Para la integración del citado delito de atentado, basta con que la víctima se limite a intentar recuperar, o recuperar, el bien que le fue sustraído; o es necesario un propósito ulterior, el de someter al malhechor a la persecución penal para que responda de sus actos? Me inclino por la segunda interpretación, de acuerdo con el Título y delito, aunque el Dictamen no hace distinción.

La comentada modalidad del delito de atentado, no estaba comprendida en el Código de 1979, ni en la versión original del Código en uso, fue fruto de una modificación legislativa en 1994.

Resistencia (artículo 143)¹²

- **Dictamen No. 282.** Acuerdo No. 126 de 8 de diciembre de 1987. **Sujeto pasivo. Vigilante nocturno.**

Los vigilantes nocturnos —cuerpo especial creado por la Resolución No. 25 de 9 de junio de 1987 del Ministro del Interior— son sujetos pasivos de los delitos de atentado, resistencia, desobediencia y desacato, por tener idénticas funciones y carácter que los auxiliares de los agentes de la autoridad.

¹¹ Sobre la diferencia entre los delitos de atentado, resistencia y desobediencia, *Vid.*, a propósito, COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR (1978): *Exposición acerca del Proyecto de Código Penal*, Imprenta del Ministerio de Justicia, Ciudad de La Habana, p. 55, donde se expresa: “El atentado se produce antes de que la autoridad, el funcionario público, etc., tome o dicte la resolución; la resistencia o desobediencia surge después que la resolución ha sido tomada, cuando ya existe una orden con un destinatario”. Explicación que resulta muy útil para la distinción de los referidos delitos en su formulación original, máxime cuando parte de la citada Comisión del Órgano legislativo.

¹² *Ibidem*

Desacato (artículo 144)

- **Dictamen No. 218.** Acuerdo No. 42 de 19 de marzo de 1985. **Sujeto pasivo. Inspectores de las Direcciones de Arquitectura y Urbanismo y Salud Pública.** Los inspectores de las Direcciones Municipales de Arquitectura y Urbanismo y los inspectores de vectores de las de Salud Pública, debidamente identificados como tales, y en el ejercicio de las actividades propias de su cargo —en calidad de agentes o auxiliares de funcionario público— al ser objeto de amenazas, calumnias, difamación, insultos, injurias o de cualquier modo de ultraje u ofensa, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro, son sujetos pasivos del delito de desacato.
 * Para la integración de este delito, constituye un requisito indispensable, “el propósito despectivo”; si este no existe, no hay desacato, aun cuando las frases proferidas, o escritas, vistas objetivamente, estén comprendidas en alguna de las acciones típicas descritas; lo antes afirmado, hace inadmisibles la “excepción de verdad”, que aparecía en el derogado Código de Defensa Social.¹³
- **Dictamen No. 282.** Acuerdo No. 126 de 8 de diciembre de 1987. **Sujeto pasivo. Vigilante nocturno.** Los vigilantes nocturnos —cuerpo especial creado por la Resolución No. 25 de 9 de junio de 1987 del Ministro del Interior— son sujetos pasivos de los delitos de atentado, resistencia, desobediencia y desacato, por tener idénticas funciones y carácter que los auxiliares de los agentes de la autoridad.
- **Dictamen No. 365.** Acuerdo No. 47 de 13 de septiembre de 1995. **Sujeto pasivo. Presidente del Consejo Popular.** El Presidente del Consejo Popular, reúne los requisitos que exige el artículo 173, por tanto, se trata de un funcionario público; sujeto pasivo del delito de desacato. Ver, bajo este propio delito, los *comentarios al Dictamen No. 218 —“propósito despectivo”—*.

Denegación de auxilio (artículo 145)

- **Dictamen No. 171.** Acuerdo No. 173 de 22 de noviembre de 1983. **Ejemplos de comisión.** El delito de denegación de auxilio, de la modalidad descrita en el inciso a) del apartado primero del artículo 161 del CP de 1979 —hoy comprendido en el artículo 145 con distinta formulación— presenta como supuesto de comisión, la resistencia por parte de un funcionario público a prestar ayuda, cooperación o auxilio a un Tribunal o a otro funcionario público para la ejecución de un acto de su competencia, como sería, por ejemplo, la negativa de una persona a exhibir los objetos y documentos que tenga en su poder, y que guarden relación con la comprobación de un hecho delictivo, a que se refiere el artículo 230 de la LPP, o la cooperación que pide un agente de la Policía a otro para detener a un delincuente.
 * De la forma que aparece redactado el delito en la Ley actual, en los señalados ejemplos, para su integración se requiere —además— que la omisión haya causado “grave perjuicio para el interés nacional o daño grave para una persona”.

¹³ *Vid.*, a propósito, COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR (1978): *Exposición acerca del Proyecto de Código Penal*, op. cit., p. 55.

¿Puede cometerse el delito de desacato, de un modo distinto al empleo de la palabra o la escritura? A través de gestos injuriantes, por ejemplo.

Desobediencia (artículo 147)¹⁴

- **Dictamen No. 157.** Acuerdo No. 33 de 1ro de marzo de 1983. **Determinación. Suspensión de obra nueva.**

El incumplimiento de la orden dada por funcionarios competentes, en el caso a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 417 de la LPCAL —Suspensión de obra nueva—, reúne todos los elementos típicos del delito de desobediencia del artículo 147 —artículo 159 en el CP de 1979—; porque de modo manifiesto incumple un mandato legal, aquel que fue apercibido de la responsabilidad penal en que pudiere incurrir al ordenarse la paralización de la obra.

* ¿Constituye un requisito para la persecución del invocado delito, que el presunto responsable haya sido apercibido de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir por incumplir el mandato del Tribunal; o basta el mero incumplimiento, aun cuando no haya sido apercibido?

- **Dictamen No. 164.** Acuerdo No. 117 de 19 de julio de 1983. **Determinación. Incumplimiento de sentencia civil.**

La negativa a dar cumplimiento a una sentencia civil, sin más, no integra el delito de desobediencia, ya que el proceso civil —artículo 473 y siguientes— establece los mecanismos adecuados para dar cumplida solución a los problemas emergentes que puedan surgir en vía de ejecución; y sólo podrá promoverse una acción penal cuando el obligado a cumplir una sentencia civil, ejecute actos previstos, como delito para impedir dicha ejecución.

* La consulta parte del supuesto, de que por sentencia firme en un proceso ordinario, se dispuso que la persona que posee un bien lo entregue a otra, y después de requerido en forma legal dándole un plazo para su cumplimiento, éste se niegue a entregar lo que está obligado.

En la consulta se hace alusión a un Acuerdo del CGTSP —cuya real existencia he verificado—, el No. 105 de 3 de marzo de 1975, el que en su apartado 5 (inciso a) afirma: “es absolutamente ilegal decretar una sanción penal por el incumplimiento de una obligación civil y administrativa”.

- **Dictamen No. 204.** Acuerdo No. 159 de 25 de octubre de 1984. **Determinación. Incumplimiento de sentencia civil.**

La mera negativa del demandado a cumplir la sentencia recaída en un proceso civil, no constituye delito, porque en esa esfera del derecho se regula el procedimiento para la ejecución forzosa de la sentencia; y el actor viene obligado a utilizar esa vía a fin de ejecutar la declaración judicial; en consecuencia, sólo si el ejecutado comete alguno de los delitos previstos en el Código Penal, es que surge la acción penal para perseguir al autor de ese hecho.

* Reitera el criterio emitido en el Dictamen No. 164 de 1983 (ver en este delito).

- **Dictamen No. 282.** Acuerdo No. 126 de 8 de diciembre de 1987. **Sujeto pasivo. Vigilante nocturno.**

Los vigilantes nocturnos —cuerpo especial creado por la Resolución No. 25 de 9 de junio de 1987 del Ministro del Interior— son sujetos pasivos de los delitos de atentado, resistencia, desobediencia y desacato, por tener idénticas funciones y carácter que los auxiliares de los agentes de la autoridad.

¹⁴ Sobre el delito de atentado y su diferencia con el de desobediencia, *vid.*, nota 11.

- **Dictamen No. 359.** Acuerdo No. 16 de 4 de abril de 1995. **Acuerdo aclaratorio No. 37 de 7 de agosto de 1995. Determinación. Ocupación ilegal de tierras o viviendas.**

El delito de desobediencia puede ser cometido en el momento de la ejecución de la resolución administrativa, que dispone la extracción de quien ha ocupado ilegalmente una vivienda o un terreno, si el infractor se niega a cumplir, o no cumple, las órdenes o disposiciones de los funcionarios o agentes de la autoridad que participan en el referido acto —impartidas a los fines perseguidos— siempre que la conducta del sujeto activo no llegue a configurar otro delito de mayor gravedad. De igual forma, aquel que —persistiendo en su propósito— reitera su introducción de manera ilícita, en la misma u otra vivienda o local, de los que fue extraído, muestra inequívocamente su ánimo y decisión de incumplir las disposiciones de las autoridades y funcionarios, y configura —con dicho comportamiento— el delito de desobediencia, previsto y reprimido en el artículo 147.

* No es posible la comprensión del Dictamen No. 359, sin la lectura del Acuerdo aclaratorio No. 37 de 7 de agosto de 1995. En el apartado 5 del Dictamen se afirma “Tomando en consideración que ambos procedimientos y regulaciones de carácter administrativo, contemplan además, la forma de ejecutar y hacer efectiva sus propias resoluciones, cuando los sujetos se nieguen a cumplir lo dispuesto, tampoco se corporificará el delito de desobediencia que recoge el artículo 147, del Código Penal vigente, sin que lo anterior obste para que los Tribunales competentes, conozcan de posibles delitos incluyendo el de desobediencia mencionado, que se cometan en el acto de ejecutar esas resoluciones”

Prima facie, parece contradictorio lo que se afirma en el Dictamen con lo transcripto anteriormente del Acuerdo aclaratorio, pero no es así. Interpreto, tomando como base las disposiciones análogas emitidas sobre esta materia, que ante el requerimiento por funcionarios de las direcciones del Ministerio de la Agricultura o de la Vivienda —en los niveles correspondientes— para abandonar la tierra o vivienda ocupada ilegalmente, la simple negativa, no constituye el invocado delito. Hay normas que regulan la ejecución forzosa, para llevar a vías de hecho el cumplimiento de las resoluciones de los citados Organismos de la Administración del Estado.

- **Dictamen No. 368.** Acuerdo No. 17 de 28 de marzo de 1996. **Determinación. Incumplimiento de sentencia civil.**

La “ocultación o desaparición intencional” de determinado bien, por parte del obligado a entregarlo, para eludir el requerimiento judicial que lo conmina a ello, difiere de la conducta que se manifiesta cuando el sujeto, simplemente se niega teniendo el bien en su poder, que es a la que se contrae el Dictamen No. 164, al expresar “que la mera negativa a cumplir lo dispuesto en una sentencia civil no integra el delito de desobediencia”, ya que la Ley procesal posibilita los medios para lograr su efectiva ocupación; por tanto, el hecho de la “ocultación o intencional desaparición”, es un supuesto diferente a la simple negativa a cumplir el mandato judicial, incurriendo aquí su comisor en el delito de desobediencia. En el supuesto que el sujeto poseyera los bienes, previa diligencia de exhibición y depósito por disposición del Tribunal, el delito sería otro.

* En caso de tener los bienes en depósito, el Dictamen no expresa qué delito comete ¿Acaso es el de apropiación indebida de ser bienes ajenos?

Ejercicio arbitrario de derechos (artículo 159)

- **Dictamen No. 48.** Acuerdo No. 543 de 27 de diciembre de 1978. **Determinación. Conflicto entre padres. Guarda y cuidado no regulada.**

En tanto no exista decisión judicial expresa, atribuyendo a uno de los padres la guarda y cuidado de los hijos habidos en matrimonio formalizado o no, ha de entenderse a ambos con igual derecho e idéntico deber, a mantener los mismos bajo su protección y abrigo en el ejercicio de la patria potestad, en los términos a que se contrae el artículo 85 del Código de Familia; y por tanto, el mero acto de uno u otro de llevarlos consigo, no puede estimarse que constituya el delito de ejercicio arbitrario de derechos, ni otro alguno, sin perjuicio, claro está, de la responsabilidad penal que pueda derivarse de la realización de actos penales de otra clase, que pudieran llegar a cometerse para mantener o adquirir la citada guarda y cuidado.

- **Dictamen No. 180.** Acuerdo No. 15 de 31 de enero de 1984. **Determinación. Disposición sobre bienes de comunidad matrimonial no liquidada.**

Si un ex cónyuge de matrimonio disuelto legalmente, sin liquidar la comunidad matrimonial de bienes, y antes del año de extinción de dicho vínculo, se persona en el otrora domicilio común, y contra la voluntad del otro ex cónyuge que tiene la posesión de los bienes en ese momento, se lleva determinados artículos que cree le pertenecen; así también en caso de matrimonio no formalizado; no comete el delito de ejercicio arbitrario de derechos; pues es reiterada la doctrina, de que las partes están obligadas a ejercitar las acciones establecidas en la ley para las reclamaciones que se consideren con derecho, y no otras distintas. En consecuencia, en los aludidos supuestos, el ordenamiento jurídico franquea especialmente la acción para obtener la división de la cosa común en el procedimiento de divorcio o división de bienes, y no se debe proceder por la vía penal, a no ser que se hayan cometido hechos que por sus características de abuso de fuerza, violencia u otros revelen peligrosidad social y siempre que reúnan todos los elementos de un tipo delictivo.

- **Acuerdo No. 106 de 16 de febrero de 1977. Empleo de fuerza.**

Incurrir en el delito de ejercicio arbitrario de derechos, aquel que para el efectivo cumplimiento de una sentencia dictada en un proceso administrativo, por la que se declara ocupante ilegal a un sujeto, en vez de acudir a la vía de ejecución que establece la ley, pone los muebles de dicho ocupante en la vía pública.

* Aun cuando el Acuerdo se adoptó imperando el CDS, resulta de utilidad en el conocimiento de casos análogos.

Encubrimiento (artículo 160)

- **Dictamen No. 345.** Acuerdo No. 31 de 2 de junio de 1993. **Conexidad procesal.**

El delito de encubrimiento se encuentra íntimamente relacionado con el delito encubierto; su naturaleza es la de ayudar al culpable a eludir la investigación, por tanto, esta figura aparece estrechamente vinculada con el delito originario, estando comprendida en el supuesto de conexidad del artículo 13, apartado 4, de la LPP; aunque no es de descartar que algún supuesto de este tipo penal, no llegue a conformar la conexidad ya descrita, y sea procedente su conocimiento independiente.

* Recuerdo haber intervenido en la redacción del proyecto de Dictamen. La LPP en sus artículos 108 y 379, establece una regla, y esta consiste “en que cada delito será objeto de un expediente separado, excepto el caso de los delitos conexos, que se conocerán en un solo expediente”. Las causales de conexidad están previstas en el artículo 13 de la LPP, no hay otras; de manera que aunque dos o más delitos parezcan

relacionados o vinculados, y se considere que deban ser instruidos conjuntamente en un mismo expediente, si no están comprendidos en las referidas causales de conexidad, han de investigarse en expedientes separados.

Basta el examen de un grupo de causas donde se juzgan pluralidad de delitos, para darnos cuenta, que esta es una de las infracciones procesales en que se incurre con mayor frecuencia, con los inconvenientes que trae a la Administración de justicia.

Hace ya algunos años —década de 1980—, el Tribunal Supremo editó un documento titulado “Las pruebas en los delitos contra la economía nacional y el delito de malversación” —documento de gran valía, lamentablemente en el olvido—, en el que se recomendó a los Instructores, Fiscales y Jueces “Erradicar la nociva práctica de investigar varios delitos en una misma causa sin razón alguna de conexidad o con una arbitraria razón de esta, y cumplir rigurosamente lo dispuesto al respecto en el artículo 108, último párrafo, de la LPP”. En particular se indica al Tribunal “No tolerar el incumplimiento del artículo 108 [...]”.

Incumplimiento del deber de denunciar (artículo 161)

- **Dictamen No. 345.** Acuerdo No. 31 de 2 de junio de 1993. **Conexidad procesal.**

El delito de incumplimiento del deber de denunciar, puede resultar conexo con el delito no denunciado, si este incumplimiento se realiza con la finalidad de procurar la impunidad del hecho antecedente, cosa que no sucede en todos los casos; por tanto, de no estar presente dicho propósito, se conocerá en expediente aparte.

Ver *comentarios al delito de Encubrimiento (artículo 160)*.

Evasión de presos o detenidos (artículo 163)

- **Dictamen No. 295.** Acuerdo No. 103 de 8 de noviembre de 1988. **Determinación. Sancionado que no regresa vencido el tiempo del permiso de salida.**

El sancionado a privación de libertad efectiva, o a trabajo correccional con internamiento, que luego de disfrutar del permiso de salida del centro de extinción de la sanción, no se presenta en el mismo en la fecha indicada, no comete el delito de evasión de presos o detenidos. En el caso del sancionado a privación de libertad efectiva, constituye una infracción del Reglamento Penitenciario, que debe ser reprimida administrativamente; en el del sancionado a trabajo correccional con internamiento, puede motivar la revocación de dicha sanción.

- **Dictamen No. 326.** Acuerdo No. 58 de 18 de diciembre de 1991. **Determinación. Sancionado a prisión efectiva o trabajo correccional con internamiento, que abandona o se ausenta del centro donde extingue sanción o trabaja.**

Comete el delito de evasión de presos, el sancionado a privación de libertad efectiva o a trabajo correccional con internamiento, que se evada o ausente sin autorización legal, del centro de reclusión o de trabajo, con independencia de la medida disciplinaria que se le pudiera imponer en el primer supuesto; y la revocación de la sanción subsidiaria en el otro.

* En cuanto al caso del sancionado a trabajo correccional con internamiento, sostengo que las conductas objeto de la consulta, sólo pueden motivar la revocación de dicha sanción, pero no constituyen el delito de evasión de presos o detenidos; ya que el sancionado a trabajo correccional con internamiento, no tiene la condición de preso o detenido; de todas formas el Dictamen resulta vinculante.

- **Dictamen No. 327.** Acuerdo No. 1 de 22 de enero de 1992. **Determinación. Sancionados a trabajo correccional con internamiento, que se evaden de los centros de cumplimiento o lugares de labor.**

* Reitera lo dispuesto en los antes señalados **Dictámenes Nos. 295 y 326**, que aparecen bajo este propio delito.

- **Dictamen No. 398.** Acuerdo No. 38 de 28 de marzo de 2001. **Determinación. Agravación extraordinaria de la sanción (artículo 54. 4).**

La agravación extraordinaria de la sanción, constituye una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal. En el delito de evasión de presos o detenidos (artículo 163), no es posible apreciar la regla de agravación extraordinaria de la sanción del apartado 4 del artículo 54, porque dicho delito sólo se comete, hallándose su autor extinguiendo una sanción o medida de seguridad, o estando sujeto a una medida cautelar de prisión provisional, lo que constituye un presupuesto para la integración del referido tipo penal (ver artículo 47.2).

Ayuda a la evasión de presos o detenidos e infidelidad en su custodia (artículo 164)

- **Dictamen No. 398.** Acuerdo No. 38 de 28 de marzo de 2001. **Determinación. Agravación extraordinaria de la sanción (artículo 54. 4).**

La agravación extraordinaria de la sanción, constituye una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal. En el delito de ayuda a la evasión de presos o detenidos (artículo 164), no es posible apreciar la regla de agravación extraordinaria de la sanción del apartado 4 del artículo 54.

Desórdenes en los establecimientos penitenciarios o centros de reeducación (artículos 165 y 166)

- **Dictamen No. 398.** Acuerdo No. 38 de 28 de marzo de 2001. **Determinación. Agravación extraordinaria de la sanción (artículo 54. 4).**

La agravación extraordinaria de la sanción constituye una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal.

En los delitos de desórdenes en establecimientos penitenciarios o centros de reeducación (artículos 165 y 166), no es posible apreciar la regla de agravación extraordinaria de la sanción del apartado 4 del artículo 54, porque dichos delitos sólo se cometen, hallándose su autor extinguiendo una sanción o medida de seguridad, o estando sujeto a una medida cautelar de prisión provisional, lo que constituye un presupuesto para la integración de los referidos tipos penales (ver artículo 47.2).

Incumplimiento de sanciones accesorias y de medidas de seguridad no privativas de libertad (artículo 167)

- **Acuerdo No. 604 de 27 de octubre de 1976. Competencia territorial.**

Corresponde el conocimiento del delito de incumplimiento de medida de seguridad, al Tribunal del territorio donde se quebrantó la medida, que puede ser o no el que la impuso.

Incumplimiento de las obligaciones derivadas de la comisión de contravenciones (artículo 170)

- **Instrucción No. 126 de 12 de abril de 1988. Modo de conocimiento por el Tribunal.**

El delito, en cuestión, sólo se corporifica, frente a aquellos sujetos que se niegan a abonar la multa y carecen de recursos para materializarla por la vía administrativa; ya que este tipo penal, no pretende resolver las insuficiencias administrativas en el cobro de las multas de esta naturaleza, para lo cual existe un procedimiento legal —Decreto-ley No. 99 de 25 de diciembre de 1987—.

El Tribunal competente, es el del domicilio del acusado; y la denuncia se formula directamente ante el mismo por funcionarios de la Oficina de cobro, asentándose en el Cuaderno de diligencias sin radicar. Para abrir a juicio el Tribunal verificará, si consta de las actuaciones que se han llevado a cabo todas las diligencias para su cobro por las vías establecidas, en caso negativo, devolverá el asunto a dicha Oficina, apoyado en el artículo 360 de la LPP. De contar con los elementos suficientes para proceder, señalará el juicio.

* Recuerdo haber participado en la comisión que redactó el proyecto de esta Instrucción. Curioso resulta, como regla, la ausencia de intervención policial; ya que es la Oficina de cobro de multas la que presenta directamente la denuncia al Tribunal, incluso, tampoco pasan las actuaciones por la Fiscalía, lo que se aparta del proceder legal. Es de notar que en las actuaciones remitidas al Tribunal, no aparece ningún dato relacionado con la conducta del acusado.

- **Dictamen No. 303. Acuerdo No. 24 de 14 de marzo de 1989. Delito continuado. Conexidad procesal.**

El delito de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la comisión de contravenciones —previsto en el artículo 170— no puede calificarse en forma de delito continuado, por su especial naturaleza.

* En verdad, no encuentro razón dogmática alguna, para impedir la continuidad en el caso consultado; no obstante, en el propio Dictamen se establece que se podrán conocer en un mismo expediente —causa y juicio—, las diversas denuncias que sobre este delito se formulen contra un mismo acusado, por guardar relación de conexidad, según el artículo 13 (apartado 5) de la LPP.

- **Dictamen No. 305. Acuerdo No. 43 de 11 de julio de 1989. Posibles sanciones.**

Cuando en el apartado 2 del artículo 170 se establece que el Tribunal, “puede sustituir la sanción privativa de libertad por la de trabajo correccional con internamiento”, ello constituye un llamado de alerta para que los Tribunales impongan esta clase de sanción, lo que no impide, en su caso, la adopción de otras posibles, de acuerdo con la ley.

* La fórmula legislativa constituye una rareza, afortunadamente aclarada por el Dictamen, ya que al reprimirse el invocado delito exclusivamente con sanción de privación de libertad, que discurre de uno a seis meses, en principio, es posible la sustitución de esta sanción por cualquiera de las autorizadas en el Código —trabajo correccional con internamiento o sin este, o limitación de libertad—, o su remisión condicional.

Es comprensible y racional la explicación del Dictamen, pues se pretende evitar que la sanción penal, se convierta en un despropósito punitivo, que en vez de fortalecer el ideal por el que fue creado el tipo penal —eficacia del sistema contravencional— lo debilite, al preferir los ciudadanos el juzgamiento por las consecuencias esperadas, antes que hacer efectiva la multa.

- **Dictamen No. 311.** Acuerdo No. 28 de 30 de mayo de 1990. **Determinación. Abono de la multa antes de dictar sentencia.**

En el apartado 3 del artículo 170 se expresa: “Si antes de dictarse sentencia, el acusado satisface las obligaciones derivadas de dicha resolución, se archivarán las actuaciones”. Lo expuesto no faculta al Tribunal, para recibir directamente el importe de multas de esta naturaleza; ni para suspender el inicio de las sesiones del juicio oral, o una vez comenzado este, con esa finalidad —pago de la multa—. El juicio oral, esta guiado por los principios de concentración y continuidad, y en el caso del procedimiento ante los Tribunales Municipales —artículo 374 de la LPP—, se desarrolla ininterrumpidamente, sólo retirándose el Tribunal por el tiempo indispensable para acordar la sentencia, realizado lo cual, se reanuda el acto y pronuncia la acordada.

* Es muy útil la aclaración, pues si bien en el delito se expresa, que si la obligación se cumple antes de dictarse sentencia se archivan las actuaciones, una vez iniciado el juicio oral, este acto se desarrolla sin solución de continuidad; quiere esto decir, que el juicio discurre de manera continua, y no existe fórmula legal para decretar su suspensión a los efectos de satisfacer la obligación que dio origen al mismo.

- **Dictamen No. 334.** Acuerdo No. 35 de 29 de julio de 1992. **Determinación. Impago de multas procesales.**

Las multas impuestas con el carácter de corrección disciplinaria —artículo 98 de la LPP—, o procesales —artículo 173 de la LPP—, no pueden equipararse a las multas derivadas de contravención o sanción penal; por tanto, su impago no tipifica el delito de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la comisión de contravenciones —artículo 170—, ni tampoco se puede proceder a su cobro como si fuera una sanción penal —artículo 35. 5—; de manera que el Tribunal debe asegurarse que se hayan adoptado todas las diligencias de apremio de bienes, para que se declare realmente la insolvencia de la persona multada.

* Lamentablemente, constituye un serio problema la inejecución de las citadas multas, lo que —sin duda— debilita la seriedad y respeto que se debe mostrar hacia esa clase de decisiones.

Disposición complementaria (artículo 173)

- **Instrucción No. 55 de 19 de noviembre de 1975. Concepto de funcionario público a los efectos del delito de malversación (sin vigencia).**

Ver en delito de *Malversación (artículo 336)*. Sólo tiene un valor histórico.

- **Dictamen No. 365.** Acuerdo No. 47 de 13 de septiembre de 1995. **Presidente del Consejo Popular.**

El Presidente del Consejo Popular, reúne todos los requisitos que, al respecto, exige el artículo 173 para ser considerado funcionario público.

Título III. Delitos contra la seguridad colectiva

Estragos (artículo 174)

- **Instrucción No. 6 de 25 de enero de 1974 (sin vigencia). Valor histórico.**

El delito de estragos, previsto en el artículo 468 del CDS, tal y como quedó modificado por la Ley No. 923 de 4 de enero de 1961, compete conocerlo a la Sala de Delitos Contra la Seguridad del Estado de los Tribunales Provinciales Populares y, en su caso, a la del TSP.

- **Instrucción No. 165 de 12 de abril de 2001. Daños considerables (artículo 174.3).** Se estiman “daños considerables” (artículo 174. 3), aquellos cuya cuantía es superior a diez mil pesos.
* Para la determinación del valor de los daños, ver los Dictámenes No. 353 de 1994 y No. 394 de 2000, en *Título X, La declaración y ejecución de las obligaciones civiles provenientes del delito*.

Delitos cometidos en ocasión de conducir vehículos por las vías públicas (artículos 177 al 183)

— Disposiciones comunes a la Sección Primera. Delitos en vías públicas.

- **Dictamen No. 24.** Acuerdo No 401 de 25 de septiembre de 1978. **Delitos cometidos en las vía públicas.**
* Este Dictamen a pesar de referirse al derogado CDS, comporta un valor para la interpretación de los delitos en ocasión del tránsito cometidos en las vías públicas, ya que como su nombre lo indica, estos sólo pueden ser cometidos en la aludida superficie —vía pública—. La Ley No. 60, Código de Vialidad y Tránsito, en su artículo 4 (apartado 97), fija con precisión el significado de “vía” de la manera siguiente: “Superficie completa de toda autopista, carretera, camino o calle utilizada para el desplazamiento de vehículos y personas. Cuando están abiertas a la circulación se consideran públicas. Son componentes de la vía los elementos que se construyen o instalan para cumplir los objetivos de la circulación tales como: faja de emplazamiento, calzada, corona, separadores, parterres, cunetas, paseos, aceras, defensa, explanaciones, puentes, alcantarillas, túneles, muros de contención, elementos de señalización y pasos viales y peatonales”.
De manera que la muerte de una persona, lesiones o daños, en ocasión de conducir un vehículo por un área distinta a la vía pública, como lo puede ser en el parqueo interior de un edificio, o al transitar por un solar yermo, o arando un terreno, no integra un delito en ocasión del tránsito rodado, y sí pudiera constituir —en su caso— un delito cometido por imprudencia de homicidio, lesiones o daños respectivamente.
Aprovecho la oportunidad para hacer la siguiente aclaración: es posible que, durante la conducción de un móvil por las vías públicas, se produzca un homicidio, lesiones o daños, pero no motivado por la infracción de “las leyes o reglamentos del tránsito”, y sí a tenor de la falta del deber de cuidado, exigible a ese conductor en las concretas circunstancias. En este supuesto, difícil de que acontezca —pero no imposible— no se está en presencia de un delito en ocasión del tránsito rodado, pero sí se realiza el de homicidio, lesiones o daños cometidos por imprudencia.
- **Dictamen No. 297.** Acuerdo No. 108 de 29 de noviembre de 1988. **Responsabilidad del Instructor o examinador.**
En los delitos por imprudencia, lo determinante de la culpabilidad reside en la relación causal que se establece entre el actuar infractor y el resultado lesivo, tal proceder, determina la causa eficiente del evento; luego, el que con su actuación produzca ese vínculo de causalidad, responde penalmente por el hecho justiciable.
* El Dictamen hace referencia, de una manera muy general, sobre la posible responsabilidad de quien enseña a otro a conducir, o quien lo examina: ¿Acaso estos, sin ser conductores, incurrir en un delito en ocasión de conducir vehículos por las vías públicas?

Delito de daños en ocasión de conducir vehículos por las vías públicas (artículo 179)

- **Instrucción No. 165 de 12 de abril de 2001. Daños de considerable valor (artículo 179.2).**

Se estiman “daños considerables” (artículo 179. 2), aquellos cuya cuantía es superior a mil pesos.

* Para la determinación del valor de los daños, ver los Dictámenes No. 353 de 1994 y 394 de 2000, en *Título X, La declaración y ejecución de las obligaciones civiles provenientes del delito*.

- **Dictamen No. 99.** Acuerdo No. 244 de 14 de junio de 1980. **Denuncia del perjudicado (artículo 179.3).**

En el caso de delitos de daños en ocasión del tránsito, si el Tribunal se percata al recibir las actuaciones, que no ha mediado la denuncia del perjudicado, concederá un plazo a la persona legitimada para que formalice aquella (artículos 290.6 y 304 de la LPP). Subsanada la falta, continuará el curso del proceso, de no rectificarse, se sobreseerá libremente.

* Otra solución sería, devolver el asunto a la Fiscalía (artículo 360 de la LPP) con la propia finalidad.

- **Dictamen No. 129.** Acuerdo No. 211 de 7 de septiembre de 1981. **Son de ajena pertenencia los equipos propiedad de una empresa, con respecto a aquel que los conduce.**

A los efectos de los delitos de daños en ocasión del tránsito por las vías públicas, los equipos propiedad de una empresa, son de ajena pertenencia respecto a aquel, a quien se le confía su explotación.

- **Dictamen No. 321.** Acuerdo No. 21 de 2 de abril de 1991. **Concurso ideal. Denuncia del perjudicado.**

En el caso de un delito en concurso ideal de homicidio, lesiones y daños (artículo 10. 1, inciso b), para conocer del delito de daños (artículo 179), se requiere la denuncia del perjudicado; formalidad que se cumple en los llamados **delitos complejos**, tomándosele declaración al perjudicado o la víctima, en la que se acreditará el daño sufrido, y su interés en que se conozca judicialmente de los mismos, o la ausencia de la invocada pretensión.

* En las diligencias sumariales, debe quedar establecido claramente, si el perjudicado por el delito de daños, está interesado en que estos se conozcan por la vía judicial, en caso contrario, no es posible proceder en cuanto a los mismos, aun cuando —hipotéticamente— formen parte de un concurso ideal de delitos.

Delito de daños, cometidos por el no conductor, por infracción de las leyes o reglamentos del tránsito (artículo 180.2).

- **Instrucción No. 165 de 12 de abril de 2001. Daños de considerable valor (artículo 180.2).**

Se estiman “daños considerables” (artículo 180.2) aquellos cuya cuantía es superior a mil pesos.

* Para la determinación del valor de los daños, ver los Dictámenes No. 353 de 1994 y 394 de 2000, en *Título X, La declaración y ejecución de las obligaciones civiles provenientes del delito*.

Delito de conducir en estado de ebriedad o afectado en la capacidad de conducción —o permitir que otro conduzca en los referidos estados— en ocasión de guiar vehículos por las vías públicas (artículo 181)

- **Dictamen No. 226.** Acuerdo No. 73 de 14 de mayo de 1985. **Determinación de la capacidad de conducción por ingestión de bebidas alcohólicas.**

La convicción de que un chofer ha ingerido bebidas alcohólicas, en cantidad suficiente para afectar su capacidad de conducción, en ausencia de información ofrecida por institución o laboratorio, la obtiene el Tribunal con auxilio del examen médico —practicado inmediatamente después de ocurrido el hecho— con empleo de las comprobaciones psicométricas corrientes —test Romberg, test digital y otros—, por un médico de un centro asistencial cualquiera, quien tendrá, por esta razón, el carácter de perito-testigo. Por lo demás, el acto del juicio oral y una completa información sobre todos los aspectos del hecho, contribuirán a garantizar la justeza de la decisión que, en definitiva, se adopte.

* En el Dictamen —seguramente por error material— se alude a perito-testigo, cuando lo correcto es testigo-perito. En esta moderna figura procesal, que es propiamente un testigo, el sujeto percibe los hechos o su verdadera significación, en virtud de especiales conocimientos, como el caso del médico de guardia. Recuérdese que el perito actúa dentro del proceso; es designado en la fase investigativa por el Instructor y realiza su labor por encargo, en virtud de un interés procesal preexistente. Lo que no ocurre en el caso consultado. También tiene el carácter de testigo perito el auditor de una entidad, que en el curso de una auditoría detecta un faltante en dinero, que pudiera constituir un delito.

- **Dictamen No. 258.** Acuerdo No. 14 de 24 de febrero de 1987. **Discordancia entre el resultado del examen clínico y el de alcohol en sangre.**

De producirse discrepancia entre el dictamen emitido por un médico, acerca de si una persona se halla o no en estado de embriaguez, y el resultado del examen de alcohol en sangre, ninguna de esas pruebas puede apreciarse preferentemente a la otra. El Tribunal apreciará el valor de una y otra prueba, en el marco de los principios de la formación de su convencimiento, valorando todos aquellos elementos demostrativos de la verdad, y según su conciencia, y de las razones expuestas por la acusación y la defensa, determinará si efectivamente el conductor del vehículo se hallaba o no en estado de embriaguez.

* El Dictamen afirma el principio de libre apreciación de las pruebas, que rige en nuestro ordenamiento procesal, y cuya antítesis lo constituye el de prueba legal —tasada o tarifada—.

- **Dictamen No. 280.** Acuerdo No. 113 de 13 de noviembre de 1987. **Permitir que otro conduzca ebrio o drogado. Responsabilidad por el resultado lesivo de la conducción.**

El propietario de un vehículo, o quien lo tiene encargado por cualquier concepto, que permite, a sabiendas, que otro, estando ebrio o intoxicado por drogas, y en consecuencia, incapacitado para conducir, lo haga; y a resultas de la ebriedad o intoxicación, ocasione un efecto de lesión para un bien jurídico —homicidio, lesiones o daños—; además de responder del delito previsto en el artículo 181. 1 b) —permitir que otro conduzca ebrio o drogado—, también incurre en el **título de imprudencia** de los señalados resultados —homicidio, lesiones o daños—, si entre la infracción de peligro —permitir que otro conduzca en los señalados estados— y el resultado lesivo, se aprecia una íntima relación causal y él pudo o debió haber previsto el citado efecto.

* Recuerdo haber intervenido en la redacción del proyecto de consulta, pues en la Sala —TPPSS— teníamos conocimiento de tres interesantes y fundadas sentencias del TSP, con posiciones distintas para la solución del mismo supuesto.

Delitos cometidos en ocasión del tránsito ferroviario, aéreo y marítimo (artículo 184)

- **Instrucción No. 165 de 12 de abril de 2001. Daños de limitado y considerable valor (artículo 184. 1 ch y d).**

Se consideran bienes de limitado valor —artículo 184. 1 d)— aquellos cuya cuantía es hasta dos mil pesos; y considerable valor —artículo 184.1 ch)— superior a dos mil pesos.

* Para la determinación del valor de los daños, ver los Dictámenes No. 353 de 1994 y 394 de 2000, en *Título X, La declaración y ejecución de las obligaciones civiles provenientes del delito*.

- **Dictamen No. 129.** Acuerdo No. 211 de 7 de septiembre de 1981. **Son de ajena pertenencia, los equipos propiedad de una empresa, con respecto a aquel que los conduce.**

A los efectos de los delitos de daños en ocasión del tránsito ferroviario, aéreo o marítimo, los equipos propiedad de una empresa, son de ajena pertenencia con respecto a aquel a quien se le confía su explotación.

Delitos de producción, venta, demanda, tráfico, distribución y tenencia ilícita de drogas, estupefacientes, sustancias sicotrópicas y otras de efectos similares (artículos 190 al 193)

- **Instrucción No. 170 de 11 de diciembre de 2002. Drogas. Adecuación de sanción.**

Los Tribunales actuarán con el rigor necesario, sin menoscabo de los derechos y garantías fundamentales de los enjuiciados, en los casos de delitos relacionados con la producción, cultivo, venta, demanda, tráfico, distribución y tenencia ilícita de drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y otras de efectos similares; especialmente en el tráfico internacional, búsqueda y escamoteo de recalos, cultivadores, comercialización en particular en centros nocturnos, o facilitándolas a menores de edad, estudiantes, o ante manifestaciones de asociación para dicha comisión. No siendo recomendable, como regla, el empleo de sanciones sustitutivas de la de prisión, ni la remisión condicional de esta en los mencionados supuestos. Se deben aplicar consecuentemente, las penas accesorias de comiso y confiscación.

- **Dictamen No. 57.** Acuerdo No. 125 de 20 de marzo de 1979. **Destino de la droga ocupada.**

Según el artículo 135 de la LPP, la autoridad encargada de instruir la fase preparatoria, recogerá las piezas de convicción, conservándolas para que puedan ser identificadas en cualquier momento; por ejemplo, en el juicio oral (artículo 309 de la LPP). Si lo ocupado fuera droga, el Tribunal que conozca de la causa, por razones de seguridad, podrá disponer la destrucción de la misma a solicitud del Fiscal, siempre que se conserve una muestra del producto a los fines precedentemente expuestos.

- **Dictamen No. 423.** Acuerdo No. 102 de 19 de junio de 2004. **Determinación de droga, estupefaciente, sustancia sicotrópica o de efecto similar.**

Para la consideración de droga, estupefaciente, sustancia sicotrópica o de efectos similares, a los efectos de la integración del delito en cuestión, basta la determinación mediante prueba de suficiente rigor científico, en correspondencia con las regulaciones que al respecto haya establecido el organismo facultado para ello, la que será apreciada con criterio racional. De manera que no constituye un presupuesto, que dichas sustancias estén previamente clasificadas —en documentos jurídicos internacionales, o resoluciones de ministerios, por ejemplo—.

- * El Dictamen loablemente aclara uno de los delitos más nocivos y repudiados por la civilidad; una breve observación, cómo conoce el ciudadano destinatario de la norma, cuál es el comportamiento proscripto; ya que para afirmar la existencia de un delito intencional, se requiere entre otros elementos, tener conciencia de que la conducta es prohibida.
- **Acuerdo No. 25 de 24 de marzo de 1987. Determinación. Ocupación de partículas de marihuana. Intencionalidad.**

Si en ocasión de practicársele un registro en el vestuario a un ciudadano, se hallan partículas o picadura de la hierba conocida por marihuana, cualquiera que fuera su cantidad, ese hecho constituye el delito de tenencia de drogas, siempre que, en el caso concreto, concurren los elementos de la culpabilidad, es decir, la tenencia querida y consciente de esa sustancia.
- * Al exigirse en el Acuerdo para la integración del tipo penal —tenencia de drogas—, en el plano subjetivo, “la tenencia querida y consciente de esa sustancia”, se afirma, que se está ante un delito que sólo se comete por intención.

Título IV. Delitos contra el orden público

Portación y tenencia ilegal de armas o explosivos (artículos 211 al 214)

- **Dictamen No. 371.** Acuerdo No. 39 de 16 de julio de 1996. **Determinación. Arma para la que no se concede licencia (artículo 211. 3).**

A los efectos de la calificación de la modalidad agravada de este delito (artículo 211.3), por tratarse de armas de fuego para las que no se concede licencia, hay que acudir al Decreto-ley No. 52 de fecha 24 de marzo de 1982, que las relaciona en su artículo 9.
- * A continuación transcribo el artículo 9 del Decreto ley No. 52, expresivo de la relación de armas para las cuales no se concede licencia, siendo estas: plumas fuente pistolas, bastones fusiles y otros similares, escopetas recortadas, cualquiera que sea su calibre, rifles con excepción de los destinados a actividades deportivas, ametralladoras de cualquier tipo, cañones de cualquier clase o tamaño, todas las armas blancas de uso reglamentario en las FAR; sables, espadas, puñales, dagas, navajas de punta sevillana u otras similares, bastones de estoque, manoplas, cachiporras, *black jacks* y demás armas contundentes o punzantes y armas de fuego de fabricación artesanal o casera.

Título V. Delitos contra la economía nacional

Incumplimiento de obligaciones en entidades económicas (artículo 220)

- **Dictamen No 419.** Acuerdo No. 201 de 29 de octubre de 2002. **Entidades privadas. Unidades Básicas de Producción Cooperativa. Requiere la denuncia del perjudicado o del representante legal de la entidad.**

Ver en delito de *Malversación (artículo 336)*.

Incumplimiento de normas de seguridad en entidades económicas (artículo 221)

- **Dictamen No. 331.** Acuerdo No. 31 de 29 de julio de 1992. **Determinación. Responsabilidad material.**

Se trata de un delito “cometido esencialmente por imprudencia”. El tipo penal exige, que en caso de resultar aplicables las disposiciones relativas a la responsabilidad material —Decreto-ley No. 92 de 1986—, sólo podrá sancionarse el delito, si el valor de los daños ocasionados es superior a la cuantía establecida en la citada legislación —Sobre la responsabilidad material de los dirigentes, funcionarios y demás trabajadores—.

* En la investigación de este delito, resulta imprescindible conocer, en su caso, la resolución que determina el monto en que es exigible la responsabilidad material.

En fecha próxima, entrará en vigor el Decreto Ley No. 249 de 23 de julio de 2007, que deroga el Decreto-ley No. 92 de 22 de mayo de 1986.

- **Dictamen No 419.** Acuerdo No. 201 de 29 de octubre de 2002. **Entidades privadas. Unidades Básicas de Producción Cooperativa. Requiere la denuncia del perjudicado o del representante legal de la entidad.**

Ver en delito de *Malversación (artículo 336)*.

Incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades económicas (artículo 222)

- **Dictamen No. 331.** Acuerdo No. 31 de 29 de julio de 1992. **Determinación. Responsabilidad material.**

Se trata de un delito “cometido esencialmente por imprudencia”. El tipo penal exige, que en caso de resultar aplicables las disposiciones relativas a la responsabilidad material —Decreto-ley No. 92 de 1986—, sólo podrá sancionarse el delito, si el valor de los daños ocasionados es superior a la cuantía establecida en la citada legislación —Sobre la responsabilidad material de los dirigentes, funcionarios y demás trabajadores—.

* En la investigación de este delito, resulta imprescindible conocer, en su caso, la resolución que determina el monto en que es exigible la responsabilidad material.

En fecha próxima, entrará en vigor el Decreto-ley No. 249 de 23 de julio de 2007, que deroga el Decreto-ley No. 92 de 22 de mayo de 1986.

- **Dictamen No 419.** Acuerdo No. 201 de 29 de octubre de 2002. **Entidades privadas. Unidades Básicas de Producción Cooperativa. Requiere la denuncia del perjudicado o del representante legal de la entidad.**

Ver en delito de *Malversación (artículo 336)*.

Uso indebido de recursos financieros y materiales (artículo 224)

- **Dictamen No 419.** Acuerdo No. 201 de 29 de octubre de 2002. **Entidades privadas. Unidades Básicas de Producción Cooperativa. Requiere la denuncia del perjudicado o del representante legal de la entidad.**

Ver en delito de *Malversación (artículo 336)*.

Abuso en el ejercicio de cargo o empleo en entidad económica (artículo 225)

- **Dictamen No. 160.** Acuerdo No. 72 de 27 de abril de 1983. **Determinación. Sólo se comete en entidad económica de la producción o los servicios.**

El delito de abuso en el ejercicio de cargo o empleo en entidad económica, está inserto entre los delitos regulados en el Título V del Libro II del Código Penal; Delitos contra la economía nacional, por lo que es un delito que tiene por objeto de protección las relaciones que surgen en esa esfera de la sociedad, ya se trate de la producción o de los servicios; luego, los funcionarios o empleados que laboran en otras esferas de la actividad estatal, no son sujetos imputables en los delitos especificados en este Título.

* Es muy importante la aclaración del Dictamen, y resulta válida para todos los delitos comprendidos bajo este Título. En el mismo se deja establecido que el propósito del legislador no es reprimir las conductas descritas cuando se incurre en ellas, prevaleciéndose del cargo en cualquier tipo de entidad, sino sólo en aquellas entidades económicas de la producción o los servicios.

- **Dictamen No. 216.** Acuerdo No. 40 de 19 de marzo de 1985 (artículo 225.1c). **Requiere la actuación intencional del agente.**

La modalidad del artículo 225. 1 (inciso c) —“Obsequie, sin la debida autorización, productos, materiales u otros bienes de la entidad, empresa o unidad, u ofrezca gratuitamente los servicios que ellas presten”—, para su integración requiere, no sólo la realización de los elementos objetivos del tipo; exige también la actuación intencional del agente.

* El antecedente inmediato de este delito, lo encontramos en el artículo 269, inciso c, del CP de 1979, con similar redacción, y sobre el cual recayó el Dictamen.

Infracción de las normas de protección de los consumidores (artículo 227).

- **Dictamen No. 216.** Acuerdo No. 40 de 19 de marzo de 1985 (artículo 227c). **Requiere la actuación intencional del agente.**

La modalidad del artículo 227 (inciso c) —“cobrar mercancías o servicios por encima del precio o tarifa aprobados por la autoridad u organismo competente, o del precio pactado por las partes”—, para su integración requiere, no sólo la realización de los elementos objetivos del tipo; exige también la actuación intencional del agente.

* El antecedente inmediato de este delito, lo encontramos en el artículo 271.1, inciso c, del CP de 1979, con similar redacción, y sobre el cual recayó el Dictamen.

Especulación (artículo 230a)

- **Dictamen No. 214.** Acuerdo No. 27 de 5 de febrero de 1985. **Determinación.**

El particular que adquiera cualquier clase de productos o mercancías, con el propósito de revenderlos para obtener lucro o ganancia, comete el delito de especulación.

Ocupación y disposición ilícitas de edificios o locales (artículo 231)

- **Dictamen No. 95.** Acuerdo No. 188 de 15 de mayo de 1980. **Determinación. Cesión.**

Por cesión, gramatical y jurídicamente, hay que entender la renuncia de alguna cosa, posesión, acción o derecho que una persona (graciosa o interesadamente) hace a favor de otra; y tratándose concretamente de una vivienda, su cesión sea en forma total o parcial por quien la ocupa o disfruta de acuerdo con la legislación aplicable a la misma,

requiere, en su consecuencia, la realización por parte de quien cede, de actos expresa y directamente encaminados a la total dejación a favor de quien adquiere el disfrute y demás beneficios derivados de la ocupación del inmueble que la vivienda constituye.

Lo mismo cabe decir en cuanto a las permutas que practiquen, entre sí, ocupantes distintos, prescindiendo de la adecuada autorización requerida por las disposiciones que rigen sobre el particular, por cuanto que en definitiva no significan otra cosa, que renunciaciones y adquisiciones recíprocas de tales derechos a favor, respectivamente, de personas distintas a sus ocupantes legales y constituyen, por tanto, cesiones mutuas, y como tales, comprendidas en la prohibición de que se deja hecha referencia.

En su caso, el Tribunal tendrá que extender la jurisdicción —artículo 6 de la LPP—, a todas aquellas cuestiones del ámbito civil y administrativo que sean necesarias elucidar, para la determinación de la culpabilidad o inocencia.

* La comentada norma y el Dictamen, para a su aplicación, deben ser estudiados de manera concordante con la especial legislación que rige sobre la materia.

- **Dictamen No. 133.** Acuerdo No. 260 de 4 de noviembre de 1981. **Determinación. Ubicación del inmueble.**

Sin entrar a distinguir la ubicación de edificios o locales —periferia de la ciudad, zona rural, o comunidad campesina, por ejemplo—, el agente que realice los actos previstos en el tipo penal, comete el delito de ocupación y disposición ilícitas de edificios o locales.

* La comentada norma y el Dictamen, para a su aplicación, deben ser estudiados de manera concordante con la especial legislación que rige sobre la materia.

- **Acuerdo No. 210 de 24 de mayo de 1980. Ejecución.**

El Tribunal que conoce del delito, adopta las medidas necesarias para que el inmueble sea desocupado y restituído (artículo 70).

Título VI. Delitos contra el patrimonio cultural

No encuentro disposición al respecto.

Título VII. Delitos contra la fe pública

Falsificación de documentos (artículos 250 al 260)

- **Instrucción No. 108 de 27 de abril de 1983. Clasificación de los documentos.**

Por Cuanto: En el nuevo Código Penal, al igual que en la legislación sustantiva penal precedente —el Código de Defensa Social y el de 1870—, en relación con las falsedades documentarias (Capítulo III del Título VII), no se determina cuáles documentos tienen el carácter de públicos, cuáles de privados y sólo parcialmente los comprendidos en el concepto de bancarios o de comercio.

Por Cuanto: Esta indefinición ha provocado una gran confusión en la práctica judicial, y ha dado lugar a que sean frecuentes los casos en que sentencias de los Tribunales Provinciales Populares deban ser casadas, por haberse incurrido en error en ellas en cuanto al carácter atribuido al documento en que se funda la calificación.

Por Cuanto: Se trata, sin embargo, de una cuestión que, planteada en términos correctos, no hay razón para que se mantenga subsistente.

Por Cuanto: En nuestra tradición legislativa, la regulación de los medios de prueba —la documental entre ellos— corresponde a la legislación sustantiva civil (civil y mercantil) y, modernamente, casi exclusivamente a la procesal civil, con valor extensivo a las demás ramas del derecho, y a los conceptos que aparecen en la misma deben acudir, por tanto, todos los Tribunales —incluidos los de lo penal— a los efectos de determinar la clase de los documentos implicados en la decisión que han de adoptar. De lo antes expuesto se deduce, que no se ha dejado al criterio discrecional del Tribunal —forzosamente impreciso— de determinar la naturaleza de los referidos documentos.

Por Cuanto: La razón de la clasificación, según habrá de advertirse al transcribir los preceptos legales pertinentes, estriba, fundamentalmente, en cuanto a los documentos públicos, en la circunstancia de ser expedidos por los funcionarios públicos competentes y con las solemnidades específicas señaladas en la ley, y tocantes a los bancarios o de comercio, en la de proceder de operaciones de comercio, incorporar un derecho patrimonial (valores) y ser transmisibles por simple entrega o por endoso. Los demás no incluibles en la anterior clasificación tendrían el carácter de privados.

Por Cuanto: El artículo 281 de la LPCAL establece:

“Artículo 281. Son documentos públicos;

- 1) los autorizados por funcionario público competente con las formalidades requeridas por la ley;
- 2) las certificaciones de dichos documentos expedidas en forma legal;
- 3) los Registros oficiales y las certificaciones de los asientos que obren en los mismos expedidos por los funcionarios que los tuvieran a su cargo;
- 4) las actuaciones judiciales y las certificaciones legalmente expedidas con vista de las mismas.

Son documentos privados los formados por particulares y los demás no comprendidos en el apartado anterior”.

Por Cuanto: El Código de Comercio, en sus artículos 443 y 532, dispone:

“Artículo 443. La letra de cambio se reputará acto mercantil, sin distinción de personas, se regirán por las disposiciones de este Código.

Artículo 532. Las libranzas a la orden y los pagarés también a la orden, se reputarán de carácter mercantil y producirán las mismas obligaciones y efectos que las letras de cambio, respecto de los libradores, endosantes y avalistas a quienes se hubiere hecho el oportuno protesto o notificación por falta de pago en la forma prevista en el Título anterior.

Los vales o pagarés que no estén expedidos a la orden, se reputarán simples promesas de pago, sujetas al derecho común o al mercantil, según su naturaleza, salvo lo dispuesto en el Título siguiente”.

Por Tanto: En consecuencia, el CGTSP haciendo uso de sus facultades..., acuerda dictar la siguiente:

Instrucción No. 108

PRIMERO: Tienen el carácter de documentos públicos, a los efectos del delito previsto en el artículo 303 del CP, aquéllos que reúnen las características señaladas en el artículo 281 de la LPCAL.

SEGUNDO: Tienen el carácter de documentos bancarios o de comercio, a los efectos de la aplicación del artículo 304 del CP, aquéllos que procedan de operaciones de comercio, incorporan un derecho patrimonial transmisibles por simple entrega o por endoso, como los cheques y mandatos de pago a la orden librados entre entidades relativos a operaciones de comercio.

También se calificarán como mercantiles los documentos a los que se les confiera expresamente ese carácter por la Ley.

TERCERO: Los documentos que no son documentos públicos ni de comercio o bancario de acuerdo con lo expuesto en los acápite anteriores y tampoco son de alguna de las otras clases reguladas en el Capítulo III del Título VII del CP, tienen el carácter de documentos privados, y les es aplicable, a los efectos de su protección penal, el artículo 310 del antes citado cuerpo legal.

* Por su importancia, he transcrito la Instrucción de manera total. Como podrá apreciarse, fue dictada bajo en imperio del CP de 1979, no obstante, conserva íntegramente su valor para la interpretación de los actuales preceptos que abordan la falsedad documental. Sobre los documentos bancarios o de comercio, se han sostenido disímiles criterios en su clasificación, entiendo de la Instrucción, que no es suficiente para incorporarlos dentro de la citada clase, el sólo hecho de que procedan de operaciones de esta naturaleza —comercio— sino que han de reunir cumulativamente el resto de los presupuestos a que alude la disposición.

Falsificación de documentos públicos (artículo 250)

- **Dictamen No. 162.** Acuerdo No. 101 de 5 de julio de 1983. **Requisitos para que un documento sea considerado de carácter público.**

El artículo 281 de la LPCAL, relaciona genéricamente los documentos a los cuales le otorga el carácter de público. Dicha ley, no formula una relación nominal de tal clase de documentos, sino que enumera los requisitos que deben reunir para ser clasificados de la invocada especie; estos son:

- 1ro. Que la persona que lo emita sea un funcionario público, para lo cual se tendrá en cuenta la interpretación auténtica contextual que aparece en el artículo 173.
- 2do. Que el documento suscrito por el funcionario público, esté dentro del ámbito de su competencia, esto es, si tiene facultad para realizar ese acto.
- 3ro. Que el documento fue expedido, de acuerdo con los requisitos legales exigidos para su fehabencia.
- 4to. Que tenga como objetivo una declaración de voluntad reconociendo, negando, modificando, una relación jurídica o es fiel expresión de un estado o situación de hecho con relieve jurídico.

Falsificación de documentos bancarios y de comercio (artículo 251)

Ver al inicio de este Título en *Falsificación de documentos (artículos 250 al 260) la Instrucción No. 108 de 27 de abril de 1983. Clasificación de los documentos.*

Falsificación de documento privado (artículo 257)

Ver al inicio de este Título en *Falsificación de documentos (artículos 250 al 260) la Instrucción No. 108 de 27 de abril de 1983. Clasificación de los documentos.*

Título VIII. Delitos contra la vida y la integridad corporal

Homicidio (artículo 261)

- **Instrucción No. 103 de 16 de febrero de 1982. Responsabilidad civil en caso de homicidio.**

En caso de muerte, debe acreditarse en la investigación, si la víctima en vida tenía obligaciones alimentarias, proporcionando la identificación de los alimentistas. Asimismo, se consignará en cuanto al acusado, su nivel regular de ingreso y las obligaciones familiares a su cargo. Los datos anteriores permiten determinar, en su caso, la renta en dinero que ha de disponerse en concepto de responsabilidad civil.

De no aparecer en el expediente los señalados datos, el Tribunal, de oficio, dispondrá las pruebas para su obtención en el juicio oral, y sólo devolverá el asunto al Fiscal, caso que no sea posible su determinación en este acto.

Por último, para la modificación o cese de las pensiones alimentarias, acordadas en la sentencia penal o por el Tribunal civil (artículo 275 de la LPP), el obligado tendrá que acudir ante el Tribunal civil competente; en el primer supuesto, empleando el Proceso sumario en caso de alimentos; y en el segundo, la vía incidental.

Ver esta Instrucción en *Libro Primero, Título X. La declaración y ejecución de las obligaciones civiles provenientes del delito (artículos 70 y 71)*.

- **Instrucción No. 109 de 27 de abril de 1983. Responsabilidad civil en caso de homicidio.**

En caso de homicidio, si la víctima hubiese estado en vida sujeta a una obligación de dar alimentos, se dispondrá una renta en dinero a favor de los beneficiarios en concepto de indemnización de los perjuicios, y no una suma alzada, como se hacía bajo el imperio del CDS.

Ver esta Instrucción en *Libro Primero, Título X. La declaración y ejecución de las obligaciones civiles provenientes del delito (artículos 70 y 71)*.

- **Instrucción No. 110 de 5 de julio de 1983. Delitos de homicidio y lesiones, presuntamente cometidos por médicos o personal profesional y auxiliar de la medicina, en el ejercicio de sus respectivas especialidades.**

Cuando el Fiscal presente al Tribunal, con solicitud de apertura a juicio oral, un asunto seguido por un delito de homicidio o lesiones, presuntamente cometido por médicos o personal profesional y auxiliar de la medicina —en el ejercicio de sus respectivas especialidades— el Tribunal observará si constan en el expediente las acciones de instrucción siguientes:

- a) Si se realizó una amplia información testifical, en relación con trabajadores del centro asistencial donde ocurrió el hecho, familiares de la víctima, u otras personas;
- b) Si el Director del centro asistencial rindió informe circunstanciado sobre los hechos;
- c) Si consta el resultado de la necropsia clínica;
- d) Si está debidamente verificado el dicho del acusado;
- e) Si están debidamente documentadas las acciones de instrucción realizadas y cumplidas las garantías procesales establecidas en la ley;
- f) Si consta —unido al expediente— el informe pericial, expedido por la Comisión Médica designada por el Director Provincial de Salud Pública.

Si el Tribunal considera que la investigación no está agotada, devolverá el asunto (artículo 263 de la LPP), señalando concretamente las acciones a realizar y, de estimarlo procedente, solicitará al Ministerio de Salud Pública que designe una comisión —integrada por especialistas del más alto nivel— con el propósito de determinar sobre la actuación de los médicos, o personal de la salud, que estén acusados.

Lesiones (artículos 272 al 274)

- **Instrucción No. 103 de 16 de febrero de 1982. Responsabilidad civil en caso de lesiones.**

Si se trata de daño a la integridad corporal, hay que dejar constancia de la pérdida total o parcial de la capacidad laboral —mediante prueba pericial médico legal—, de existir; también lo relacionado con Salarios dejados de percibir, gastos de curación y otros desembolsos relacionados de manera directa y necesaria con la lesión, lo que permitirá acordar una renta en dinero o suma alzada, según proceda.

De no aparecer en el expediente los señalados datos, el Tribunal, de oficio, dispondrá las pruebas para su obtención en el juicio oral, y sólo devolverá el asunto al Fiscal en el caso que no sea posible su determinación en este acto.

Por último, para la modificación o cese de las pensiones alimentarias, acordadas en la sentencia penal o por el Tribunal civil (artículo 275 de la LPP), el obligado tendrá que acudir ante el Tribunal civil competente; en el primer supuesto, empleando el Proceso sumario en caso de alimentos; y en el segundo, la vía incidental.

Ver esta Instrucción en *Libro Primero, Título X. La declaración y ejecución de las obligaciones civiles provenientes del delito (artículos 70 y 71)*.

- **Instrucción No. 104 de 16 de febrero de 1982, modificada por el Acuerdo No. 3 de 13 de enero de 1987. Responsabilidad civil. Lesionado cuya sanidad está pendiente de atestarse (artículo 275 de la LPP).**

Los Tribunales darán curso a la acción penal, sin ejercitar conjuntamente la civil, cuando exista un lesionado cuya sanidad estuviere pendiente de atestarse, siempre que las diligencias de pruebas permitan la calificación del delito y la adecuación de la sanción. Una vez firme la sentencia, se instruirá al perjudicado para que ejercite la acción civil ante el Tribunal de lo civil competente, para lo cual, el Tribunal de lo penal le proporcionará toda la información necesaria. El Tribunal de lo civil cuidará evitar cualquier posible inferioridad de la parte perjudicada en el proceso, con ese propósito adoptará las prevenciones convenientes. En el orden sustantivo, serán de aplicación las normas del Código Civil —Responsabilidad civil por actos ilícitos—, y supletoriamente las del Código de Familia —De la obligación de dar alimentos—; y en el orden adjetivo, las que disciplinan el Proceso sumario en caso de alimentos. Firme la sentencia, el pago de las indemnizaciones se hará a través de la Caja de Resarcimientos.

* Atestar sanidad, significa determinar si el lesionado está o no restablecido de las lesiones, lo que corresponde decidir —mediante prueba pericial— a los servicios de medicina legal (ver Dictamen No. 338 de 1993 bajo este rubro).

La Instrucción autoriza el ejercicio de la acción penal independiente de la civil, sólo cuando sea posible establecer las calificaciones jurídicas de cada delito en particular —aun en el caso de los artículos 10 y 11 del CP—, y se tengan los datos necesarios para adecuar de la sanción (artículo 272.3 del CP).

- **Instrucción No. 109 de 27 de abril de 1983. Responsabilidad civil en caso de lesiones. Acción civil (Artículo 275 de la LPP).**

En causa por lesiones, si el Fiscal ejercita la acción civil, el Tribunal está obligado a resolverla en la sentencia, sin otra excepción que la del artículo 275 de la LPP.

- **Instrucción No. 110 de 5 de julio de 1983. Delitos de homicidio y lesiones, presuntamente cometidos por médicos o personal profesional y auxiliar de la medicina, en el ejercicio de sus respectivas especialidades.**

Ver esta Instrucción en el *delito de Homicidio (artículo 261)*.

- **Dictamen No. 233.** Acuerdo No. 101 de 25 de junio de 1985. **Lesiones como concepto jurídico.**

En nuestro ordenamiento legal sustantivo, no se puede confundir el concepto de lesiones desde el punto de vista médico con el jurídico.

* El Dictamen hacía referencia a una modalidad del delito de lesiones, maltrato de obras (artículo 328 del CP de 1979), que pasó a ser una contravención; no obstante, el pronunciamiento inicial, sobre la distinción entre el concepto de lesiones desde el punto de vista médico y el legal, tiene vigencia; y esa es la razón por la que he colocado el Dictamen.

- **Dictamen No. 298.** Acuerdo No. 109 de 29 de noviembre de 1988. **Determinación. Maltrato de obra. Contravención.**

Cuando un Tribunal Municipal reciba actuaciones por un presunto delito de lesiones, si al dictaminarse sobre las mismas —prueba pericial médica— en sede judicial, se concluye que estas no pusieron en peligro la vida de la víctima, ni le dejaron secuelas, ni requirieron para su curación tratamiento médico, y por tanto, no constituyen delito; en el caso que las actuaciones estén radicadas como causa, se dictará auto de sobreseimiento libre, librándose testimonio de lugares a la Fiscalía o Policía, a los efectos de la represión de esa conducta por la vía contravencional, de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 141, de 24 de marzo de 1988, en su artículo 1 (inciso m); pero si sólo están controladas en el Cuaderno de diligencias sin radicar, las actuaciones serán remitidas a las citadas instituciones con la finalidad indicada.

* El supuesto de la consulta es difícil que acontezca —no imposible—, ya que el Tribunal, para admitir esta clase de asuntos, debe cerciorarse de que en las investigaciones previas se practicó la prueba pericial médica; y por tanto, el hecho constituye delito, según el concepto que del mismo (lesiones) ofrece la ley.

- **Dictamen No. 338.** Acuerdo No. 1 de 14 de enero de 1993. **Determinación. Prueba pericial médico-legal.**

No es imprescindible la presencia de los peritos médicos en el juicio oral, cuando la prueba pericial se haya practicado de forma legal, entendiéndose por esto, que según la índole de las lesiones causadas al perjudicado —ya sean dolosas o culposas— del dictamen emitido, resulta evidente la naturaleza y características de las mismas para una acertada calificación de los hechos por parte del Tribunal, debiéndose —en este caso— dar lectura, como prueba documental, en el acto del plenario al dictamen antes citado, consignando esos particulares detalladamente en el acta levantada. Si el Tribunal requiriera de algún esclarecimiento, ampliación o precisión, ordenará la comparecencia de los peritos al juicio oral.

* Recuerdo haber intervenido en la redacción del proyecto de Dictamen. Otrora, el Dictamen No. 79 de 1979, hacía referencia a la presencia obligatoria del perito en el juicio oral, en toda causa seguida por el delito de lesiones —dolosas o culposas—.

La presencia del perito en el juicio se deriva del principio de oralidad que rige en este acto, lo que debe constituir la regla, pero pudiera prescindirse de su asistencia, si la acusación y la defensa no la requieren, y tampoco el Tribunal; siendo suficiente —entonces— la lectura del dictamen pericial. De estimar alguna de las partes —con argumentos suficientes— o el Tribunal, necesaria la comparecencia del especialista al juicio, este debe concurrir. La prueba se practica originariamente ante el Tribunal (principio de inmediación).

- **Dictamen No. 343.** Acuerdo No. 12 de 22 de febrero de 1993. **Determinación. Prueba pericial médico-legal.**

Corresponde a la Policía en la fase investigativa, disponer la práctica de la prueba pericial médico-legal, a los fines de determinar si el daño a la integridad corporal, constituye una contravención o un delito.

* La citada diligencia de prueba, resulta imprescindible para la determinación de si el hecho constituye o no el delito de lesiones, y en su caso, la clase de las mismas.

- **Dictamen No. 360.** Acuerdo No. 17 de 4 de abril de 1995. **Determinación. Prueba pericial médico-legal.**

Corresponde a la Policía en la fase investigativa, disponer la práctica de la prueba pericial médico-legal, a los fines de determinar si el daño a la integridad corporal, constituye una contravención o un delito.

Título IX. Delitos contra los derechos individuales

- No encuentro disposición al respecto.

Título X. Delitos contra los derechos laborales

Incumplimiento de normas de protección e higiene del trabajo (artículo 296)

- **Instrucción No. 114 de 10 de abril de 1984. Instrucción del Consejo de Estado. Determinación.**

Al recibir el Tribunal, un expediente de fase preparatoria —seguido por un presunto delito de incumplimiento de normas de protección e higiene del trabajo— comprobará cuidadosamente si en el mismo constan practicadas las diligencias de prueba requeridas, para la determinación de la persona a quien corresponda realmente exigirle responsabilidad penal, a tenor de haber propiciado directamente —mediante acción u omisión— el resultado, siendo, por lo tanto, presuntamente culpable de la infracción de la disposición sobre protección e higiene del trabajo que haya ocasionado el accidente, por haber incumplido su obligación o función y siempre que, a consecuencia de este incumplimiento, se haya producido el resultado penalmente perseguible.

Lo expuesto anteriormente, lo exigirá el Tribunal de instancia, haciendo uso del artículo 263 de la LPP, y el de Casación a través del artículo 79 de ese propio cuerpo legal.

- **Acuerdo No. 276 de 17 de noviembre de 1981. Determinación.**

Al presentar el Fiscal un asunto de esta naturaleza, el Tribunal debe examinar si constan acreditados los elementos siguientes:

- a) La persona que tenía la obligación de aplicar o ejecutar la medida de protección e higiene infringida u ordenar la aplicación de dichas medidas;
- b) La infracción de la aplicación, ejecución o disposición de la medida;
- c) La entidad del resultado de peligro o daño.

De no aparecer los citados datos, devolverá el asunto al Fiscal, con indicaciones expresas para su subsanación.

Imposición indebida de medidas disciplinarias (artículo 297)

- **Dictamen No. 224.** Acuerdo No. 66 de 16 de abril de 1985. **Determinación. Sujeto pasivo (Dirigentes).**

La protección penal ante la imposición o aplicación ilegal de medidas disciplinarias, debe comprender, tanto a los trabajadores, como a los dirigentes, por cuanto ambos se encuentran sometidos a regímenes disciplinarios que convergen en un mismo fin, que es el de garantizar la corrección indispensable cuando la conducta asumida resulte atentatoria a la disciplina laboral en su concepto más amplio; por tanto, se integrará el delito, cuando realmente se demuestre que se ha estado en presencia de la aplicación de una medida ilegal.

* El Dictamen apareció bajo el imperio del Código Penal de 1979, refiriéndose al delito previsto en el artículo 351.1 de aquel cuerpo legal, el cual constituye el antecedente inmediato del delito de igual denominación, previsto en el artículo 297 del Código en uso. Los criterios del Dictamen pueden resultar de utilidad.

Título XI. Delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales y contra la familia, la infancia y la juventud

Aspectos procesales comunes al Título XI

- **Instrucción No. 173 de 7 de mayo de 2003. Examen de menores presuntas víctimas de delitos.**

Cuando exista un menor, presunta víctima de un delito, el Tribunal determinará, si su exploración en el juicio oral resulta imprescindible, o no. Para adoptar la anterior decisión, tendrá en cuenta los criterios siguientes:

- a) No afectar la salud del menor;
- b) Evitar la victimización del mismo;
- c) Importancia del testimonio;
- d) Si es suficiente la entrevista filmada, de haberse realizado;
- e) Opinión del facultativo que atendió al menor; y
- f) Propuesta y argumentos de la acusación y la defensa.

Sobre la base de los criterios expuestos, el Tribunal podrá decidir si prescinde del examen del menor, si es suficiente con la exhibición de la filmación —en su caso— o lectura de la declaración sumarial; si se explora directamente o a través de un especialista en sede judicial u otro sitio adecuado; o si se constituye en el domicilio del mismo, o través de despacho.

Las señaladas ideas también son válidas para aquellas personas cuya edad mental sea inferior a los 16 años, aunque su edad cronológica fuera superior, así como para todos los testigos menores de edad.

* La instrucción denota un gran esfuerzo por la protección de los destinatarios a los que hace alusión, lo que es sin duda digno de elogio. Dos breves reflexiones sobre la misma. La primera, no es posible olvidar, que estamos ante una “presunta víctima”; aun no hay sentencia firme, y el acusado se presume inocente. La otra, en cualquier fórmula que se emplee para el examen de un menor, sin perder de vista como interés supremo su protección, no se puede inobservar el principio de contradicción, de manera que ha de ser obligatorio, en todas las variantes a utilizar, en el control del testimonio, por la acusación y la defensa, aspecto medular que también aborda la Instrucción.

Corrupción de menores (artículos 310 al 314)

- **Dictamen No. 412. Acuerdo No. 245 de 10 de diciembre de 2001. Determinación.**

Se da cuenta con consulta formulada por el Fiscal General de la República, que es del tenor siguiente:

[...] Mediante el Decreto Ley 175 de 1997 se reformularon varias modalidades del delito de Corrupción de Menores y en específico en cuanto a las conductas previstas en el artículo 310 se substituyó el verbo “inducir” por “utilizar”, con lo cual ha surgido, en nuestro criterio, la posibilidad de que en algunos casos el empleo de menores en la comisión de un hecho configure la infracción, tanto de esta norma como de otra, en la cual pudiera estar presente, además, la circunstancia de agravación del empleo de menores.

Por ejemplo, si en un delito de Pederastia con Violencia, se hace participar también a un menor de dieciséis años, resultaría que este inductor, además de ser autor por ejecución (o por inducción) de ese delito, cometería, simultáneamente un delito de corrupción de menores. O en otro caso, aunque solamente sea menor la víctima del delito, por ejemplo de un abuso lascivo, pudiera considerarse que la utilización de ese menor para tal acto de perversión, constituye además, una corrupción de menores.

Esta convergencia de las normas correspondientes, puede considerarse como un concurso ideal de delitos (distintas infracciones que surgen de un solo acto), en cuyo caso se debería sancionar los hechos de conformidad con la sanción mayor o más grave prevista para ellos; otra posición sería considerar la existencia de un aparente concurso de normas, en cuyo caso se debería resolver el conflicto aplicando los criterios de especialidad o absorción, fundamentalmente, según el caso.

Otras situaciones pueden surgir de la interpretación que se haga de la expresión, en el apartado 1 del artículo 310, “otras de las conductas deshonestas de las previstas en este Código”, que al relacionar tales conductas con el Código Penal en general, permite considerar que se refiere prácticamente al universo de los delitos, ya que cualquier conducta ilícita es, en principio “deshonesta” y sin duda lo son las falsificaciones, las sustracciones y otras conductas que no están directamente vinculadas con la “honestidad” en el sentido de la moralidad de las relaciones sexuales. En ese caso, utilizar un menor en la comisión de un Robo con Fuerza, a más de constituir una forma agravada de ese delito, podría constituir también un delito de Corrupción de Menores. De modo similar habría que considerar la participación de menores en la ejecución de cualquier delito.

Nuestro criterio es, en principio, nos encontramos ante posibles casos de concurso o conflicto aparente de normas y que por tanto, lo hechos deben calificarse por un solo delito, atendiendo al criterio de la especialidad (la particular protección que otorga la ley a los menores en unos casos, o la mayor especificidad de la descripción de la conducta en otros) en primer lugar y al de la absorción (que el hecho corruptor está comprendido ya en la otra norma, por ejemplo, al agravar específicamente la sanción por emplear a menores en la ejecución o al hacerlos víctimas). En cuanto a la interpretación del concepto de “conductas deshonestas de las previstas en este Código”, nos inclinamos por la idea de que el legislador quiso darle un sentido amplio y no limitarlas solo a los delitos relacionados con la libertad sexual y la adecuada formación de los menores, como se interpretaba del texto del apartado 1 del artículo 487 del Código de Defensa Social, que simplemente se refería a la inducción de un menor para “ejercer actos deshonestos”, los cuales se relacionaban con los delitos contra las buenas costumbres y la honestidad.

Otro problema que se plantea en relación con el delito de Corrupción de Menores se deriva de la introducción como circunstancia de agravación en el inciso ch) del apartado 2) del artículo 310, “la utilización de más de un menor para la realización de los actos previstos...” y surge la duda acerca de si esto significa que el legislador no consideró que este delito sea de los que se consideran como lesivos de bienes “personalísimos”, es decir, inseparables de la individualidad de cada persona y que por tanto una conducta punible de corrupción puede recaer, al menos simultáneamente, sobre varios menores o, si por el contrario puede darse el caso de que se sancione por tantos delitos como menores hayan resultado perjudicados y además, en cada una de las sanciones se tome en cuenta esta circunstancia agravante.

En síntesis, nuestra consulta consiste en lo siguiente:

¿Cómo debe interpretarse la expresión “otras de las conductas deshonestas de las previstas en este Código” contenida en el apartado primero del artículo 310 del Código Penal? ¿Se refiere a cualquier conducta delictiva o a las previstas en una determinada familia de delitos, título o capítulo del Código Penal?

¿En cualquier caso, ya se interprete de manera restringida o amplia, el individuo que utilice a un menor en la comisión de un delito comprendido en tal concepto, responde como autor de ese delito de conformidad con lo previsto en el inciso ch) del apartado 2 del artículo 18 del Código Penal o como autor del delito de Corrupción de Menores o como autor de ambos delitos? ¿Debe resolverse el caso aplicando la fórmula en el inciso b) del apartado 1 del artículo 10 del Código Penal?

Si lo procedente fuera sancionar por los dos delitos, en el caso del que se califique por concepto distinto al de Corrupción de Menores, ¿sería de apreciar además la circunstancia agravante prevista en el inciso ch) del artículo 53 del Código Penal?

En el caso que se utilice a más de un menor en alguna forma de corrupción, por ejemplo en prácticas de prostitución simultáneamente, ¿se debe calificar un solo delito con la agravante correspondiente al inciso ch) del apartado 2 del artículo 310 del Código Penal o dos —o más— delitos y cada uno de ellos con tal circunstancia de agravación?

El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal, acuerda evacuar la consulta en los términos del siguiente:

Dictamen No. 412

Las cuestiones sometidas a consulta con relación al delito de Corrupción de Menores no resultan simples y dependen precisamente del conocimiento que tengan los Fiscales y Jueces de los hechos, así como del elemento subjetivo del delito, para, a partir de la intención tenida por el autor con relación a la ejecución del hecho, revelada por las circunstancias, los resultados, los medios y modos de la comisión del delito y otros elementos, poder determinar si su objetivo era el de deformar la psiquis de la víctima hacia la realización de los actos de corrupción que él propiciara, o perseguía otra finalidad.

El delito de Corrupción de Menores es una de las tipologías que demanda la adopción de un criterio uniformado a partir de las modificaciones que se le introdujeran mediante el Decreto Ley No. 175 de 1997, al sustituirse el verbo rector “inducir”, —que es el que recoge [sic] casi todas las legislaciones— por el de “utilizar”, ya que mediante el primero de los mencionados se diferenciaba claramente este delito de los Abusos Lascivos, Escándalo Público y otros. La supresión de ese verbo se hizo por el legislador para poder incluir dentro de él otras conductas que no integraban este delito anteriormente. Sin embargo,

a pesar de que en la figura básica recogida en el artículo 310.1 del Código Penal siempre se empleó el nuevo verbo, encontramos que en la subfigura del apartado 3, el legislador mantuvo sin modificación el verbo “inducir”, rompiéndose así la sistematicidad de la ley.

En cuanto a la consulta múltiple formulada, es de señalar lo siguiente:

PRIMERO: La cuestión inicial sometida a consulta, tomando en consideración las razones antes expuestas, justifican plenamente la interpretación de que en cada caso concreto que se refiera a las otras conductas deshonestas de las previstas en el Código Penal, cualquiera de ellas, esté en la familia que esté, habrá corrupción, siempre que el propósito del sujeto activo haya tenido como elemento subjetivo para su comisión el ánimo de corromper; o pudo o debió prever esas consecuencias; si este ánimo o intención no se puede determinar de los hechos imputados, entonces se calificará por la figura que tipifique, o sea lo preponderante en el análisis de los hechos será la intención tenida por el comisor de ellos o la posibilidad o el deber de preverlo. Derivado de este principio la segunda cuestión sometida a análisis referida a la autoría del que utilice a un menor en la comisión de un delito comprendido dentro de las otras familias, título o capítulo del Código Penal, se concluye que el sujeto activo será autor del delito que según los hechos se haya podido determinar hubiera tenido la intención de realizar: el de Corrupción de Menores o el otro delito que haya ejecutado con la participación del, o de los menores.

SEGUNDO: En lo que concierne a la tercera cuestión sometida a consulta, referida a la apreciación de la circunstancia agravante prevista en el inciso ch) del artículo 53 del Código Penal, en el caso de que se arribe a la determinación de que la conducta del comisor no estuvo guiada por el ánimo corruptor, al calificarse el otro delito que corresponda de los contenidos en el Código Penal, se le apreciará la antes mencionada agravante siempre que no se trate de un ilícito que tenga como subfigura de agravación, la participación de menores; ahora bien, en el caso en que se determine que el propósito de corromper haya presidido la actividad del agente activo no se apreciará esta agravante, al estar comprendida en los elementos del delito del artículo 310.1 del Código Penal.

TERCERO: En lo que respecta a la cuarta cuestión formulada para su esclarecimiento, que se contrae al caso en que se utilice a más de un menor en alguna forma de corrupción, ello constituiría, un solo delito de Corrupción de Menores de la forma agravada prevista en el artículo 310.2, inciso c) del Código Penal, por lo que tampoco sería de apreciar la circunstancia de agravación del inciso ch) del artículo 53 del Código Penal, al predominar el criterio de la especialidad y estar ello contenido ya en la figura del mencionado delito.

CUARTO: No obstante haber sido respondidas las diferentes preguntas formuladas, se hace necesario aclarar otras cuestiones referidas al delito de Corrupción de Menores, como son:

- a) Es común que como parte de un único delito de Corrupción de Menores, el comisor realice varias acciones tendentes a mover la voluntad de la víctima hacia la realización de los actos de corrupción, por lo que de ellos se deriva que esta figura no tiene carácter de continuidad, con independencia de cuantas acciones haya realizado sobre ella.
- b) No se integra su comisión en grado de tentativa, puesto que la mera proposición del acto corruptor es sancionable como figura independiente.
- c) Otros delitos contemplados dentro de la misma familia delictiva, donde también se tutela a los menores, pueden acarrear un conflicto aparente de leyes ante determinadas conductas y por eso es muy importante discernir

de los hechos, con meridiana claridad, cuál era la voluntad del agente activo o su obligación o deber de prever sus resultados, y aplicar con la debida distinción ese elemento subjetivo, sin olvidar el principio de la especialidad, pues el legislador agravó determinadas figuras delictivas cuando para su ejecución se utilizan menores de edad, para dar adecuada respuesta penal.

Es por ello que si de los hechos se pone de manifiesto la realización de actos de tocamientos, sin que existan otros encaminados a la realización del acto sexual, estando el elemento subjetivo dirigido a satisfacer impulsos lúbricos, sin otro propósito ulterior, se integraría el delito de Abusos Lascivos.

Ahora bien, tampoco puede afirmarse de manera absoluta que el solo hecho de realizar tocamientos a un menor de uno u otro sexo, siempre integraría el delito de Abusos Lascivos, pues si del conjunto fáctico declarado probado se pone de manifiesto la realización reiterada de tales actos con un mismo menor, la entrega de dádivas para así comprar su voluntad, la formulación de determinadas promesas o amenazas, u otros actos, de modo que lo vayan encaminando a la desviación, la perversión, o la deformación en el normal desarrollo de la sexualidad, o de su comportamiento social particular que debió y pudo prever el comisor, estaríamos en presencia de un delito de Corrupción de Menores.

* Por la complejidad e importancia del asunto, transcribo literalmente la consulta y el Dictamen.

- **Dictamen No. 415.** Acuerdo No. 3 de 15 de enero de 2002 (**artículo 310.2 ch**). **Pluralidad de participantes (artículo 51).**

El tipo cualificado de corrupción de menores, previsto en el artículo 310 (apartado 2, inciso ch): “si el hecho se realiza por quien tenga la potestad, guarda o cuidado del menor”; sólo abarca a los autores o cómplices en quienes concurran los descritos elementos de agravación, en cuanto a los demás sujetos no comprendidos en dicho supuesto, responden por las modalidades penales que correspondan; lo que se fundamenta en el artículo 51.

Otros actos contrarios al normal desarrollo del menor (artículo 315)

- **Dictamen N. 16.** Acuerdo No. 279 de 27 de junio de 1978. **Impago de pensión alimenticia.**

El hecho de que el padre sea un trabajador por cuenta propia, cuyo Salario es imposible de embargar, lo que genera serias dificultades para hacer efectiva la pensión alimenticia acordada, no constituye, sin más, elemento suficiente para entender como regla general, que se integra el mencionado delito.

* El Dictamen apareció bajo en imperio del CDS, cuyo artículo 503 —de igual denominación al actual— describe un comportamiento similar.

- **Acuerdo No 92 de 21 de abril de 1981. Determinación.**

La conducta de los padres que se desentienden de sus obligaciones y deberes para con sus hijos menores, tanto en la esfera material, como en la moral, cuando constituya un abandono real y constante, con relevante trascendencia en las condiciones de desamparo en los referidos órdenes (material y moral), y por tanto, un grave incumplimiento de sus deberes, integra el delito de otros actos contrarios al normal desarrollo del menor.

Venta y tráfico de menores (artículo 316)

- **Dictamen No. 415.** Acuerdo No. 3 de 15 de enero de 2002 (**artículo 316.1. 2 b). Pluralidad de participantes (artículo 51).**

El tipo cualificado de venta y tráfico de menores —previsto en el artículo 316 apartado 2, inciso b— “si es cometido por la persona o responsable de la institución que tiene al menor bajo su guarda y cuidado”; sólo abarca a los autores o cómplices en quienes concurren los descritos elementos de agravación, en cuanto a los demás no comprendidos en dicho supuesto, responden por las modalidades penales que correspondan; lo que se fundamenta en el artículo 51.

Título XII. Delitos contra el honor

Difamación, calumnia e injuria (artículos 318, 319 y 320)

- **Dictamen No. 271.** Acuerdo No. 67 de 21 de julio de 1987. **Diferencias.**

Las tres especies de delitos contra el honor previstos en el CP —difamación, injuria y calumnia— son realmente inconfundibles, por tener elementos de tipicidad —objetivos y subjetivos— bien distintos.

El delito de difamación (artículo 318) requiere que el autor —al imputar a otro, hechos contrarios al honor— haya obrado con el propósito de rebajarlo en la opinión pública o exponerlo a perder la confianza requerida para el desempeño de su cargo, profesión o función social. El hecho imputado puede ser cierto o no; pero si el autor lo afirma —a sabiendas de que es falso— el delito cometido no es el de difamación sino el de calumnia.

En el delito de injuria (artículo 320) el autor con la ofensa, persigue únicamente herir a la víctima en sus sentimientos, sin ningún propósito ulterior.

En el delito de calumnia (artículo 319) el autor divulga —o sea, afirma ante terceras personas— hechos falsos que redundan en descrédito de una persona, a plena conciencia de su falsedad.

Los delitos de difamación y de calumnia se cometen, tanto en presencia, como en ausencia de la víctima, y respecto al de injuria, esta doble posibilidad resulta del propio texto del artículo 320 del CP, que lo define.

A pesar de la naturaleza similar de los delitos de difamación, injuria y calumnia, el artículo 321 del CP establece que el primero es semipúblico; o sea, que requiere —para ser perseguible— la previa denuncia de la persona ofendida, y que los dos últimos son delitos privados, es decir, que sólo son perseguibles en virtud de querrela de la persona ofendida. Esta anomalía puede deberse a que el CP se promulgó después de hallarse vigente la LPP, la cual —en sus artículos 420 y siguientes— sólo estableció el requisito de la querrela para perseguir los delitos de injuria y calumnia.

* El Dictamen, cuyo proyecto fue presentado al Consejo de Gobierno por el Doctor Mario Ugidos Rivero —Presidente p. s. de la Sala de lo Penal en aquel entonces— de forma magistral, denota cómo los tres delitos son inconfundibles.

Título XIII. Delitos contra los derechos patrimoniales

Hurto (artículos 322 al 324)

- **Instrucción No. 165 de 12 de abril de 2001. Bienes de limitado valor (artículo 323).**

Se consideran bienes de limitado valor (artículo 323), aquellos cuya cuantía sea hasta mil pesos.

* Para la determinación del valor de los bienes, ver los Dictámenes No. 353 de 1994 y 394 de 2000, en *Título X, La declaración y ejecución de las obligaciones civiles provenientes del delito*.

- **Dictamen No. 120.** Acuerdo No. 61 de 10 de marzo de 1981. **La sustracción de un documento de inestimable valor integra la modalidad básica.**

A los efectos de la punición del delito de hurto, se considera de inestimable valor el documento empleado para la distribución de equipos de refrigeración —denominados bonos—, por consiguiente, la acción de sustraer esos papeles cae en la modalidad básica del señalado delito.

- **Dictamen No. 273.** Acuerdo No. 69 de 21 de julio de 1987. **Continuidad. Robo y hurto.**

Los delitos de robo —con violencia o fuerza— y hurto, no se funden nunca en un solo delito de carácter continuado, habida cuenta que en sus formas de comisión, no guardan similitud en su ejecución, lo que constituye un requisito para declarar la continuidad.

* En el Dictamen se aclara, que apreciar la continuidad en el caso consultado —delitos de robo y hurto—, además de ser incorrecto por la razón expuesta, conlleva a sancionar más severamente, que en caso de reprimir cada delito por separado, afirmando que lo que se pretende con la aludida institución “es beneficiar al reo”.

- **Dictamen No. 283.** Acuerdo No. 127 de 8 de diciembre de 1987. **Sustracción de arenas (marítimas o fluviales).**

Según se establece en el artículo 15 de la Constitución de la República, y el artículo 136 del Código Civil, son bienes de propiedad estatal, entre otros, las arenas marítimas o fluviales, y por tanto, la extracción de las mismas sin autorización integra el delito de hurto, pues implica sustraer una cosa mueble de ajena pertenencia. El carácter de bien mueble de las arenas lo determina el artículo 46 (apartado 2) del Código Civil. El valor de la arena, en su caso, se establecerá mediante prueba pericial.

- **Dictamen No. 299.** Acuerdo No. 8 de 10 de enero de 1989. **Delito de hurto contra bienes que la víctima lleva consigo (artículo 324). Reincidencia.**

Para declarar la reincidencia a que se refiere el apartado 2 del artículo 324, el acusado tiene que haber sido objeto de una condena anterior a tenor del mismo delito; es decir, el preceptuado en el artículo invocado, y no en otra modalidad de hurto. También, dentro de ese concepto de reincidencia, se incluye la multirreincidencia por esta propia modalidad delictiva.

Si al acusado le constaren como antecedentes penales, delitos que constituyen la reincidencia o multirreincidencia específica —y también la reincidencia o multirreincidencia genérica—, los Tribunales, además de calificar el hecho por el artículo 324 apartado 2, apreciarán sólo la reincidencia o multirreincidencia genérica.

* Sin duda, se trata de un polémico tema, pero muy interesante. El legislador incorporó la categoría de “reincidente” como elemento de agravación del tipo. El Dictamen aclara en qué consiste este concepto, expresando que sólo incluye al sancionado en virtud de uno o más delitos comprendidos en esta propia modalidad de hurto, es decir, del artículo 324.

Además, se expone que, si junto a la reincidencia señalada, aparece la reincidencia o multirreincidencia específica —a tenor de hurtos de otras modalidades, por ejemplo— o la genérica, sólo se apreciará esta última. Este criterio me resulta difícil de comprender, pues si no existiera la referida modalidad —agravada a resultas de la reincidencia específica—, y el acusado hubiera sido objeto de condenas anteriores por delitos de la misma especie y de índoles distintas, el Tribunal se limitaría a declarar la reincidencia o multirreincidencia específica, sin tener en cuenta los delitos de otra naturaleza. De otro lado, la referida interpretación hace que una misma institución sea empleada doblemente en disfavor del acusado; primero, como elemento del tipo, y luego, en cuanto elementos que determinan la ampliación de los límites del delito calificado (considero válido este comentario para las modalidades de robo con violencia o fuerza, en su tipo agravado en virtud de la reincidencia; ver Dictamen No. 417 de 2002).

- **Dictamen No. 353.** Acuerdo No. 28 de 21 de septiembre de 1994. **Grave perjuicio.** Debe considerarse que el grave perjuicio, como elemento normativo, no es sólo la lesión patrimonial que se le causa al perjudicado, sino otra consecuencia, no necesariamente económica, que se deriva del delito y de él trae su causa, distinto al valor económico, consecuencias perjudiciales que podrán tomarse en cuenta a los efectos de la adecuación de la sanción —en su caso— y, por supuesto, para la fijación de la responsabilidad civil, pero solamente desempeñarán un papel en la determinación del tipo penal aplicable, en aquellas conductas que contemplen una modalidad agravada por razón del grave perjuicio.

* La delimitación y división entre elementos descriptivos y normativos son muy discutidas en las cuestiones concretas. Tradicionalmente, se entiende por elementos descriptivos, aquellos que reproducen determinados datos o procesos corporales o anímicos, y que son verificados de modo cognoscitivo por el Juez; ejemplos de lo anterior son los conceptos “edificio” o “sustraer”. Son normativos, todos los elementos cuya concurrencia presupone una valoración; ejemplos, los términos “injuria” o “ajeno”. El grave perjuicio debe ser abarcado por el dolo. Ejemplo de un hecho, que pudiera ocasionar un grave perjuicio, lo es la sustracción de un ejemplar ganado vacuno —único en el país— traído del exterior para estudios genéticos en aras del desarrollo ganadero. La acción se llevó a cabo por un trabajador del centro de investigación donde se encontraba el animal, con pleno conocimiento de los antecedentes expresados y las consecuencias de su conducta.

Sustracción de electricidad (artículo 325)

- **Instrucción No. 139 de 10 de abril de 1991. Interpretación del Consejo de Estado.** Los Tribunales Populares, considerarán entre las formas de sustracción del fluido eléctrico, las que para alcanzar dicho objetivo penalmente reprochable, impliquen:
 - A) Restablecer o conectar de cualquier forma, sin la autorización debida, el servicio eléctrico que le haya sido suspendido o desconectado, con el fin de apoderarse de fluido eléctrico que no le corresponde o de cuyo uso le haya sido privado.
 - B) Aplicar al equipo de medida de electricidad (metro-contador) cualquier procedimiento o mecanismo para adulterar el registro del consumo y apoderarse del fluido eléctrico.

Transcribo literalmente la Instrucción.

- **Dictamen No. 91.** Acuerdo No. 102 de 20 de marzo de 1980. **Formas de comisión.** En el proceso de elaboración del CP de 1979, se analizaron las violaciones al régimen de distribución de la energía eléctrica que se efectuaban mediante las denominadas

“tendederas”, y para reprimirlas, se creó este tipo penal. La figura comprende cualquier violación del régimen restringido de distribución a través de una sustracción de energía. No precisa modos de ejecución determinados, ni lucros ulteriores. El perjuicio es el desbalance que produce, en el sistema, los “apagones”, las interrupciones en la producción y en el servicio. El beneficio que persigue el infractor, no es no abonar la energía, sino sustraerla clandestinamente para usarla, en perjuicio de los usuarios legítimos. El delito se comete, tanto por el que da la energía de su reloj, como por el que la toma; por ende, a cualquier supuesto de sustracción de energía eléctrica le es aplicable este delito.

Sustracción de vehículos de motor para usarlos (artículo 326)

- **Instrucción No. 165 de 12 de abril de 2001. Bienes de considerable valor (artículo 326.2 a).**

Se estiman bienes de considerable valor, aquellos de cuantía superior a mil pesos.

* Para la determinación del valor de los bienes, ver los Dictámenes No. 353 de 1994 y 394 de 2000, en *Título X, La declaración y ejecución de las obligaciones civiles provenientes del delito*.

- **Dictamen No. 353. Dictamen No. 353.** Acuerdo No. 28 de 21 de septiembre de 1994. **Grave perjuicio.**

Ver este Dictamen en *delito de Hurto (artículos 322 al 324)*.

Robo con violencia o intimidación en las personas (artículo 327)

- **Dictamen No. 273.** Acuerdo No. 69 de 21 de julio de 1987. **Continuidad. Robo y hurto.**

Los delitos de robo con violencia y hurto, no se funden nunca en un solo delito de carácter continuado, habida cuenta que en sus formas de comisión, no guardan similitud en su ejecución, lo que constituye un requisito para declarar la continuidad.

* En el Dictamen se aclara, que apreciar la continuidad en el caso consultado —delitos de robo y hurto—, además de ser incorrecto por la razón expuesta, conlleva a sancionar más severamente, que en caso de reprimir cada delito por separado, afirmando que lo que se pretende con la aludida institución “es beneficiar al reo”.

- **Dictamen No. 318.** Acuerdo No. 9 de 19 de febrero de 1991. **Robo con violencia. No puede ser continuado en caso de víctimas diferentes.**

En el caso del delito de robo con violencia o intimidación en las personas (artículo 327), no es posible declarar la continuidad cuando se trata de distintas víctimas, porque además de atacar bienes patrimoniales, se lesionan derechos inherentes a la persona misma, como la integridad corporal o la libertad (artículo 11.2).

* Recuerdo haber formulado esta consulta. En el **Glosario** de términos jurídicos del *Anteproyecto de Código Civil*, publicado bajo el término “Derechos de la personalidad”, se expresa:¹⁵ «(También se les llaman derechos inherentes a la personalidad): la vida, la integridad física, la libertad, la dignidad, el honor, el derecho al nombre, a la propia imagen, etc. (la Constitución, en su artículo 123, párrafo inicial e inc. “d”, establece el amparo de estos derechos entre los principales objetivos de la actividad de los Tribunales)».

¹⁵ *Vid.*, a propósito, COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR (s. f.): *Anteproyecto de Código Civil*, Ciudad de La Habana, p. 4.

- **Dictamen No. 391.** Acuerdo No. 331 de 28 de diciembre de 1999. **Determinación.** “[...] inmediatamente después de cometido el hecho [...]” (artículo 327.2 a). **Diferencia con el atentado (artículo 142.1 y 2).**

El término empleado en el tipo penal, “inmediatamente después de cometido el hecho”, ha de entenderse como que “la violencia o amenaza de inminente violencia” con las finalidades descritas, tiene que ser a continuación del acto de la sustracción.

En caso que la víctima objeto de una sustracción de bienes, transcurrido un tiempo —en otro momento—, encuentre al autor del hecho con el objeto sustraído, y este le impida mediante la violencia o amenaza, recuperar lo que le pertenece, incurre en el delito de atentado, de la modalidad del apartado 2 del artículo 142; pues la víctima en ese momento, estaba contribuyendo a la aplicación de las leyes; y por tanto, pasa a ser un agente pasivo de este delito.

* El Dictamen es parco en su explicación, y me surge la duda siguiente: ¿Para la integración del citado delito de atentado, basta con que la víctima se limite, a intentar recuperar o recuperar, el bien que le fue sustraído; o es necesario un propósito ulterior, el de someter al malhechor a la persecución penal para que responda de sus actos? Me inclino por la segunda interpretación, de acuerdo con el Título y delito, aunque el Dictamen no hace distinción.

La comentada modalidad del delito de atentado, no estaba comprendida en el Código de 1979, ni en la versión original del Código en uso, fue fruto de una modificación legislativa en 1994.

- **Dictamen No 415.** Acuerdo No. 3 de 15 de enero de 2002 (artículo 327.1.4 ch). **Pluralidad de participantes (artículo 51).**

Ver en Robo con fuerza en las cosas.

- **Dictamen No. 417.** Acuerdo No. 129 de 6 de septiembre del 2002. **Determinación. Modalidad agravada de robo con violencia por reincidencia. Reincidencia. Acuerdo No. 239 de 1999.**

En el delito de robo con violencia, en su forma agravada (artículo 327.1.4ch), por haber sido sancionado el autor con anterioridad, en virtud de cualquiera de los invocados tipos penales —modalidad básica, agravada o privilegiada, de robo con violencia o con fuerza—, no es posible emplear nuevamente el dato de la sanción precedente —ya utilizado para agravar el tipo— con el propósito de apreciar la reincidencia específica (artículo 55.1.3.a), pues lo prohíbe la regla del apartado 2 del artículo 47, ni siquiera en aquellos casos en que se eligió el marco sancionador de la figura básica, por haberse aplicado el Acuerdo No. 239 de 8 de octubre de 1999 del CGTSP.

* ¿Cómo proceder en los casos siguientes?

El autor había sido sancionado por varios delitos de robo con fuerza o violencia; o por delitos de la misma especie —diferentes a los señalados robos—; o como consecuencia de un delito de la misma especie y otro de índole diferente; o por varios delitos de naturaleza distinta.

Ver en delito de Hurto (artículos 322 al 324) el Dictamen No. 299 de 1989 y los comentarios al mismo.

Robo con fuerza en las cosas (artículo 328 y 329)

- **Instrucción No. 165 de 12 de abril de 2001. Bienes de considerable y limitado valor (artículos 328.2 ch y 329.1).**

Son bienes de considerable valor —artículo 328.2 ch—, aquellos cuya cuantía es superior a dos mil pesos; y de limitado valor —artículo 329.1—, los de hasta quinientos pesos.

* Para la determinación del valor de los bienes, ver los Dictámenes No. 353 de 1994 y 394 de 2000, en *Título X, La declaración y ejecución de las obligaciones civiles provenientes del delito*.

- **Dictamen No. 273.** Acuerdo No. 69 de 21 de julio de 1987. **Robo y hurto. No pueden ser continuados por sus diferentes formas de comisión.**

Los delitos de robo con fuerza y hurto, no se funden nunca en un solo delito de carácter continuado, habida cuenta que en sus formas de comisión, no guardan similitud en su ejecución, lo que constituye un requisito para declarar la continuidad.

* En el Dictamen se aclara, que apreciar la continuidad en el caso consultado —delitos de robo y hurto—, además de ser incorrecto por la razón expuesta, conlleva a sancionar más severamente, que en caso de reprimir cada delito por separado, afirmando que lo que se pretende con la aludida institución “es beneficiar al reo”.

- **Dictamen No. 302.** Acuerdo No. 22 de 14 de febrero de 1989. **Elevada peligrosidad (artículo 329.1).**

La peligrosidad social de un hecho criminoso, se manifiesta a través de factores provenientes del hecho en sí mismo, o de su autor o autores. Del hecho en sí mismo, por la forma en que se llevó a cabo, los medios empleados, o los resultados lesivos que produjo. En cuanto a su autor o autores, por sus características personales, antecedentes penales, conducta social, o particular forma de actuar en su ejecución.

Ver en *El concepto de delito (artículo 8) la Instrucción No. 115 de 20 de junio de 1984*.

- **Dictamen No. 415.** Acuerdo No. 3 de 15 de enero de 2002 (artículo 328.1 y 3 b). **Pluralidad de participantes (artículo 51).**

El tipo cualificado de robo con fuerza en las cosas, previsto en el artículo 328 (apartado 3, inciso b); “si el hecho se ejecuta por una persona que con anterioridad ha sido sancionada por el delito de robo con fuerza en las cosas o de robo con violencia o intimidación en las personas”; sólo abarca a los autores o cómplices en quienes concurren el descrito elemento de agravación, en cuanto a los demás —no comprendidos en dicho supuesto— responden por las modalidades penales que correspondan, lo que se fundamenta en el artículo 51.

- **Dictamen No. 417.** Acuerdo No. 129 de 6 de septiembre del 2002. **Determinación. Modalidad agravada de robo con fuerza por reincidencia. Reincidencia.** Acuerdo No. 239 de 1999.

En el delito de robo con fuerza, en su formas agravada (artículo 328.1.3b), por haber sido sancionado el autor con anterioridad, en virtud de cualquiera de los invocados tipos penales —modalidad básica, agravada o privilegiada, de robo con violencia o con fuerza—, no es posible emplear nuevamente el dato de la sanción precedente —ya utilizado para agravar el tipo— con el propósito de apreciar la reincidencia específica (artículo 55.1.3.a), pues lo prohíbe la regla del apartado 2 del artículo 47, ni siquiera en aquellos casos en que se eligió el marco sancionador de la figura básica, por haberse aplicado el Acuerdo No. 239 de 8 de octubre de 1999 del CGTSP.

* ¿Cómo proceder en los casos siguientes?

El autor había sido sancionado a tenor de varios delitos de robo con fuerza o violencia; o por delitos de la misma especie —diferentes a los señalados robos—; o a consecuencia de un delito de la misma especie y otro de índole diferente; o por varios delitos de naturaleza distinta.

Ver en delito de *Hurto (artículos 322 al 324)*, el *Dictamen No. 299 de 1989 y los comentarios al mismo*.

Usurpación (artículo 333)

- **Dictamen No. 359.** Acuerdo No. 16 de 4 de abril de 1995. Acuerdo aclaratorio No. 37 de 7 de agosto de 1995. **Determinación. Ocupación ilegal de tierras o viviendas.** La ocupación o apoderamiento ilegal —sin empleo de violencia o intimidación—, de una vivienda, no integra la modalidad básica del delito de usurpación (artículo 333.1), por encontrar solución ese conflicto en la Ley No. 65 de 23 de diciembre de 1988, “Ley General de la Vivienda”. Tampoco la ocupación de terrenos agropecuarios, corporifica el citado delito, ya que esa situación está regulada y encuentra solución en el Decreto-ley No. 125 de 30 de enero de 1991 y su correspondiente Reglamento. Este tipo penal queda reservado para la ocupación o apoderamiento ilegítimo de terrenos o solares yermos —ubicados en zonas urbanas—, o de otros bienes inmuebles, carentes de protección en las mencionadas legislaciones administrativas.

Estafa (artículo 334)

- **Instrucción No. 109 de 27 de abril de 1983 (Apartado Tercero). Comiso. Efectos del delito.**
Cuando, en causas seguidas por el delito de estafa, la defraudación proviene de un acto jurídico celebrado de común acuerdo entre el victimario y la víctima, en contra de una prohibición legal, o de los intereses de la sociedad y del Estado; o incumpliendo formalidades legales —establecidas con carácter de requisito esencial,— y nulo, por tanto, desde el punto de vista del Derecho civil, no puede hacerse declaración sobre responsabilidad civil en beneficio de la víctima en la sentencia, más lo que hubiese recibido el autor del delito —en virtud de dicho acto— se decomisa y pasa al patrimonio del Estado, en concepto de efectos del delito.
- **Instrucción No. 165 de 12 de abril de 2001. Bienes de considerable valor (artículo 334.3).**
Se estiman bienes de considerable valor, aquellos de cuantía superior a cinco mil pesos.
* Para la determinación del valor de los bienes, ver los Dictámenes No. 353 de 1994 y 394 de 2000, en *Título X, La declaración y ejecución de las obligaciones civiles provenientes del delito*.
- **Dictamen No. 281.** Acuerdo No. 125 de 8 de diciembre de 1987. **Determinación. Recuperación de lo defraudado.**
La circunstancia de recuperarse parte del dinero defraudado a la víctima de un delito de estafa, no convierte este delito en otro de menor cuantía.
- **Dictamen No. 353.** Acuerdo No. 28 de 21 de septiembre de 1994. **Grave perjuicio.** Ver este Dictamen en el *delito de Hurto (artículos 322 al 324)*.

Apropiación indebida (artículo 335)

- **Instrucción No. 165 de 12 de abril de 2001. Bienes de considerable valor (artículo 335. 2).**

Se estiman bienes de considerable valor, aquellos de cuantía superior a dos mil pesos.

* Para la determinación del valor de los bienes, ver los Dictámenes No. 353 de 1994 y 394 de 2000, en *Título X, La declaración y ejecución de las obligaciones civiles provenientes del delito*.

Malversación (artículo 336)

- **Instrucción No. 55 de 19 de noviembre de 1975. Funcionario público.**

A los efectos de la calificación del delito de malversación —previsto en los artículos 420 y siguientes del CDS— debe entenderse por funcionario público a la persona que entre las actividades concernientes, al cargo que desempeña, se encuentra la administración, recaudación, custodia, uso, depósito o disposición de caudales o efectos pertenecientes o destinados a organismos del Estado, o institutos creados por este y a sus empresas o unidades de producción o de servicios, a sus distintos niveles.

* La Instrucción carece de vigencia, la he colocado por su valor en la interpretación de este delito.

- **Instrucción No. 165 de 12 de abril de 2001. Bienes de considerable y limitado valor (artículo 336.2 y 336.3).**

Se estiman bienes de considerable valor, aquellos de cuantía superior a diez mil pesos, y de limitado valor; inferior a mil pesos.

* Para la determinación del valor de los bienes, ver los Dictámenes No. 353 de 1994 y 394 de 2000, en *Título X, La declaración y ejecución de las obligaciones civiles provenientes del delito*.

- **Dictamen No. 331. Acuerdo No. 31 de 29 de julio de 1992. Determinación Responsabilidad material.**

Se incurre en el delito de malversación, en la modalidad de limitado valor —inferior a mil pesos— (artículo 336.1 y 3), al no proceder las disposiciones relativas a la responsabilidad material (Decreto-ley No. 92), aun cuando el monto de la defraudación no rebase el límite fijado para su posible aplicación.

* En fecha próxima, entrará en vigor el Decreto-ley No. 249 de 23 de julio de 2007, que deroga el Decreto-ley No. 92 de 22 de mayo de 1986.

- **Dictamen No. 419. Acuerdo No. 201 de 29 de octubre de 2002. Entidades privadas. Unidades Básicas de Producción Cooperativa. Requiere la denuncia del perjudicado o del representante legal de la entidad.**

En el concepto genérico de entidades privadas —previsto en el CP para el delito de malversación— se entenderán comprendidas todas aquellas entidades que no son estatales, o no aparecen expresamente recogidas en los respectivos preceptos penales, entre ellas, las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC).

Las actuales UBPC, creadas mediante el Decreto-ley No. 142, de 20 de septiembre de 1993, constituyen una forma de organización de la producción socialista, y están excluidas, por tanto, de la acción de oficio del Estado para la persecución del delito de malversación y otros comprendidos en el Título V, Delitos contra la economía nacional, que se cometan en esas entidades, y para cuyo conocimiento se requiere la formulación de la denuncia por persona legitimada, como requisito de procedibilidad.

A los efectos de denunciar el delito, están legitimados el administrador que es su representante legal, o en quien este delegue a esos fines; también, la Junta de Administración o Asamblea General, por acuerdo de estas dos últimas.

En cuanto al concepto de perjudicado —asimismo facultado para denunciar— se encuentra comprendido cualquier miembro de esta unidad, o —incluso— el representante de la entidad estatal que rectora a la UBPC, en cuyas tierras está constituida.

Receptación (artículo 338)

- **Instrucción No. 165 de 12 de abril de 2001. Bienes de considerable valor (artículo 338.3 b).**

Se estiman bienes de considerable valor, aquellos de cuantía superior a dos mil pesos.

* Para la determinación del valor de los bienes ver los Dictámenes No. 353 de 1994 y 394 de 2000, en *Título X, La declaración y ejecución de las obligaciones civiles provenientes del delito*.

- **Dictamen No. 345.** Acuerdo No. 31 de 2 de junio de 1993. **Conexidad procesal.**
El delito de receptación se configura en un momento posterior al hecho principal que lo propicia, por una persona distinta al autor del delito originario, el cual no tuvo participación en este acto ni concierto previo con su autor, por lo que sin excluir la posibilidad de excepciones, este delito no configura ninguno de los supuestos de la conexidad con algún otro tipo penal.
* Ejemplo de lo anterior es cuando, indebidamente, en un mismo expediente se conoce de uno o varios delitos de receptación, conjuntamente con el delito antecedente contra los derechos patrimoniales (hurto, robo o malversación).
- **Dictamen No. 364.** Acuerdo No. 33 de 30 de mayo de 1995. **Comiso.**

PRIMERO: La sanción accesoria de comiso de los efectos o instrumentos del delito, no contempla excepción de su empleo en ilícito penal alguno y teniendo vida propia el delito de receptación, le es de aplicación en lo atinente tal sanción accesoria.

Es requisito que los objetos sobre los cuales recaiga la sanción accesoria de comiso hayan servido como instrumento necesarios para la realización del acto ilegal, que en el caso de la consulta resultarían aquellos medios utilizados para adquirir, cambiar u ocultar bienes que el autor conocía, o debía suponer racionalmente que procedían de un delito; o resultan consecuencia, o provengan, directa o indirectamente, de ese actuar ilícito.

SEGUNDO: Los objetos susceptibles de comiso en virtud de este delito, han de resultar medios necesarios y útiles, empleados de manera expresa e intencional para poder adquirir, cambiar u ocultar los artículos cuyo autor conocía, o debía suponer, provenían de un delito anterior, y no basta con que su empleo resulte de la eventualidad del momento, o la habitualidad de su uso; de modo que en cada caso resulte necesario el análisis individualizado y la fundamentación correcta, y así determinar el empleo de esta sanción accesoria.

De lo anterior es preciso concluir —en cuanto a los medios de transporte empleados, que pueden ser objeto de comiso— el requisito de que concurra su elección de forma intencional, para poder materializar la adquisición, el cambio o la ocultación de aquellos artículos que su autor sabe que provienen de un delito o debe suponerlo. Ello excluye su aplicación mecanicista en casos en que la persona, habitualmente, emplea ese medio de transporte y este no resulta esencial para ejecutar el hecho, o cuando el momento de consumación

de este acto punible se produce de modo casual, en la oportunidad en que su autor se traslada en un medio de transporte, sin que esta circunstancia haya sido elegida expresamente con ese propósito.

* Por la importancia del contenido del Dictamen lo he transcrito de manera íntegra.

- **Acuerdo No. 54 de 24 de abril de 1984. Determinación.**

La cuestión sometida a consulta, se halla específicamente prevista en el artículo 401 del CP, a cuyas prescripciones debe ajustarse el Tribunal en la solución de los casos.

* La consulta consiste en conocer, si el hecho de poseer bienes sin que se tenga título o documento justificativo de su tenencia, constituye el delito de receptación. Con razón, en el Acuerdo se expresa que basta la lectura del tipo para encontrar la respuesta, pues tanto en el artículo 401 del CP de 1979, como en el 338 del actual, se exige que los bienes adquiridos, cambiados u ocultados en interés propio, procedan de un delito.

- **Acuerdo No. 6 de 12 de enero de 1988. Responsabilidad civil por el delito antecedente.**

Los receptadores no responden por los daños y perjuicios causados por el delito antecedente, ya que la receptación es un delito totalmente independiente de aquel.

Daños (artículos 339 y 340)

- **Instrucción No. 165 de 12 de abril de 2001. Bienes de considerable y limitado valor (artículo 339. 2 y 3).**

Se estiman bienes de considerable valor, aquellos de cuantía superior a tres mil pesos, y de limitado valor, inferior a mil pesos.

* Para la determinación del valor de los daños, ver los Dictámenes No. 353 de 1994 y 394 de 2000, en *Título X, La declaración y ejecución de las obligaciones civiles provenientes del delito*.

- **Dictamen No. 231. Acuerdo No. 99 de 25 de junio de 1985. Imprudencia. Prueba pericial.**

El delito de daños puede cometerse por imprudencia. En cualquiera de sus manifestaciones —por intención o imprudencia—, se precisa la determinación pericial de su magnitud, tanto a los fines de la calificación delictiva, como de la posible responsabilidad civil. Los peritos pueden ser designados, bien por la Policía o por el Tribunal.

- **Dictamen No. 255. Acuerdo No. 160 de 3 de diciembre de 1986. Modalidades. Imprudencia.**

El artículo 339, junto al tipo básico —apartado 1—, establece una forma calificada, con sanción agravada —apartado 2—, y una privilegiada, con sanción atenuada —apartado 3—. En cuanto al daño de considerable valor cometido por imprudencia, por aplicación del artículo 48, sería sancionable con privación de libertad de cinco días a un año y seis meses de privación de libertad, o multa de cinco a quinientas cuotas, o ambas.

* El Dictamen se refiere a la formulación del CP de 1979, por su utilidad, lo he llevado al Código actual, pues enseña como formar el nuevo marco penal, en el caso que el delito haya sido cometido por imprudencia.

- **Dictamen No. 353. Acuerdo No. 28 de 21 de septiembre de 1994. Grave perjuicio.** Ver este Dictamen en el *delito de Hurto (artículos 322 al 324)*.

Título XIV. Delitos contra la hacienda pública

- **Instrucción No. 158 de 1ro de diciembre de 1998.**

PRIMERO: Debe tomarse en cuenta que los delitos que aparecen en el Título XIV del Código Penal, denominados delitos contra la hacienda pública, específicamente los referidos a la evasión Fiscal que se refrendan en los artículos 343 y 344, tal y como quedaron modificados por el Decreto-Ley No. 175 de 17 de junio de 1997, establecen sanciones tanto en las figuras básicas como en las agravadas, superiores en todos los casos a un año de privación de libertad o multa de 300 cuotas.

SEGUNDO: De lo expuesto se colige que, tanto en unos casos como en los otros y de acuerdo con lo que la Ley de Procedimiento Penal establece en el artículo 384, los respectivos procesos —tomando en cuenta los marcos sancionadores— se tramitarán por el procedimiento ordinario, conforme a las disposiciones que regulan la Fase Preparatoria del juicio oral.

TERCERO: Como característica específica de estos delitos, se requiere el cumplimiento previo de un conjunto de acciones administrativas que agoten las normas generales establecidas para el Procedimiento Tributario. A tales efectos el Decreto Ley No. 169 de 10 de enero de 1997, dispone en su artículo 104 que cuando las infracciones tributarias pudieran ser constitutivas del delito de Evasión Fiscal, la Administración Tributaria dará cuenta del asunto a la autoridad competente.

CUARTO: En consecuencia, la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (en lo adelante ONAT) es la que se encarga de regular el procedimiento a seguir por los funcionarios y entidades subordinadas para materializar las denuncias por la posible comisión de los delitos señalados, por lo que, en estos casos, esa sería —en lo esencial— la vía mediante la cual se iniciaría el correspondiente proceso penal; es decir, la ONAT, partiendo de los elementos que haya reunido, cuando considere que cualquier infracción rebasa el ámbito administrativo y puede constituir un delito de Evasión Fiscal, formulará la correspondiente denuncia.

QUINTO: De conformidad con lo anterior, los Tribunales, al recibir las correspondientes conclusiones provisionales del Fiscal, comprobarán si en los expedientes de fase preparatoria constan los documentos, las diligencias y trámites necesarios que corroboren los elementos del tipo penal y, en su caso, devolverán las actuaciones a fin de que se cumpla con lo indicado en este requisito.

SEXTO: El Asesor o funcionario de la ONAT, será la persona que formulará la denuncia, a nombre y en representación de las mencionadas oficinas y por eso deberá figurar como testigo de cargo y si el Fiscal no lo propone como tal, el Tribunal, al dictar el auto de admisión de pruebas y señalamiento del juicio oral, deberá disponer de oficio el examen del mismo.

Es de considerar que este testigo resulta de vital importancia dados los elementos útiles de que dispone para demostrar si se integra o no el delito imputado; con independencia de que se valore también la posibilidad y conveniencia de que asistan otros testigos que aporten elementos sobre las diligencias que personalmente hayan realizado como funcionarios actuantes de la correspondiente oficina.

SÉPTIMO: A los efectos de una correcta interpretación y aplicación de las figuras específicas de los Delitos Contra la Hacienda Pública, es preciso tomar en cuenta los siguientes particulares:

- a) sobre la figura prevista en el artículo 343-1, para que pueda subsumirse una conducta en este tipo penal se requiere:
- Haberse determinado previamente la deuda tributaria
 - Haberse requerido al tributador mediante la notificación correspondiente.
- b) Sobre la figura prevista en el apartado segundo del referido artículo 343, debe tomarse en cuenta que aquí se está refiriendo a una deuda que aún no se ha determinado, por lo que se trata de falsedades cometidas por el contribuyente para ocultar, omitir o tergiversar la real existencia y ascendencia de la contribución que le corresponde, y por tanto no es menester que se haga el requerimiento previo por parte, del funcionario competente, ni esperar el vencimiento de plazo alguno. En este supuesto el ánimo del comisor busca hacer mutaciones a la verdad para evitar que la Administración Tributaria fije el real alcance de su deuda, la cual todavía no se ha cuantificado, mientras en el apartado primero el ánimo es evadir o intentar evadir una deuda que ya se ha delimitado. Por lo expuesto se trata de un delito intencional.
- c) Sobre la figura prevista en el artículo 343-3, aunque de su simple lectura puede pensarse que se trata de cualquier persona natural o jurídica contribuyente, ésta debe tener la responsabilidad de aportar total o parcialmente al Fisco cantidades retenidas o percibidas por los conceptos a que se refiere al apartado PRIMERO, es decir, por el pago de impuestos, tasas, contribuciones o cualquier otra obligación de carácter tributario, por lo que se trata de los retentores o perceptores que están definidos en los artículos 35 y 36 del Decreto-Ley No. 169 de 1997, antes referido, por tanto este delito puede ser cometido también por imprudencia.
- En estos casos la administración tributaria deberá dejar transcurrir un período de 30 días naturales contados a partir de la fecha en que debió efectuarse el pago al Fisco, a los efectos de formular después la denuncia correspondiente.
- ch) Sobre la figura prevista en el artículo 344-1 del Código Penal, deberá tomarse en cuenta que el agente activo del delito será el funcionario que esté obligado a registrar y al mismo tiempo informar sobre el cálculo, determinación o pago de tributos y así oculte, omita o altere la verdadera información por lo que se trata de cualquier funcionario, sobre todo de los **inspectores, auditores, supervisores** o cualquier otro funcionario de la administración tributaria, en quien se delegue estas funciones. Esta figura es eminentemente intencional.
- d) Sobre la figura prevista en el artículo 344-2 del Código Penal se tendrá presente que constituye una figura agravada del apartado Primero, si como consecuencia de su comisión se ocasionan **perjuicios considerables a la economía nacional**, perjuicios que deberán valorarse por el Tribunal según su criterio racional y fundado en los elementos de prueba que se sean aportados.
- e) Sobre la figura prevista en el artículo 344-3 del Código Penal debe tenerse presente que, en esencia constituye una extensión de la sanción imponible a los que incurrir en los hechos previstos en el apartado primero, siempre que obtengan beneficios del acto, bien para sí, bien para un tercero, conociendo previamente de la comisión del hecho delictivo o debiendo haberlo previsto; es decir, se trata de la persona que se favorezca de cualquier manera del acto punible o favorezca a un tercero con la obtención de tales beneficios, y por tanto la conducta es intencional.

f) Sobre la figura del artículo 345 del Código Penal, sólo cabe reiterar que se trata de una facultad discrecional del Tribunal y que, de imponerse esta sanción accesorio, la sentencia deberá señalar los bienes de que se trata y la forma en que se hará efectiva su entrega.

OCTAVO: Si en cualquier momento anterior o después de radicada una causa por un delito de Evasión Fiscal, el procesado abonara en su totalidad el monto de la deuda al Fisco y esta información fuere corroborada por la oficina correspondiente de la administración tributaria, el Tribunal tomará en cuenta esta cuestión, para evaluarla en el conjunto de situaciones que presente el caso, y adoptará la decisión que estime procedente de acuerdo con la Ley.

- Haberse vencido el plazo concedido de diez días (10) hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación del requerimiento para el pago de la deuda tributaria efectuado por el funcionario competente.
- Que el obligado (persona natural o jurídica) evada o haya intentado evadir, total o parcialmente, el pago de impuestos, tasas, contribuciones, o cualquier otra obligación de carácter tributario a que esté sujeto de modo que la evasión o intento de evasión implique la ocupación de los bienes o de la persona, así como cualquier forma de obstrucción a la acción de la Administración Tributaria para llevar a cabo el procedimiento previsto.

Debe entenderse por ocultación de bienes toda acción tendente a impedir que la referida entidad comience a tomar relación o embargar los bienes procedentes. Por ocultación de la persona se considerará cualquier vía que emplee el contribuyente para evitar que se le notifique y así indebidamente paralizar el proceso administrativo que se le sigue.

Lo anterior no implica que en la práctica se puedan originar otras conductas susceptibles de ser concebidas como evasión o intentos de evasión al Fisco y por eso debe dejarse abierta esa posibilidad, pero lo que sí debe quedar muy claro es que cualquier acto de esta naturaleza suele cometerse y observarse en el período ejecutivo, y más concretamente durante la vía de apremio, de lo cual se deduce que el inicio del procedimiento de recaudación en período ejecutivo forzoso y la denuncia ante la autoridad competente, no ocurren al unísono sino que esta última debe producirse luego de que el contribuyente ejecute actos que exterioricen la intención de evadir su obligación, haya o no conseguido su propósito en un momento dado.

El Tribunal debe valorar y fundamentar debidamente la evasión o la intención de evadir el pago al Fisco sobre la base de los propios actos del obligado. Como se aprecia, esta figura delictiva no es susceptible de cometerse por imprudencia.

* Por la extensión del documento, y lo particular del tema, lo transcribo de manera total.

Título XV. Delitos contra el normal tráfico migratorio

- No encuentro disposición al respecto.

Abreviaturas

CDS	Código de Defensa Social de 1936
CGTSP	Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular
CP	Código Penal
FAR	Fuerzas Armadas Revolucionarias
FGR	Fiscalía General de la República
TMP	Tribunal Municipal Popular
TPP	Tribunal Provincial Popular
TSP	Tribunal Supremo Popular
LPCAL	Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral de 1977
LECrim	Ley de Enjuiciamiento Criminal española de 1882
LPP	Ley de Procedimiento Penal de 1977
MININT	Ministerio del Interior
PNR	Policía Nacional Revolucionaria